



REF.:

REF.C.M.:

ANTEPROYECTO DE LEY DEL DEPORTE

PREÁMBULO

El modelo deportivo español ha estado sujeto a una evolución constante fruto de los continuos y vertiginosos cambios que afectan a este fenómeno social, que cada día extiende la práctica deportiva a un mayor número de ciudadanos y ciudadanas, y alcanza una proyección en la sociedad que difícilmente se preveía hace pocas décadas. El deporte se erige hoy en día no sólo como una actividad humana enormemente enriquecedora y generadora de bienestar personal, también constituye un importante instrumento de cohesión social, un eficaz vehículo para la transmisión de valores y un sólido elemento de impulso económico.

La Constitución, en su artículo 43.3, realiza un mandato de fomento de la educación física y el deporte a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política económica y social, y es con el objeto de su cumplimiento con el que se persigue la aprobación de una nueva Ley del Deporte, regulando todos aquellos aspectos en los que no corresponde a las Comunidades Autónomas legislar de acuerdo a lo establecido en el artículo 148.1.19º de la Carta Magna.

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, ha estado muy próxima a cumplir treinta años de vigencia. Su antecesora, la Ley 13/1980, de 31 de marzo, General de la Cultura Física y del Deporte, apenas estuvo vigente una década, lo que indica el dinamismo del fenómeno deportivo y la necesidad de ajustar el marco regulador a la realidad que requiere su ordenación. El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, impele al legislador a la aprobación de una nueva Ley del Deporte, que regule todos aquellos aspectos que le afectan y que son competencia del Estado, incorporando los necesarios mecanismos de coordinación, colaboración y cooperación con las Comunidades Autónomas en aquellos aspectos que lo requieren, en aras del respeto al reparto competencial que nuestra Constitución realiza y de la eficacia en la acción de promoción del deporte.

Actualmente la realidad del deporte es muy diferente a la existente en el año 1990, con una actividad deportiva mucho más desarrollada y con un elevado grado de profesionalización a todos los niveles. Con una evolución que provoca que la vigente regulación haya devenido insuficiente para atender todas las demandas que presentan los agentes del deporte. Y esta referencia se debe entender dirigida a todos los estamentos: deportistas, técnicos deportivos o entrenadores, federaciones, ligas, clubes, organizadores de competiciones y actividades deportivas y el propio Consejo Superior de Deportes,



cuya estructura legal distaba mucho de ser la que las normas administrativas recientemente aprobadas exigen y la que se requiere para dar cumplimiento eficaz a sus funciones.

Este cambio, tiene carácter transversal y afecta a todos los ámbitos vinculados al fenómeno deportivo: el de la propia práctica y sus diferentes fórmulas, el económico, laboral, turístico, comunicativo, educativo, sanitario y social. El análisis de los diferentes datos derivados del deporte en España resalta su transformación y la necesidad de adaptar la normativa vigente a su situación actual, necesidad que el propio sector deportivo ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones a lo largo de los últimos años.

I

El primer reto que debe afrontar esta Ley es el reconocimiento de la actividad física y el deporte como **derecho de toda la ciudadanía**, y así se recoge en el artículo 2 de esta Ley. De esta forma, la actuación de los poderes públicos en esta materia debe girar en torno al respeto y el ejercicio de este derecho, y el contenido de esta Ley se orienta a su garantía y a su disfrute pleno y eficaz.

La legislación vigente hasta la fecha no cumplía con la necesidad ineludible de alcanzar la **igualdad efectiva** en el seno del deporte, que debe ser entendida como **igualdad de acceso a la práctica deportiva y a los puestos de carácter técnico y directivo**. Hoy en día asistimos al crecimiento imparable del papel de las mujeres en el deporte sin que el ordenamiento jurídico responda de idéntica forma a este fenómeno. Esta Ley permite que las distintas modalidades y especialidades deportivas, con independencia del sexo de sus deportistas, puedan ser profesionales en unas condiciones que garanticen la viabilidad y estabilidad de las competiciones en las que participen. Además, las entidades deportivas deberán equilibrar la presencia de hombres y mujeres en sus órganos directivos, dando cumplimiento así a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Tampoco podía mantenerse el Estado sin respuesta ante la merma de derechos que las mujeres deportistas sufren al quedarse embarazadas, tales como la pérdida de ayudas y subvenciones bajo el pretexto de no haber competido, reducción de sus derechos como miembros de entidades deportivas como pérdida del derecho a voto en las Asambleas Generales de las federaciones deportivas, así como las dificultades manifiestas a la hora de la conciliación y la reincorporación a la actividad deportiva tras la maternidad. Para ello, las deportistas mantendrán sus derechos de voto aun cuando no cumplan los requisitos generales establecidos en la Ley, especialmente los que exigen el mantenimiento de un tiempo mínimo de la licencia o de la práctica de la actividad deportiva, y conservarán sus derechos como deportistas de alto nivel una vez transcurrido este periodo, sin perjuicio de la necesidad de implementación de políticas activas que asienten estos principios. Todo ello se complementa con más medidas de fomento de la igualdad, especialmente en el artículo 4 de esta Ley, pero también en los derechos y deberes de las personas deportistas.

El segundo gran eje de impulso de las políticas en materia deportiva de esta Ley es la promoción del deporte inclusivo y por personas con discapacidad. Con deporte inclusivo nos referimos a toda actividad física o práctica deportiva que favorece la inclusión de las personas con discapacidad en la



sociedad, jugando un papel importante aquellas actividades que prevén la práctica deportiva conjunta entre personas con y sin discapacidad, y siempre buscando la igualdad de oportunidades y condiciones entre personas con y sin discapacidad en el ámbito del deporte. La igualdad en el deporte no se consigue exclusivamente garantizando que hombres y mujeres puedan disfrutar de su práctica y de los beneficios aparejados al mismo de forma idéntica, sino que es necesario que todos tengan esta posibilidad, incluyendo las personas deportistas con discapacidad. Se pretende que la integración de todas las personas deportistas en estructuras organizativas comunes sea una herramienta de cohesión, abriendo la vía a la participación en los órganos de gestión y de gobierno. Por ello, esta Ley pretende facilitar la integración de todas las personas deportistas bajo la misma federación y la remoción de obstáculos que segregan a aquellas de acuerdo a sus condiciones. Siendo considerado el deporte inclusivo y los programas que lo desarrollen de interés general, como lo será también más adelante el deporte de alto nivel.

De esta forma, además de fomentar que aquellas federaciones que lo deseen puedan instrumentalizar modelos de integración para personas con discapacidad, de manera que a ellas se incorporen todas las personas que practican una misma modalidad deportiva, se establece la obligatoriedad de la integración de las modalidades de personas con discapacidad en la federación deportiva española cuando así se haya hecho en la correspondiente federación internacional. Esta obligación debe ser acompañada por un mandato dirigido a las federaciones autonómicas, que no podrán integrarse en la correspondiente federación estatal si no han hecho lo señalado al principio de este párrafo en su respectivo ámbito territorial.

Se pretende así aprovechar las estructuras de la federación deportiva de la modalidad respectiva para permitir el crecimiento de la práctica desarrollada por personas con discapacidad, garantizando la participación de deportistas con discapacidad en las competiciones internacionales correspondientes y, lo que es más importante, consagrar la igualdad de este colectivo en el acceso a la práctica deportiva. Por ello, se establece la necesidad de una representación ponderada en los órganos de gobierno de las federaciones que hayan integrado modalidades de deporte de personas con discapacidad con el objetivo de garantizar voz y voto de todas las personas deportistas.

Tampoco puede esta Ley olvidarse, en esta búsqueda de la igualdad real y efectiva, de los derechos del colectivo de personas LGTBIQ. Se ha podido comprobar en muchas ocasiones las dificultades que estas personas tienen para expresarse con libertad, por lo que la regulación debe atender a dos criterios esenciales; eliminar cualquier clase de discriminación, cuya protección debe ser encomendada a la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte; y lograr que la práctica deportiva se pueda hacer en igualdad de condiciones, con independencia de su orientación sexual, identidad sexual o expresión de género.

Existen motivos suficientes por los que los poderes públicos están obligados a fomentar la actividad física y el deporte. Y deben hacerlo garantizando unas condiciones de seguridad idóneas que reflejen en las personas todos los beneficios que conlleva la actividad deportiva, desde la salud hasta los efectos positivos a nivel social, permitiendo el desarrollo de la personalidad y de los valores que van a repercutir de manera fundamental en la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas. Así, la Ley ha de dotar a los poderes públicos de la posibilidad de poner en marcha planes y políticas orientados



a la consecución de dicho fin, tanto impulsados desde la propia Administración como desde las entidades deportivas, y para ello se deberá establecer la fijación de condiciones mínimas de seguridad de los recintos deportivos, de las competiciones deportivas, de la práctica deportiva en general y la implementación de programas de colaboración con las federaciones deportivas en la promoción y desarrollo de sus modalidades, así como la consecución de unos mínimos hábitos saludables por parte de la ciudadanía, prestando especial atención a las personas menores de edad y a las personas mayores.

II

Parece innegable la necesidad de que la puesta en práctica de políticas en materia de deporte sea consensuada entre todos los actores intervinientes. En primer lugar, con el resto de Administraciones Públicas, ya que esta Ley no puede olvidar el reparto de competencias que establece la Constitución, y la redacción de este texto normativo atiende, con máximo rigor, al respeto de las mismas de acuerdo a lo asumido en los respectivos Estatutos de Autonomía.

Pero la realidad del deporte implica, necesariamente, una actuación coordinada de todos los poderes públicos. Por ello, esta Ley postula la Conferencia Sectorial de Deporte, como órgano de cooperación, colaboración y coordinación y como elemento de interlocución entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, con la participación de las Entidades Locales, fijando algunos objetivos que se han considerado esenciales desde el respeto a las competencias propias y sin menoscabar sus posibilidades de actuación.

También juegan un papel esencial las Entidades Locales, trascendentales a la hora de promover y fomentar la práctica de la actividad deportiva como gestoras del territorio y propietarias de un número mayoritario de instalaciones deportivas, mediante la habilitación de espacios para la actividad deportiva, por lo que, desde el respeto a sus competencias, la Ley del Deporte ha de canalizar de manera común las necesidades de los municipios en aras de cumplir los objetivos que la Constitución marca, especialmente en lo relativo a la calidad y seguridad de las instalaciones deportivas.

III

El objeto y los principios rectores de esta Ley, expresan con nitidez lo expuesto hasta ahora. Además se establece el deporte de alto nivel y la representación del deporte español como cuestiones de interés público, por la proyección de España a nivel internacional que ello supone y que tiene su reflejo no solo a nivel deportivo, sino en muchos otros sectores de la economía que favorecen el crecimiento del Estado.

Todo ello ha de hacerse con un esquema claro de competencias por parte de los diversos actores, tanto públicos como privados. Por ello, se procede a detallar con mayor claridad el régimen de competencias que el Consejo Superior de Deportes ostenta como propias, cuáles delega en las federaciones deportivas y otras entidades recogidas en la Ley y cuales se atribuyen a estas últimas como propias, evitando que tenga que solucionarse en la jurisdicción ordinaria quiénes deciden o ejecutan determinados aspectos esenciales.



Especial atención, en cuanto a las competencias del Consejo Superior de Deportes, representan las relativas al control económico, financiero y administrativo de las entidades deportivas. Con ello no se pretende dificultar o administrativizar la gestión de las entidades deportivas, sino proponer un elemento de ayuda, un instrumento de colaboración, que mejore sus propias herramientas de gestión económica y administrativa con el objetivo de evitar situaciones que hagan peligrar su futuro y el del desarrollo de la modalidad deportiva a cuya promoción se dedican.

IV

Se considera como elemento fundamental de esta Ley a las personas que practican deporte en todos sus niveles. Regular su estatus, sus derechos y obligaciones y garantizar su estabilidad personal tanto durante la actividad deportiva como una vez finalizada aquella han de ser la prioridad de los poderes públicos. Ello se garantiza definiendo con nitidez las necesidades de las personas deportistas, por lo que sus derechos y obligaciones deben ir en consonancia con las características específicas que se derivan de su clasificación.

Así, se ha dispuesto incorporar a una norma con rango de Ley la definición de deportista profesional, concepto esencial de una regulación deportiva que no puede estar recogida, como sucede hasta la fecha, en un Real Decreto. En dicha definición se amplía el concepto que figura en la normativa específica, que circunscribía esta posibilidad a aquellos que tenían una relación laboral por cuenta ajena. Con esta clasificación, esta última definición se limitará a la normativa laboral pero, al resto de efectos, serán deportistas profesionales quienes participen en una competición deportiva, estén dadas de alta en el correspondiente régimen y perciban ingresos por participar en aquella de forma habitual, ya sea por cuenta propia o ajena; es decir, serán aquellas personas que se dediquen especialmente a la actividad deportiva y sean remunerados por ello, sin perjuicio del fomento de la carrera dual que pervive a lo largo de toda la norma.

También se define la figura de la persona deportista no profesional, como aquel o aquella que se dedica a la práctica deportiva en el ámbito de una entidad, pero que no tiene relación laboral con esta y perciben, como límite, la compensación de los gastos que les supone dicha práctica.

Además, se define quiénes son deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, y especialmente a que Administración Pública compete la calificación, haciéndose mención a una figura muy extendida en algunos deportes en la actualidad, como es la persona deportista ocasional, que se configura como la persona que obtiene una licencia de manera específica para la participación en una actividad concreta.

Identificada la tipología de deportistas, la Ley aborda detalladamente los derechos y obligaciones que tienen las personas deportistas por el mero hecho de serlo, para posteriormente concretar aquellos de acuerdo a las condiciones individuales de cada supuesto. Por ello se recoge una serie detallada de derechos y deberes de las personas deportistas de forma genérica, orientados a la libre práctica deportiva sin discriminación, en condiciones de seguridad y de respeto de los derechos que el ordenamiento jurídico ya reconoce de forma general a todas las personas.



Posteriormente, el texto indica derechos específicos emanados del hecho de estar en posesión de una licencia federativa –relativos a representación y participación en las decisiones e información sobre la situación de la federación-, así como de las personas deportistas de alto nivel y profesionales, por las especialidades que su situación tiene.

Resulta especialmente reseñable la previsión que hace esta Ley de **mantener la condición de deportista de alto nivel durante los cuatro años posteriores al último en el que la persona cumplió los requisitos** para ser calificada como tal, lo que permitirá poder **favorecerse de los derechos que esta condición otorga una vez se haya producido la retirada** o, por cualquier otra causa, no puedan mantenerse los resultados deportivos. Entre esos derechos no solo están los recogidos por esta Ley, sino también, por ejemplo, los dispuestos en la Disposición adicional undécima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que permitirá a las personas deportistas de alto nivel disfrutar de la reducción de la base imponible por aportaciones a las mutualidades de previsión social de deportistas profesionales durante el periodo indicado. No obstante, se permite que la persona deportista pueda elegir sobre mantener esta condición, para que puedan disponer de los derechos consolidados que establece dicha disposición adicional.

No obstante, el reconocimiento legal de estos derechos no debe agotar el esfuerzo que conviene realizar por su cumplimiento; el desarrollo reglamentario debe profundizar en la forma de ejercitar los mismos y, por supuesto, supone un mandato a todas las entidades deportivas y Administraciones Públicas de adaptar su funcionamiento y sus actuaciones al respeto de estos derechos.

Junto a todo lo anterior, se procede a suprimir el Título III de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva y a introducir en esta Ley aquellas competencias en materia de salud que fueron atribuidas al Consejo Superior de Deportes de acuerdo al Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, y se adapta a las modificaciones introducidas por el Código Mundial Antidopaje de 2015.

El objetivo, una vez el Consejo Superior de Deportes asume estas competencias en la Ley, y producida la consiguiente adecuación a la estructura del organismo autónomo, es llevar a cabo la ejecución de los programas y planes planteados en la regulación, con el objetivo de garantizar la práctica saludable del deporte a todos los niveles. En este sentido, la Ley Orgánica 3/2013 está repleta de buenas intenciones e ideas que tendrán un gran beneficio en las personas deportistas, y el objetivo ha de seguir siendo procurar el cumplimiento de sus premisas. Para ello, se debe proceder a la adaptación del Estatuto del Consejo Superior de Deportes con el fin de asumir esas competencias y llevarlas a término en coordinación con los organismos competentes en materia de salud, tanto a nivel autonómico como de otros Ministerios que puedan estar implicados.

La parte final del Título II está dedicada a otros actores del deporte imprescindibles para las competiciones deportivas, como son los entrenadores y los árbitros. Así, se recoge su definición,



fundamentada en las funciones que tradicionalmente vienen ejerciendo, la necesidad de que obtengan licencia y el mandato a las federaciones para que procuren una formación específica y continua que garantice la mejora en el ejercicio de sus labores, tan necesarias para el adecuado desarrollo de nuestro modelo deportivo. Respecto a los primeros, se recoge la necesidad de que dispongan de titulación oficial o certificado de profesionalidad equivalente, respetando los criterios establecidos en la Directiva (UE) 2018/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones.

En particular, desde hace tiempo ha sido un tema de profunda preocupación la situación jurídica de los árbitros y jueces, lo que ha dado lugar a jurisprudencia variada ante el silencio de la Ley. En este sentido, siendo conscientes de la heterogeneidad de la tarea arbitral en el deporte, se garantiza la formalización de un contrato laboral dentro de las opciones que permite la legislación vigente con el fin de adaptar la vinculación a la situación que más se adapte al desempeño de su labor, pero se impone la necesidad de incorporación al sistema de Seguridad Social.

V

Las federaciones deportivas españolas han sido un elemento clave del crecimiento que ha experimentado el deporte español, especialmente en los últimos años donde el deporte está viviendo una mayor profesionalización a todos los niveles. Afortunadamente, el modelo federativo español vive un momento de suficiente madurez que permite que el Estado no tenga que tutelar algunas de sus actividades más esenciales como venía sucediendo hasta la fecha, dotando a las federaciones deportivas de un mayor grado de autonomía en su organización interna y en el cumplimiento de su objeto esencial, reduciendo las funciones que ejercen por delegación del Estado.

En primer lugar, conviene reseñar el sistema de licencias para la participación en competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal e internacional, donde se consagra el carácter administrativo de su expedición o denegación que ya estableció el Tribunal Supremo a través de diversas sentencias, así como las consecuencias de tal calificación. El carácter público se justifica en la necesidad de que la Administración Pública pueda tutelar el respeto a los derechos de las personas deportistas, en especial los relativos a menores de edad, personas extranjeras así como de toda expresión de género, orientación e identidad sexuales a la hora de conceder o denegar las licencias por parte de las federaciones deportivas españolas, grupos a los que se menciona específicamente en la Ley como mandato para cumplir con el ordenamiento jurídico en la expedición de estos títulos habilitantes, cuya finalidad es aportar seguridad y estabilidad al sistema, de tal forma que las personas deportistas se encuentren amparadas en caso de que la federación no actúe conforme a la legalidad en una cuestión tan importante como es la de permitir su acceso a participar en competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal e internacional.

Otra cuestión que afecta directamente a la emisión de la licencia y que ha resultado problemático en los últimos años ha sido el régimen de licencia única, que no puede tener acomodo en esta Ley tras la sentencia del Tribunal Constitucional 33/2018, de 12 de abril, sustituyéndose por el fomento de mecanismos de reconocimiento mutuo de licencias de ámbito autonómico y de algunos efectos, como el sancionador, inherentes a la misma, con objeto de dotar de eficacia a este último sistema y



promover este modelo que ha funcionado adecuadamente en algunas federaciones deportivas para beneficio, principalmente, de las personas deportistas, **pero teniendo en cuenta siempre el respeto al marco de las competencias de cada Comunidad Autónoma.**

En otro orden de cosas, durante los últimos años se ha demostrado que la situación económica de algunas federaciones ha puesto en serio riesgo el cumplimiento de las funciones tanto públicas como privadas que tienen encomendadas, y que han obligado a la intervención del Consejo Superior de Deportes cuando su viabilidad corría grave peligro. Ello ha puesto de manifiesto la necesidad de que las federaciones encuentren, a nivel económico, financiero y de gobernanza, un apoyo por parte de la Administración Pública, que garantice su adecuado funcionamiento.

De acuerdo a lo anterior, se apuesta por un modelo de control económico de las federaciones orientado principalmente a que el dinero público que reciben sea utilizado única y exclusivamente para los fines estipulados en las convocatorias de subvenciones pertinentes y a que el crecimiento de la modalidad deportiva y de sus deportistas no se vea amenazada, sin perjuicio de que también se persiga garantizar el equilibrio económico y financiero de las federaciones, siendo un mecanismo ideado a efectos de prevención de situaciones de insolvencia. En este sentido, las federaciones deportivas deben percibir que este control económico no pretende mermar su independencia ni su autonomía organizativa; al contrario, el objetivo no es otro que servir de apoyo en el caso de que existan dificultades que impidan el correcto desempeño de sus funciones.

En segundo término, ese control ha de extenderse al buen gobierno de las federaciones deportivas y al establecimiento de normas de transparencia que permitan conocer a la sociedad la actividad completa de las federaciones. Esta fórmula de regulación estatal en las federaciones pretende favorecer la actividad de las mismas. Y se fundamenta en que, en la medida en que se incremente la publicidad de su situación económica y de gestión, y todos los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder y conocer con exactitud la actividad que desarrollan, se va a favorecer el interés por parte de actores externos en las organizaciones federativas, y se va a conseguir una mayor implicación y participación de las personas deportistas en este modelo deportivo, al gozar de la seguridad que supone el conocimiento de la solvencia técnica, financiera y gubernativa de las federaciones, lo que finalmente va a suponer un gran impulso a su actividad deportiva, y un fortalecimiento de su propia estructura y del sistema deportivo.

Poco a poco, las federaciones han ido implementado modelos de control económico y buen gobierno con un gran resultado. Por ello, la intención es extender estas garantías a todas las federaciones y que el resultado positivo que estas políticas tienen se vea reflejado a todos los niveles, estableciendo medidas obligatorias y potestativas de control y autorregulación, permitiendo como elemento de cierre del modelo la actuación del Consejo Superior de Deportes, en determinadas situaciones, en el cumplimiento de las normas previstas en esta Ley.

La presente Ley pretende potenciar el deporte federado, entendidas las federaciones deportivas como entidades que colaboran con la Administración en la promoción y fomento del deporte, dotando a las federaciones de mejores mecanismos para poder desarrollar su actividad. Uno de esos instrumentos son los Programas de Desarrollo Deportivo, que permitirán a las federaciones disponer una



planificación plurianual de acuerdo con los recursos que puedan percibir del Consejo Superior de Deportes, y que se trata de una de las grandes demandas de los últimos años, que deberá dejar su cuota de espacio a las modalidades deportivas practicadas por personas con discapacidad cuando se haya producido la integración prevista en el artículo 5 de la presente Ley. Además, se vinculan estos Programas a la necesidad de elaborar un Plan Estratégico con el objetivo de que las federaciones dirijan su actividad desde el inicio y puedan ejecutar de manera adecuada los Programas de Desarrollo Deportivo. Se introduce así el concepto de planificación deportiva, con la intención de conseguir la maximización de los recursos disponibles, y encauzar el trabajo federativo más allá del corto plazo, generando de manera adicional un atractivo para las empresas y deportistas que deseen vincularse a una entidad federativa cuyos objetivos están definidos desde un primer momento y enmarcados en un recorrido temporal determinado. Y es que no podemos olvidar que uno de los motivos por lo que las empresas han optado, en muchas ocasiones, por patrocinar eventos deportivos concretos en lugar de proyectos federativos ha sido la falta de concreción de estos en un periodo de tiempo que genere seguridad en el retorno buscado.

Otro de los asuntos que más **preocupación genera actualmente es la relación entre las federaciones deportivas españolas y las autonómicas**. Es esencial que la relación entre ambas entidades no dificulte la gestión de la modalidad deportiva, porque la aparición de conflictos constantes únicamente perjudica al desarrollo de su deporte a todos los niveles y, principalmente, a las personas deportistas, que buscan estabilidad en el marco que acoge su práctica deportiva. Por ello, debe ser objetivo de esta Ley garantizar que las discrepancias entre organizaciones no repercutan en quienes practican deporte, y eso se logra garantizando la integración de las federaciones autonómicas en las estatales cuando así lo estimen oportuno y promoviendo convenios de integración que, en todo caso, no supongan instrumentos de negociación que pongan en desventaja a una de las partes. En este sentido, la libertad de integración debe ser total, y para ello se incluye la necesidad de arbitrar un sistema de separación de federaciones autonómicas, que evitará multitud de conflictos que han surgido en el día a día de las federaciones, garantizando la Administración el contenido mínimo de esos acuerdos.

VI

Los Comités Olímpico y Paralímpico han tenido, desde su creación, un papel esencial en el desarrollo del deporte y en la difusión de los ideales y valores asociados a los Movimientos Olímpico y Paralímpico. Esta Ley reconoce la importancia de su labor y garantiza la igualdad de ambos en el ejercicio de sus funciones, así como en lo relativo a sus obligaciones y derechos.

De esta forma, se disponen su naturaleza y sus funciones así como la reserva de los elementos más representativos de ambos. Además, también se reconoce que dependerá de estos organismos la inscripción y participación de las personas deportistas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos o eventos relacionados.

VII

El planteamiento de las competiciones deportivas que ofrecía la anterior Ley del Deporte parecía responder a las necesidades de la situación del deporte en aquel momento, en el que las estructuras



competitivas no estaban tan desarrolladas como sucede hoy día, cuando el progreso del deporte ha abierto nuevas vías en la organización de competiciones.

En la actualidad, esa distinción tan rígida entre deporte profesional y no profesional ha devenido insuficiente, y por ello se opta en esta Ley por un escalón intermedio de competiciones, denominadas profesionalizadas, cuya calificación corresponde, al igual que sucede con las profesionales, al Consejo Superior de Deportes, y que pretende incluir todas aquellas competiciones que tienen una organización propia y un volumen económico y de vinculación contractual de sus deportistas relevante pero insuficiente para su organización a través de una liga profesional. También se pretende que las competiciones profesionales sean económicamente sostenibles, lo que se garantiza a través de la fijación de criterios de solvencia técnica de las entidades deportivas participantes.

La regulación de las competiciones profesionales y profesionalizadas queda configurada de tal forma que permite englobar tanto a modalidades y especialidades colectivas como a las de carácter individual, siempre que cumplan con los requisitos que han sido establecidos en esta Ley.

Finalmente, dentro del grupo de competiciones al que hacen referencia los párrafos anteriores, clasificadas de acuerdo con parámetros económicos y laborales aparecen aquellas calificadas como aficionadas, sin perjuicio de que puedan competir en ellas deportistas profesionales, tipología de competición que queda encasillada explícitamente dentro del ámbito organizativo de las federaciones deportivas.

Siguiendo otro criterio clasificatorio, se mantiene la diferenciación entre competiciones oficiales y no oficiales, siendo en este caso determinante la inclusión o no de las mismas en los calendarios federativos para su calificación -sin perjuicio de que aquellas pueden ser profesionales, profesionalizadas o aficionadas-, e imponiendo el cumplimiento de una serie de garantías para las personas deportistas que participan en ellas, así como unas obligaciones a los organizadores que avalen la integridad en el desarrollo de la competición y unas óptimas condiciones de seguridad y salud para participantes y asistentes tanto en lo referido a las no oficiales como a las oficiales.

Se reserva la calificación de competiciones no oficiales a aquellas actividades que se desarrollan en el seno federativo al margen del calendario oficial, organizadas por ellas mismas o a través de un tercero. Se pretende que las federaciones deportivas puedan incrementar su actividad a través del fomento de otras competiciones que vayan más allá de las competiciones oficiales, ampliando su espectro de acción, generando un mayor impulso al crecimiento y promoción del deporte.

En relación al deporte practicado al margen de la actividad de las federaciones deportivas, no es posible obviar este fenómeno en la nueva Ley. Por ello, se hace necesario que la actividad deportiva no auspiciada por las federaciones deportivas y las ligas profesionales se ejercite en un marco de garantías para las personas participantes, siempre que estas actividades superen el ámbito autonómico, respetando el reparto competencial. Y cuyo desarrollo se alcanzará mediante el correspondiente reglamento.

En último término, al margen de esta dualidad de deporte federado y no federado, una reivindicación tradicional y conocida es la regulación de las competiciones escolares y universitarias, especialmente



cuando estas afectan a la celebración de los correspondientes Campeonatos de España o tienen relevancia a nivel internacional. Se garantiza ahora una organización específica que podrá ser ejercida por el Consejo Superior de Deportes, por las federaciones o incluso por un tercero organizador, en función de las características intrínsecas de la competición de que se trate, bajo el auspicio de la Administración General del Estado, fortaleciendo ambos ámbitos del deporte y mejorando las condiciones de desarrollo de dichas competiciones, cubriendo ese espacio indeterminado en el que se encontraban una vez aquellas trascendían el ámbito autonómico.

VIII

Categorizadas las competiciones, resulta imprescindible estructurar un modelo organizativo de las mismas acorde a su estructura, su volumen económico y su trascendencia en el deporte español. Para ello, se mantiene la competencia de las ligas profesionales como entidades deportivas específicas para organizar y gestionar las competiciones así calificadas por el Consejo Superior de Deportes, considerando que una organización propia puede ayudar a incrementar y mejorar el crecimiento económico de la competición, lo que redundará en beneficios para las entidades participantes en la misma, la propia liga, la federación deportiva correspondiente mediante los acuerdos que han de alcanzar para el desarrollo de la competición y, sobre todo, para las personas deportistas que participan en las mismas.

Con respecto a la competición profesionalizada, se considera más adecuado que la federación ostente la competencia para su organización, dotándola al mismo tiempo para su ejercicio de un amplio abanico de posibilidades; por un lado, ser ella misma la organizadora, contando con una estructura propia dentro de la entidad encargada de optimizar su desarrollo. Por otro lado, puede encomendar la gestión de la competición a un tercero que puede ser una asociación de clubes –modelo que ha funcionado en algunas modalidades deportivas que, hasta la fecha, no tenían la consideración de profesionales- o, por último, encomendar la gestión de la competición a una entidad privada con o sin ánimo de lucro, debiendo propiciarse un concurso público en el primero de estos casos con el fin de que el ente organizador responda a las máximas garantías de solvencia y compromiso. Sea cual sea la fórmula utilizada, será la federación quien deba gestionar lo pertinente a la organización deportiva.

La naturaleza de las competiciones exige para su propia supervivencia la existencia de entidades deportivas. Anteriormente se exigía, para la participación en competiciones oficiales profesionales de ámbito estatal, la transformación en Sociedad Anónima Deportiva, con las salvedades establecidas para algunos clubes que pudieron mantener su forma jurídica tras la aprobación de la Ley del Deporte del año 1990.

Este modelo de participación se mostró ineficaz a raíz de la publicación de la Decisión (UE) 2016/2391 de la Comisión, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) concedida por España a determinados clubes de fútbol, en la que venía a considerar que el Estado concedía beneficios a dichos clubes de fútbol porque no estaban obligados a convertirse en sociedades anónimas deportivas a diferencia del resto de participantes en la competición, lo que les otorgaba cierta ventaja sobre estos.



Esta situación obliga a un replanteamiento del modelo. Son varias las soluciones que se podían adoptar, todas ellas garantizando el libre acceso de las entidades deportivas participantes en estas competiciones a cualesquiera formas jurídicas autorizadas. Así, se ha optado por admitir como formas jurídicas que permitan la participación en esta tipología de competiciones, a las sociedades de capital, los clubes deportivos y las asociaciones que cumplan los requisitos exigidos en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, dentro de que los fines de las mismas sean compatibles con la participación en competiciones deportivas en virtud de su normativa específica, y se ha potenciado la capacidad de los organizadores de estas competiciones, esencialmente ligas, para realizar sistemas de control económico de estos participantes que garanticen su viabilidad y la integridad de los torneos. Este modelo garantizará que un mayor número de competiciones deportivas pueden acceder a la categoría de profesionales.

De esta forma, se ha enfocado la regulación de las entidades deportivas que participan en competiciones profesionalizadas y profesionalizadas en varias fases; por un lado, cuestiones comunes con independencia de su forma jurídica, que tratan las situaciones de control efectivo por otras entidades, así como la definición de participaciones significativas y su régimen jurídico, ambas cuestiones de especial interés y que se orientan a garantizar la pureza en la competición. Por otro lado, se dedica una sección a las sociedades de capital y los elementos específicos que han de apreciarse por razón de su forma jurídica. Finalmente, y sin perjuicio de que todo lo que se indica en este párrafo pueda tener un ulterior desarrollo reglamentario, se recogen algunas cuestiones comunes al resto de entidades deportivas autorizadas por esta Ley, de tal forma que se pretende garantizar un tronco común de obligaciones con independencia de la forma que se utilice para participar en las competiciones indicadas.

IX

Como no puede ser de otra forma, una Ley que impone una serie de derechos y obligaciones a uno o varios sujetos debe contar con un adecuado régimen sancionador que haga cumplir lo contenido en dicha norma. Sin embargo, en el ámbito del deporte nos encontramos con una multiplicidad de actos que, en muchas ocasiones, han venido dificultando la determinación de cuándo estamos frente al ejercicio de funciones públicas y cuándo ante una actuación de contención y freno de conductas incorporadas al ámbito interno de las diferentes organizaciones y entidades deportivas. Por ello, en esta Ley se pretenden clarificar todos estos aspectos y concretarlos de manera sucinta:

Por una parte, se configura el régimen sancionador como una potestad pública que pueden ejercer por delegación las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales en el ámbito de sus funciones públicas delegadas, del mismo modo que ejerce el Tribunal Administrativo del Deporte en supuestos muy concretos referidos a la comisión de infracciones por los órganos directivos de las federaciones deportivas y las ligas profesionales. De forma obligada, se determinan claramente las infracciones muy graves, graves y leves adaptadas a la realidad actual del deporte, ampliando el plazo de prescripción de infracciones y sanciones al establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como el catálogo de sanciones con el objetivo de alcanzar una solución más ajustada al tipo de falta cometida.



Por otro lado, nos encontramos con el régimen disciplinario, derivado de la vulneración de las reglas del juego y la competición, que esencialmente se deja en manos de las federaciones deportivas y ligas profesionales dentro de su ámbito competencial, que establecerán su propio sistema de infracciones, sanciones y forma de coerción de estas conductas, respetando los principios esenciales del procedimiento administrativo sancionador pero sin la intervención del poder público en instancia alguna, por lo que el Tribunal Administrativo del Deporte ya no conocerá en vía de recurso las sanciones impuestas a miembros de estas entidades ni, lógicamente, el orden contencioso-administrativo. Siendo las diferencias que se sustancien en este ámbito, susceptibles de resolverse en la correspondiente jurisdicción civil, o mediante el sometimiento voluntario y previo a un sistema arbitral, quedando las vías heterocompositivas limitadas a la previa resolución del Tribunal Administrativo del Deporte.

Con la salvedad de aquellas sanciones que supongan privación, revocación o suspensión definitiva de todos los derechos inherentes a la licencia por la comisión de infracciones muy graves. Esta puntualización se justifica por el carácter público del acto de otorgamiento de la licencia deportiva, ya que resultaría de todo punto incongruente que este acto esté sometido a ulterior revisión administrativa por el interés público que presenta pero, sin embargo, a través de un expediente disciplinario se le pueda revocar aquella sin que la Administración tenga capacidad de intervención.

Una vez producida la infracción, se dispone en la Ley el modelo de órganos disciplinarios que deben poseer las entidades con competencias. Así, se diseña un modelo abierto, de tal forma que no exige pero permite la existencia de una segunda instancia, al igual que no se impone un número concreto de integrantes de dichos comités, con el requisito de que al menos uno de los miembros de los citados órganos deberá tener formación jurídica.

X

Esta Ley incluye un Título relativo a la solución de conflictos más desarrollado que el de su antecesora, intentando resolver la indeterminación jurídica existente hasta la fecha en la que no se deslindaba con concreción qué tipo de actos tenían naturaleza privada y cuáles eran actos administrativos susceptibles de recurso en las formas establecidas en la legislación sobre procedimiento administrativo común.

Destaca la situación de los procesos electorales, a cuyos conflictos, debido a la peculiaridad que plantean, se otorga naturaleza privada, pero se establece una vía administrativa previa ante el Tribunal Administrativo del Deporte con una doble función; la primera, permitir un sistema público, ágil y gratuito para solucionar un conflicto que no puede dilatarse hasta la resolución de un procedimiento judicial; la segunda, ofrecer seguridad jurídica a los miembros del censo para la protección rápida de sus derechos en el caso de que se viesen lesionados. No obstante, la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte, en estos casos, no tendrá la consideración de acto administrativo que agota esta vía, por lo que las reclamaciones no se interpondrán ante el orden contencioso-administrativo, fomentando la utilización de la vía arbitral voluntaria como forma más ágil de solución del conflicto pero sin que quepa una imposición obligatoria de este sistema. Junto a



ello, se establece la posibilidad de que el Consejo Superior de Deportes pueda utilizar las vías descritas en este párrafo para velar por la garantía del proceso electoral.

También se regula en este Título el Tribunal Administrativo del Deporte, debiéndose indicar que la mayor parte de su contenido se remite al posterior desarrollo reglamentario, pero la Ley incluye sus competencias y presta especial atención al nombramiento de sus miembros de acuerdo a criterios de objetividad y al cumplimiento de la presencia equilibrada por razón de género. Se destaca en esta regulación su falta de competencia en el régimen disciplinario deportivo con la salvedad de aquellas sanciones que supongan privación, revocación o suspensión completa de los derechos inherentes a la licencia, así como la modificación de su intervención en los procesos electorales en los términos que se indican en el párrafo anterior.

XI

El noveno Título de la Ley pretende resaltar la importancia de las instalaciones deportivas para el desarrollo y promoción de la actividad deportiva. Para ello, además de fomentarse la construcción y conservación de instalaciones, se recoge en la Ley la Red de Centros de Alto Rendimiento y de Tecnificación Deportiva como el conjunto de instalaciones enfocadas a la preparación de los deportistas para la alta competición.

En concreto, se recogen los centros de alto rendimiento, que tradicionalmente han venido denominándose CAR, los centros de tecnificación deportiva (CTD), así como los centros especializados o monodeportivos tanto en el ámbito del alto rendimiento como en el de la tecnificación deportiva, que tienen la usual denominación de CEAR y CETD. En relación a estos últimos se menciona la necesaria coordinación entre las diversas administraciones territoriales para la mejor preparación de las personas deportistas. Todo ello incardinado en un proceso de planificación deportiva que permita una mejor gestión de los recursos disponibles, y la adecuación de la calidad de las instalaciones y de los programas a desarrollar en función de las circunstancias concurrentes.

Finalmente, se mantiene el reconocimiento del censo de instalaciones deportivas y se **realiza un mandato a los distintos poderes públicos para que dichas instalaciones cumplan, como mínimo, los estándares de accesibilidad a los mismos con la finalidad de que las personas con discapacidad puedan disfrutar en régimen de igualdad, de las instalaciones deportivas, además de que se respeten las normas esenciales de seguridad y sostenibilidad.**

XII

Las Disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales contienen una serie de puntos que también conviene resaltar. En primer lugar, se incluye la remisión al correspondiente desarrollo reglamentario de ciertos puntos como el de la mayor precisión del catálogo de infracciones y sanciones o los seguros deportivos, estableciéndose un mandato al Ministerio competente para su actualización.



Junto a lo anterior, se incluye un mandato al poder legislativo de aprobar una Ley que regule las profesiones del deporte, una demanda del sector que viene de mucho tiempo atrás y que debe ser afrontada a la mayor brevedad posible para clarificar su situación y establecer criterios comunes que reduzcan la disfunción que está provocando la aprobación de legislación autonómica heterogénea que limita el establecimiento de profesionales del deporte en distintos territorios nacionales. Pero esta regulación no puede hacerse sin la aprobación previa de una Ley del Deporte que establezca unas bases actualizadas de la actividad física y el deporte a todos los niveles dentro del respeto de las competencias de los diferentes entes territoriales. Lo mismo sucede con el patrocinio y mecenazgo deportivos, materia en la que se incluye un mandato a los poderes públicos de actualizar su regulación y adaptarla a las nuevas necesidades del deporte, fomentando estas actividades que redundarán en el beneficio de todos los que forman parte de este fenómeno social.

También se recoge la figura de la confederación de federaciones deportivas, que debe cumplir unos requisitos de participación para poder inscribirse en el Registro de Entidades Deportivas y cuya existencia permitirá la defensa de intereses comunes y la conjunción de esfuerzos que lleve a estas entidades deportivas a un mejor cumplimiento de su objeto social.

A lo anterior hay que añadir que se recogen algunas adaptaciones al Código Mundial Antidopaje que no fueron introducidas en el Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, y se adapta a las modificaciones introducidas por el Código Mundial Antidopaje de 2015, relativas a personas deportistas retiradas que desean volver a la competición, así como una modificación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, con el objetivo de dar cumplimiento a las medidas que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género recoge en este punto.

Finalmente, se establecen algunas medidas de contenido fiscal, orientadas esencialmente a las personas deportistas de alto nivel, consistentes en una reducción de las retenciones e ingresos a cuenta a practicar en el IRPF por la obtención de rendimientos derivados de actividades económicas y a un aumento del límite exento de las ayudas de contenido económico contenidas en la letra m) del artículo 7 de la Ley del Impuesto y desarrolladas en el artículo 4 de su Reglamento, ya que la cantidad que se encontraba vigente no respondía a la situación actual.

TÍTULO PRELIMINAR

Principios generales de la ordenación deportiva

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.- *Objeto*



1. La presente Ley tiene por objeto establecer el marco jurídico regulador de la actividad física y el deporte, de conformidad con lo previsto en el artículo 43.3 de la Constitución y dentro de las competencias que le corresponden a la Administración General del Estado.

2. Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado la representación del deporte español y la supervisión pública del sector en aquellos aspectos que se consideran de interés general para el Estado.

Artículo 2.- *Derecho a la práctica de la actividad física y el deporte*

1. Todas las personas tienen derecho a la práctica de la actividad física y el deporte, de forma libre y voluntaria, de conformidad con lo previsto en esta Ley.

2. La Administración General del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución, promoverá la actividad física y el deporte como elementos esenciales del desarrollo de la personalidad, de acuerdo con la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, facilitando a todas las personas el ejercicio del derecho a practicar actividad física y deporte, ya sea en el ámbito del alto nivel o la competición, ya sea con fines de ocio, salud, bienestar o mejora de la condición física.

3. La necesidad de la ordenación de este derecho persigue la garantía de su libre ejercicio, así como la promoción de valores esenciales en la sociedad como la igualdad, la integración social, la participación, la ética y el juego limpio, la competitividad razonable y ordenada, la mejora de la salud y la superación personal. De acuerdo con lo anterior, tal ordenación se asienta en el fomento de la actividad física y el deporte y en la formulación de políticas públicas que inciten, favorezcan y garanticen su práctica en las mejores condiciones de seguridad y salud.

4. La Administración General del Estado elaborará y ejecutará sus políticas públicas en esta materia de manera que el acceso de la ciudadanía a la práctica de la actividad física y el deporte se realice en igualdad de condiciones y de oportunidades.

Artículo 3.- *Principios rectores*

Para el desarrollo de los principios enunciados en este Título, las políticas públicas que la Administración General del Estado formule, dentro de su ámbito competencial, deberán cumplir los siguientes fines, en consonancia con los objetivos y metas de desarrollo sostenible que se hayan establecido a nivel internacional:

a) El acceso a la práctica deportiva de la ciudadanía en condiciones de idoneidad, proximidad, seguridad y mejora de las propias capacidades.

b) El impulso y salvaguarda de la igualdad efectiva de todas las personas en la práctica deportiva y su adecuado desarrollo, adoptando, en su caso, las medidas que remuevan los obstáculos que impidan dicha igualdad.

c) La práctica deportiva en condiciones idóneas de seguridad, que permitan el mantenimiento y mejora de la condición física individual, sin producir daño o riesgo.



- d) La promoción de objetivos comunes que permitan la coordinación de las políticas públicas en materia de actividad física y deporte por parte de las diferentes Administraciones Públicas.
- e) El fomento y la potenciación del deporte de alto nivel, de las competiciones deportivas y de la participación internacional de las personas deportistas, clubes, árbitros, técnicos deportivos y dirigentes.
- f) La instauración de un marco de actuación coordinado y armonizado con el movimiento deportivo en el ámbito estatal e internacional.
- g) El establecimiento de un marco normativo y de actuación que favorezca la participación del sector privado en la promoción y en el desarrollo de la actividad física y el deporte mediante acciones de patrocinio deportivo y, en su caso, de un tratamiento fiscal específico que incentive y favorezca su participación en el deporte.
- h) La prevención, control y erradicación de cualquier clase de discriminación, de la violencia, el racismo, la xenofobia, la intolerancia en el deporte, la discriminación por razón de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual, así como del dopaje y cualquier tipo de actuación fraudulenta que pueda producirse en la actividad deportiva, fomentando el juego limpio y la colaboración ciudadana.
- i) El desarrollo de la actividad física y el deporte en condiciones compatibles y respetuosas con el medio ambiente, con la protección del medio natural y el entorno urbano, así como con la seguridad de las personas.
- j) La promoción de la investigación y la innovación y el uso de la ciencia y la tecnología aplicadas a la actividad física y el deporte con el fin de mejorar sus elementos didácticos, técnicos e instrumentales, dando prioridad a la debida protección de la ciudadanía y las personas deportistas.
- k) La mejora en el desarrollo de las capacidades de todos los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley.
- l) Procurar los medios necesarios que posibiliten a las personas deportistas residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias e Islas Baleares así como en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla la participación en competiciones deportivas no profesionales de ámbito estatal en condiciones de igualdad.

Artículo 4.- *Marco específico de promoción de la igualdad efectiva en el deporte*

1. La Administración General del Estado desarrollará, dentro de su ámbito de actuación y de manera coordinada con el resto de Administraciones Públicas, políticas públicas que garanticen la igualdad en el acceso y el desarrollo posterior de la actividad física y el deporte, así como la promoción de la integración igualitaria en los órganos de dirección, gobierno y representación de las entidades deportivas previstas en esta Ley, observando las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en las normas y tratados internacionales ratificados por el Estado.



2. A efectos de lo establecido en este artículo en lo relativo al acceso y desarrollo de la actividad física y el deporte así como en la prevención de situaciones de discriminación o violencia de cualquier clase, el ámbito de aplicación de sus disposiciones se extiende tanto a las situaciones de igualdad por razón de sexo como a las relativas a la orientación e identidad sexuales y la expresión de género.

3. De acuerdo con lo establecido en el apartado 1, se desarrollarán políticas que prevengan, identifiquen y sancionen la merma de derechos o que impliquen situaciones de discriminación que puedan provenir de las entidades deportivas y su vinculación con las personas deportistas en las relaciones laborales, administrativas o de cualquier clase que mantengan con las mismas. Específicamente, estas políticas se orientarán a eliminar conductas discriminatorias de toda clase ejecutadas en los ámbitos deportivos así como todas aquellas que conlleven situaciones de desigualdad en las personas deportistas.

4. La Administración General del Estado, en coordinación con el resto de Administraciones Públicas, desarrollará políticas públicas específicas de lucha contra la violencia hacia las mujeres en el deporte y los estereotipos por cualquier razón.

5. Las federaciones deportivas españolas estarán obligadas a realizar un informe anual de igualdad que será elevado al Consejo Superior de Deportes y al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

6. Las federaciones deportivas españolas deberán contar con un protocolo de prevención y actuación para situaciones de discriminación, abusos y acoso por razón de sexo y/o autoridad en el seno de aquellas y en el de las entidades deportivas integrantes de la propia federación.

El Consejo Superior de Deportes pondrá a disposición de las federaciones deportivas españolas un protocolo, en los términos indicados en el párrafo anterior, que deberán suscribir, asimismo, las demás entidades deportivas.

7. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 29.2 y 36 a 39 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y posterior desarrollo en la materia, se promoverá una mayor visibilidad de eventos deportivos de categoría femenina en los medios de comunicación.

8. Las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales estarán obligadas a elaborar un plan específico de conciliación con medidas concretas de protección en los casos de maternidad y lactancia, que también será aplicable a las entidades deportivas pertenecientes a aquellas respecto de sus deportistas. Este plan, que también se aplicará dentro de la estructura de la propia entidad, será objeto de comunicación al Consejo Superior de Deportes.

9. En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para igualdad efectiva de mujeres y hombres, se garantizará la igualdad de premios entre ambos sexos siempre que los eventos deportivos se organicen o se encomienden a un tercero por una Administración Pública, o se financien total o parcialmente a través de fondos públicos.

De la misma forma, se garantizará que el sistema de dietas otorgadas, cuando las personas deportistas compitan con las selecciones nacionales correspondientes, sea igualitario para hombres y mujeres.



Artículo 5.- *Personas con discapacidad y deporte inclusivo*

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución, la Administración General del Estado, en coordinación con el resto de Administraciones Públicas, promoverá las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad en el ámbito del deporte, atendiendo particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad, eliminando los obstáculos que se opongan a su plena integración y atendiendo a los principios establecidos en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, así como en las normas internacionales ratificadas por el Estado.

2. Específicamente, y de acuerdo a lo previsto en el apartado anterior, se considera de interés general el deporte inclusivo de personas con discapacidad y los programas que lo promuevan.

3. Las federaciones deportivas españolas podrán proceder a la efectiva integración en aquellas de las modalidades deportivas incluidas en las federaciones deportivas para personas con discapacidad, que se plasmará a través de un acuerdo que deberá ser ratificado por las Asambleas Generales de las federaciones de origen y destino.

En tanto no se produzca la integración prevista en el párrafo anterior, las federaciones españolas de deportes para personas con discapacidad desarrollarán las modalidades y especialidades deportivas que estén contempladas en sus Estatutos, con independencia de que puedan establecer sistemas de reconocimiento mutuo de licencias con el resto de federaciones deportivas.

4. Las modalidades deportivas de personas con discapacidad se integrarán en las federaciones deportivas españolas de la modalidad respectiva cuando dicha integración se haya producido en el ámbito de las correspondientes federaciones deportivas internacionales.

En dicha integración se asegurará la presencia ponderada de representantes del deporte de personas con discapacidad en los órganos de gobierno de la correspondiente federación deportiva española.

5. Las entidades deportivas incluidas en esta Ley promoverán y fomentarán el desarrollo de la práctica deportiva de personas con discapacidad, así como la celebración de actividades de deporte inclusivo.

6. Se promoverá una mayor visibilidad del deporte inclusivo y de personas con discapacidad en los medios de comunicación.

Artículo 6.- *Práctica deportiva de las personas menores de edad*

1. La realización de actividades deportivas por parte de menores de edad, sus derechos y necesidades, serán objeto de especial protección por parte de los poderes públicos. Las entidades deportivas sujetas a la presente Ley deberán garantizar el cumplimiento de las normas de protección y tutela de aquellas personas.

Los poderes públicos y las entidades deportivas prestarán especial atención en prevenir, evitar y proteger a las personas menores de edad frente a situaciones de trata de seres humanos que puedan darse en el ámbito del deporte.



2. La actividad deportiva que realicen las personas menores de edad deberá ser ajustada y proporcional, en cada momento, a su desarrollo personal, a sus capacidades físicas, psíquicas y emocionales, atendiendo a lo que señala la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y a lo dispuesto en las normas y convenios internacionales suscritos por el Estado.

3. Se pondrá especial atención en evitar la utilización inadecuada de la imagen y de la proyección social de las personas deportistas menores de edad, quedando prohibida la explotación económica de su imagen salvo consentimiento expreso de las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela, aun cuando hayan obtenido el beneficio de la mayor edad o la emancipación en los términos previstos en el artículo 320 del Código Civil.

4. La recogida de datos de carácter personal que afecten a las personas menores de edad exige, igualmente, el consentimiento de las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela, sin perjuicio de lo que al respecto establezca la legislación de protección de datos de carácter personal.

Artículo 7.- *Personas mayores*

La Administración General del Estado, de manera coordinada con el resto de Administraciones Públicas, atendiendo al mandato contenido en el artículo 50 de la Constitución, promoverá políticas públicas específicas que fomenten la práctica deportiva de las personas mayores y que se orienten a mejorar su calidad de vida y bienestar.

Artículo 8.- *Personas extranjeras*

La Administración General del Estado, en el marco de sus competencias y atendiendo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, promoverá la práctica deportiva de las personas extranjeras como vía de integración social, velando por su efectividad, con remoción de los obstáculos normativos, reglamentarios o fácticos que puedan existir en las estructuras deportivas.

Artículo 9.- *Protección de los animales*

1. La participación de animales en la actividad deportiva se hará en condiciones que permitan asegurar su protección, su salud, su bienestar y la tenencia y utilización adecuadas y responsables.

2. En cualquier caso, la utilización de animales en la práctica deportiva se desarrollará en condiciones que eviten el sufrimiento o maltrato.

CAPÍTULO II

El interés público en el deporte de alto nivel

Artículo 10.- *Interés público estatal en el deporte de alto nivel*

1. El deporte de alto nivel se considera de interés para la Administración General del Estado, en tanto que constituye un factor esencial en el desarrollo deportivo, supone un estímulo para el fomento del



deporte base en virtud de las exigencias técnicas y científicas de su preparación, y se plasma en su función representativa del deporte español en las pruebas o competiciones deportivas de carácter internacional.

2. La Administración General del Estado, en coordinación con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, en su caso, procurará los medios necesarios para la preparación técnica y el apoyo científico y médico de las personas deportistas de alto nivel, así como su incorporación al sistema educativo en todas sus etapas y su plena integración social y profesional.

Artículo 11.- *Representación internacional*

1. Sin perjuicio de lo establecido en el Título IV de esta Ley, solo las federaciones deportivas españolas reconocidas al amparo de la misma, en el marco de las competiciones deportivas internacionales o acontecimientos deportivos en las que tienen derecho o capacidad de participar, podrán utilizar el nombre de España y los símbolos que le son propios siempre que se ajusten a las disposiciones y autorizaciones expresas que fije el Estado en desarrollo de esta Ley.

2. El Gobierno fijará reglamentariamente las condiciones de organización y desarrollo de competiciones y acontecimientos deportivos internacionales en España siempre que en los mismos se haga alusión o referencia a la representación de España y se utilicen sus símbolos.

3. Ningún club, deportista o entidad deportiva o no deportiva podrá participar en competiciones internacionales deportivas o acontecimientos internacionales aduciendo que lo hace en representación de España y/o utilizando sus símbolos y enseñas sin la autorización expresa del Gobierno.

4. Asimismo, se fomentará la participación de las personas que ostenten cargos directivos en las federaciones deportivas españolas en actividades y organizaciones internacionales representando a la respectiva federación deportiva.

TÍTULO I

De la organización administrativa del deporte

CAPÍTULO I

Dirección de la política estatal del deporte

Artículo 12.- *Dirección de la política estatal del deporte*

1. Corresponde al Gobierno, dentro de sus competencias, la dirección de la política deportiva, su regulación y la fijación de sus objetivos y elementos centrales. Asimismo, impulsará un marco de relaciones interadministrativas que permita el desarrollo de un sistema deportivo coordinado del conjunto de las Administraciones Públicas.

2. En el ámbito de la organización del Gobierno se atribuye la gestión directa de la política deportiva al Consejo Superior de Deportes, con naturaleza de organismo autónomo de carácter administrativo.



3. Las normas de organización del Gobierno y de la Administración General del Estado determinarán el órgano superior al que corresponde la adscripción y tutela del Consejo Superior de Deportes.

Artículo 13.- *Competencias del Consejo Superior de Deportes*

Son competencias del Consejo Superior de Deportes:

a) Fijar los objetivos y criterios de la política deportiva de la Administración General del Estado, así como los de representación y participación internacionales.

b) Establecer, en coordinación con el resto de Administraciones Públicas, programas específicos para el fomento, en condiciones de igualdad efectiva, de la actividad física y el deporte.

c) Instaurar, en los términos que se contienen en esta Ley, un marco de relaciones interadministrativas sobre la base de la coordinación, la cooperación y la colaboración entre las Administraciones Públicas.

d) Coordinar con las Comunidades Autónomas la programación del deporte escolar y universitario y determinar las reglas de su participación nacional e internacional.

e) Elaborar y ejecutar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y, en su caso, con las Entidades Locales, los planes de construcción y mejora del equipamiento y las instalaciones deportivas para el desarrollo del deporte de alta competición, así como actualizar, en el ámbito de sus competencias, la normativa técnica de las instalaciones deportivas y su equipamiento, prestando especial atención al cumplimiento de los requisitos establecidos sobre seguridad y accesibilidad de las mismas.

f) Reconocer, a los efectos de esta Ley y de participación y desarrollo de la actividad deportiva de ámbito estatal, la existencia de modalidades y especialidades deportivas.

g) En relación con las federaciones deportivas españolas, autorizar su inscripción en el Registro de Entidades Deportivas; acordar, en su caso, su liquidación y extinción; ratificar sus Estatutos y reglamentos expresamente previstos en esta Ley junto a sus modificaciones; controlar el contenido mínimo y la sujeción al ordenamiento jurídico de los acuerdos de integración y separación previstos en el artículo 52 de la presente Ley; así como autorizar su adhesión en las correspondientes federaciones deportivas internacionales.

h) Acordar con las federaciones deportivas españolas sus objetivos, programas deportivos, en especial los del deporte de alto nivel y estructuras funcionales, para el desarrollo de los mismos.

i) Conceder las subvenciones económicas que procedan a las federaciones deportivas y demás entidades deportivas, inspeccionando y comprobando la adecuación de las mismas al cumplimiento de los fines previstos en la presente Ley.

j) Autorizar la constitución y liquidación de las ligas profesionales, y ratificar sus Estatutos y reglamentos expresamente previstos en esta Ley así como sus modificaciones.



k) **Calificar las competiciones oficiales de ámbito estatal que deben ser consideradas como de carácter profesional o profesionalizado**, previo informe de la federación deportiva correspondiente, así como establecer las medidas y los objetivos que aseguren la sostenibilidad económica de las competiciones profesionales y tutelar su cumplimiento por parte de las ligas profesionales correspondientes.

l) Autorizar la inscripción de las entidades reconocidas por esta Ley en el Registro de Entidades Deportivas, así como las modificaciones del régimen de participación de sus socios o miembros, en los términos establecidos en la Sección 2ª del Capítulo V del Título III de esta Ley.

m) Conocer de las auditorias contables y del conjunto de la información financiera y contable de las entidades deportivas, así como recabar los informes y documentos complementarios en relación con las mismas; **realizar o encargar la realización de auditorías cuando así se establezca; fijar los criterios generales de solvencia de las entidades deportivas que se implanten por las ligas profesionales y las federaciones deportivas españolas en el ámbito de sus respectivas competencias**, y conocer los informes de buen gobierno de las federaciones deportivas españolas y de las ligas profesionales adoptando, en su caso, las medidas oportunas.

n) **El ejercicio de las facultades de control económico sobre las entidades deportivas en los términos establecidos en el artículo 45 de esta Ley.**

ñ) La administración del arbitraje y la designación de árbitros en relación con las discrepancias que puedan suscitarse sobre la comercialización y explotación de los derechos audiovisuales en las competiciones a las que se refiere el artículo 1.1 del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, y en cualquier otra materia que se les someta.

o) Autorizar o denegar, previa conformidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la celebración en territorio español de competiciones deportivas oficiales de carácter internacional, y de aquellas otras que utilicen en el marco de la competición la nomenclatura y la simbología que es propia del Estado o bien sea susceptible de generar confusión, así como la participación de las selecciones españolas en las competiciones internacionales.

p) **Promover e impulsar, sin perjuicio de las competencias que ostenta la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte**, medidas de prevención, control y represión del uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios, destinados a aumentar artificialmente la capacidad física de las personas deportistas o a modificar fraudulentamente los resultados de las competiciones y actividades deportivas reconocidas en esta Ley.

q) Establecer una política específica de prevención de los riesgos asociados a la práctica deportiva y de las posibles patologías que pudieran aparecer durante o tras la finalización de la práctica deportiva.

r) Establecer instrumentos, elaborar informes, estadísticas, estudios, protocolos, guías y cualquier otro instrumento que pueda contribuir a difundir los beneficios de la actividad física y el deporte y la consolidación de hábitos saludables como consecuencia de su práctica.



s) Apoyar e incentivar la investigación científica y la innovación en materia deportiva, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

t) Gestionar el censo de instalaciones deportivas estatal en colaboración con las Comunidades Autónomas y, en su caso, con las Entidades Locales.

u) Colaborar con el resto de Administraciones Públicas en la adopción de medidas que aseguren la sostenibilidad de la actividad deportiva en el medio ambiente, así como en el entorno urbano y natural.

v) Apoyar y promover la formación de técnicos deportivos, a través de la colaboración con las federaciones deportivas y con los organismos competentes de la Administración General del Estado, así como la gestión de los centros de titularidad estatal que impartan enseñanzas deportivas de grado superior a distancia en todo el territorio nacional.

w) Resolver los recursos administrativos que se interpongan contra los actos y resoluciones que se dicten por las federaciones deportivas en el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 54 de esta Ley y que no estén atribuidos a otros órganos.

Artículo 14.- *Estructura y régimen jurídico*

1. Los Estatutos aprobados por Real Decreto determinarán la estructura del Consejo Superior de Deportes.

2. El régimen jurídico de funcionamiento del Consejo Superior de Deportes será el que se determina en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

CAPÍTULO II

De las relaciones interadministrativas

Artículo 15.- *Relaciones de cooperación entre las Administraciones Públicas*

Las Administraciones Públicas actuarán y se relacionarán entre sí en las materias objeto de esta Ley de acuerdo a los principios de coordinación, cooperación y colaboración, respetando, en todo caso, el ejercicio legítimo por el resto de Administraciones Públicas de sus competencias.

Artículo 16.- *Órganos de cooperación*

Las relaciones entre las Administraciones Públicas se desarrollarán en el marco de la Conferencia Sectorial de Deporte y los órganos que puedan crearse conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en los términos que se establecen en los artículos siguientes.

Artículo 17.- *Conferencia Sectorial de Deporte*

1. La Conferencia Sectorial de Deporte es el órgano permanente de coordinación, cooperación y colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y las



Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, en materia de actividad física y deporte, que tiene como finalidad promover la cohesión del sistema deportivo.

2. La Conferencia Sectorial de Deporte estará formada por la persona titular del órgano al que esté adscrito el Consejo Superior de Deportes, que la presidirá; la persona que ostente la Presidencia del Consejo Superior de Deportes y una persona en representación de cada una de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, con rango de Consejero.

3. La Conferencia Sectorial de Deporte, que se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con las especialidades previstas en este Capítulo, aprobará su reglamento interno, que regulará su organización y funcionamiento.

Artículo 18.- *Criterios generales de la ordenación deportiva interadministrativa*

Sin perjuicio de lo que se establezca en su reglamento interno, corresponde a la Conferencia Sectorial fijar los criterios generales de ordenación del sistema deportivo y a tal fin podrá:

- a) Fijar objetivos comunes en el deporte de alto rendimiento y la tecnificación deportiva coordinados y alineados con los programas de alto nivel.
- b) Establecer objetivos comunes en materia de deporte escolar y universitario.
- c) Determinar criterios comunes sobre la promoción de la actividad física y deportiva no federada.
- d) Fijar criterios comunes sobre la inserción de la práctica deportiva en el conjunto del sistema educativo conforme establezcan las normas educativas.
- e) Establecer programas comunes de actividad física y deporte vinculados a la prevención de la obesidad y el sedentarismo y a la adquisición de hábitos saludables entre la población, en coordinación con otros departamentos ministeriales con competencias en la materia.
- f) Determinar objetivos comunes de promoción del deporte para personas con discapacidad y de actividades de deporte inclusivo, en coordinación con otros departamentos ministeriales con competencias en la materia.
- g) Concretar una política concertada de instalaciones deportivas incluyendo, en su caso, los elementos y medios materiales y personales que puedan contribuir a una práctica deportiva más segura y accesible.
- h) Establecer los requisitos y situaciones en las que puede aceptarse el reconocimiento recíproco de sanciones.
- i) Fijar objetivos comunes para alcanzar la igualdad real y efectiva en el deporte, especialmente en materia de género, en los respectivos ámbitos competenciales.
- j) Participar en la elaboración de los calendarios deportivos de las federaciones deportivas españolas con los fines establecidos en el artículo 98 de esta Ley.



TÍTULO II

De los actores del deporte

CAPÍTULO I

Clasificación y definiciones

Artículo 19.- *Clasificación*

1. Las personas que practican deporte en el ámbito de una federación se clasifican en alguna de las siguientes categorías:

a) Deportista de competición

Son aquellas personas que practican deporte, ya sea en competiciones oficiales o no oficiales, en las condiciones que se fijan en el Título V de esta Ley.

Quienes participan en estas actividades pueden ser, a su vez, deportistas profesionales o no profesionales.

b) Deportistas ocasionales

Son aquellas personas que practican deporte de forma no continua en el marco de una actividad organizada por una federación deportiva que determinará el título habilitante necesario en función de las características específicas de dicha práctica.

2. Las personas deportistas pueden ser también consideradas de alto nivel o de alto rendimiento.

Artículo 20.- *Deportistas de alto nivel y de alto rendimiento*

1. Son personas deportistas de alto nivel las que sean reconocidas como tales por el Consejo Superior de Deportes, de oficio o a propuesta de las federaciones deportivas españolas en función del cumplimiento de los requisitos deportivos que se determinen reglamentariamente, y que incluirán, en todo caso:

a) Clasificaciones obtenidas en competiciones o pruebas deportivas internacionales.

b) Situación o posicionamiento de la persona deportista en clasificaciones o rankings aprobados o tutelados por federaciones deportivas internacionales.

c) Condiciones especiales de la práctica deportiva de cada modalidad o especialidad asumidas comúnmente por los órganos deportivos.

2. La condición de deportista de alto nivel se determinará, anualmente, por el Consejo Superior de Deportes, y se podrá mantener, a elección de la persona deportista, durante los cuatro años posteriores a aquel en el que se produzca el vencimiento de los plazos de duración de dicha condición.



3. Son personas deportistas de alto rendimiento las que sean clasificadas como tales por las Comunidades Autónomas según su propia normativa.

Artículo 21.- *Deportistas profesionales y no profesionales*

1. Son deportistas profesionales, quienes, en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dediquen voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución.

Esta condición es personal y está al margen de la calificación de la competición respectiva.

Las personas deportistas profesionales a que se refiere este apartado están sujetas a la relación laboral especial regulada en la letra d) del artículo 2.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en su normativa de desarrollo.

2. También tendrán la consideración de deportistas profesionales aquellas personas que se dediquen voluntariamente a la práctica deportiva por cuenta propia, sin perjuicio de su pertenencia a cualesquiera entidades deportivas recogidas en esta Ley, estén afiliadas y de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social y perciban retribuciones económicas o premios por la participación en competiciones nacionales o internacionales no destinadas a la compensación de los gastos derivados de su práctica deportiva.

3. Las federaciones deportivas españolas, o, en su caso, las ligas profesionales incluirán entre los requisitos para tramitar la licencia deportiva de las personas deportistas contempladas en los apartados anteriores la aportación del correspondiente contrato de la modalidad laboral que proceda y su afiliación y alta en la Seguridad Social.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no surtirá efectos para lo que se establece en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, ni en sus disposiciones de desarrollo.

4. Son deportistas no profesionales aquellas personas que se dediquen a la práctica del deporte dentro del ámbito de una entidad deportiva, que no tienen relación laboral con la misma y que perciben de esta, a lo sumo, la compensación de los gastos derivados de su práctica deportiva. Estas percepciones exigen ser justificadas documentalmente.

CAPÍTULO II

De los derechos y deberes de las personas deportistas

SECCIÓN 1ª

De los derechos y deberes generales

Artículo 22.- *Derechos de las personas deportistas*

1. Son derechos comunes de las personas deportistas:



- a) El de la práctica deportiva sin discriminación alguna por razón de raza, sexo, discapacidad, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
 - b) El respeto a su integridad, su dignidad, su intimidad personal y su libertad de expresión.
 - c) Disponer de la información suficiente sobre la respectiva modalidad o especialidad deportiva y las condiciones para su desarrollo y práctica, circunstancia que se hará efectiva mediante el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley en materia de publicidad de normas de las entidades deportivas.
 - d) El acceso a la práctica deportiva en función de la respectiva condición y forma de integración en el sistema deportivo.
 - e) La protección de los datos personales que se obtengan con ocasión o como consecuencia de la actividad deportiva en las condiciones que determine la legislación general.
 - f) La seguridad adecuada al tipo de práctica deportiva, cuando esta se haga en el marco de una actividad organizada.
 - g) La atención de la salud de forma adecuada y específica en relación a su práctica deportiva.
 - h) El acceso a la información referida a su vinculación con cualesquiera entidades deportivas a las que pertenezca.
 - i) Ser oídas en relación con la toma de decisiones de los órganos públicos y privados deportivos respecto a las cuestiones que les afecten.
 - j) La libertad de asociación para la práctica del deporte y la defensa de sus derechos como deportistas.
 - k) El disfrute de medidas de especial protección en su derecho a la paternidad, maternidad y lactancia.
 - l) La gestión propia y autónoma de sus derechos de imagen en el ámbito de su actividad deportiva respecto de las entidades deportivas a las que pertenezcan.
2. Son derechos específicos de las personas deportistas integradas en una federación deportiva:
- a) La incorporación a la respectiva federación deportiva y su separación voluntaria en los términos que establezca la respectiva normativa.
 - b) La participación en actividades organizadas por las federaciones deportivas, conforme a las normas y reglas establecidas por estas.
 - c) El desarrollo de su actividad en condiciones adecuadas de seguridad y salud, en los términos que se determinen normativamente.



d) La protección del Sistema Nacional de Salud en los términos previstos en el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

e) La cobertura médica adicional a través de un seguro privado que cubra los riesgos de la actividad deportiva para su salud, suscrito por la federación deportiva, que contemple determinadas prestaciones o servicios que puedan no estar cubiertos de forma completa por financiación pública.

f) La cobertura de responsabilidad civil por los accidentes que puedan ocurrir en el desarrollo y práctica de la actividad deportiva, incluyendo los viajes y desplazamientos organizados en el seno de la federación deportiva, de acuerdo a lo que se establezca reglamentariamente.

g) El disfrute de las ayudas, becas, premios y demás reconocimientos que reglamentariamente se determinen.

h) El establecimiento, en el ámbito docente y laboral, de un régimen específico de permisos y licencias que permita la asistencia a las competiciones internacionales, concentraciones preparatorias y, especialmente, a las competiciones en las que participe la selección española de la que forme parte.

3. Asimismo, y como miembros de la organización deportiva, las personas deportistas tienen los siguientes derechos de carácter democrático y participativo:

a) A ser elector y elegible en los términos establecidos en esta Ley, en sus normas de desarrollo y en el específico régimen electoral de la respectiva federación deportiva.

b) A la representación estamental en la respectiva Asamblea General y en los demás órganos en los que así se establezca.

c) A la información general sobre la estructura, la organización y el funcionamiento de la federación deportiva española de la que forman parte.

Artículo 23.- *Deberes de las personas deportistas*

1. Son deberes comunes de las personas deportistas:

a) Mantenerse informadas sobre el alcance y la repercusión de la práctica deportiva.

b) Cumplir las condiciones de seguridad y salud que se establezcan para el desarrollo de la actividad deportiva.

c) Practicar la actividad física y el deporte en las condiciones más respetuosas posibles con el medio natural, el medio ambiente y el entorno natural y urbano.

d) Realizar la práctica deportiva conforme a las reglas de juego limpio, deportividad y, particularmente, sin incurrir en conductas de dopaje, violencia, racismo, xenofobia, discriminación e intolerancia en el deporte.

e) Hacer un uso racional y adecuado de los bienes de dominio público, de las infraestructuras e instalaciones deportivas y de los servicios públicos.



2. Son deberes específicos de las personas deportistas integradas en una federación deportiva:

- a) Actuar con la diligencia debida en todo lo que respecta a las normas federativas, así como el resto del marco normativo, practicando el deporte cumpliendo las normas de cada modalidad y especialidad deportiva.
- b) Someterse a los reconocimientos médicos y los seguimientos de salud en los términos que se establezcan.
- c) Acudir a las convocatorias de las selecciones deportivas cuando sean debidamente citadas.
- d) Destinar las cantidades percibidas en concepto de becas y demás ayudas públicas a la finalidad para la que fueron concedidas.

SECCIÓN 2ª

De los derechos y deberes de las personas deportistas de alto nivel y alto rendimiento

Artículo 24.- *Derechos de las personas deportistas de alto nivel*

- 1. La Administración General del Estado, en coordinación, en su caso, con las Comunidades Autónomas, adoptará las medidas necesarias para facilitar la preparación técnica, la incorporación al sistema educativo y la plena integración social y profesional de las personas deportistas de alto nivel durante y al final de su carrera deportiva.
- 2. Para el cumplimiento de los fines previstos en el apartado anterior, y en función de las circunstancias personales y técnico-deportivas de las personas deportistas, podrán adoptarse las siguientes medidas:
 - a) Reserva de cupo para el acceso a las titulaciones de régimen general, especial o de formación profesional en las condiciones que se determinen.
 - b) Reserva de un cupo adicional de plazas en las facultades de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte para quienes reúnan los requisitos académicos necesarios.
 - c) Reserva de cupo para el acceso a la carrera militar y a las enseñanzas militares.
 - d) Impulso de la celebración de convenios con empresas públicas y privadas para el ejercicio profesional de las personas deportistas.
 - e) Articulación de fórmulas para compatibilizar los estudios o la actividad laboral de estas personas con su preparación o actividad deportiva.
 - f) Inclusión en la Seguridad Social.
 - g) Reconocimiento y acciones programáticas de reincorporación al ámbito laboral con programas específicos, impulsados desde la Administración General del Estado.



3. La Administración General del Estado considerará la calificación de deportista de alto nivel como mérito evaluable, tanto en las pruebas de selección a plazas relacionadas con la actividad deportiva correspondiente, como en los concursos para la provisión de puestos de trabajo relacionados con aquella actividad, siempre que en ambos casos esté prevista la valoración de méritos específicos.

La Conferencia Sectorial de Deporte podrá establecer mecanismos comunes de aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior para el resto de Administraciones Públicas.

Artículo 25.- Deberes de las personas deportistas de alto nivel

Son deberes de las personas deportistas de alto nivel, además de los dispuestos en el artículo 23.2 de esta Ley:

- a) Cumplir con la normativa nacional e internacional en materia de lucha contra el dopaje, integridad y juego limpio.
- b) Utilizar las ayudas y subvenciones públicas que se perciban de acuerdo con lo establecido en las respectivas convocatorias.
- c) Difundir, en su condición de deportista de reconocido prestigio, hábitos saludables entre la población relativos a la práctica deportiva.
- d) Fomentar valores y buenas prácticas durante la competición, especialmente los relativos al respeto a compañeros, árbitros, jueces y rivales.

Artículo 26.- Derechos y deberes de las personas deportistas de alto rendimiento

1. Las personas deportistas de alto rendimiento tendrán los derechos y deberes que establezca la normativa de la Comunidad Autónoma que reconozca tal condición.

2. Adicionalmente, las personas deportistas de alto rendimiento podrán obtener los beneficios de otra Comunidad Autónoma diferente cuando el cambio a la misma se deba a un traslado de quienes ejerzan su patria potestad si son menores de edad o un cambio de domicilio o de expediente académico en caso de ser estudiantes.

El reconocimiento recíproco de esta condición estará supeditado al cumplimiento de los requisitos comunes que establezca la Conferencia Sectorial de Deporte.

SECCIÓN 3ª

De los derechos y deberes de las personas deportistas profesionales

Artículo 27.- Derechos de las personas deportistas profesionales

Las personas deportistas profesionales tendrán derecho:

- a) A una carrera deportiva conforme a sus potencialidades.



- b) A un marco fiscal específico adaptado a la duración de su carrera profesional y a los ingresos generados durante la misma.
- c) A la conciliación en su vida familiar, académica y profesional, estableciéndose los correspondientes acuerdos con centros de estudio para garantizar la carrera dual.
- d) A la negociación colectiva.
- e) A la libre sindicación.
- f) A la huelga.
- g) A la defensa de sus derechos ante la jurisdicción ordinaria.
- h) A nombrar personas que representen sus intereses frente a clubes y organizadores de las competiciones.

Artículo 28.- Deberes de las personas deportistas profesionales

Son deberes específicos de las personas deportistas profesionales:

- a) Cumplir con la normativa nacional e internacional en materia de lucha contra el dopaje, integridad y juego limpio.
- b) Poner en conocimiento de las federaciones deportivas, ligas profesionales, Consejo Superior de Deportes, o denunciar a las autoridades competentes cualquier hecho del que hayan tenido conocimiento, directa o indirectamente, destinado a alterar el normal desarrollo de las competiciones.
- c) Difundir, en su condición de deportista de reconocido prestigio, hábitos saludables entre la población relativos a la práctica deportiva.
- d) Fomentar valores y buenas prácticas durante la competición, especialmente los relativos al respeto a compañeros, árbitros y rivales.

CAPÍTULO III

De la protección de la salud de las personas deportistas

Artículo 29.- Protección de la salud de las personas deportistas

1. Corresponde al Consejo Superior de Deportes establecer una política efectiva de protección de la salud de las personas que realizan actividades deportivas, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para asegurar a la ciudadanía el derecho a la protección de la salud.
2. A tal fin, el Consejo Superior de Deportes aprobará un Plan de Apoyo a la Salud en el ámbito de la actividad deportiva que determine los riesgos comunes y específicos, en especial atendiendo a las



diferentes necesidades de mujeres y hombres, menores de edad y personas mayores, personas con patologías diagnosticadas así como a los requerimientos específicos de las personas con discapacidad y las medidas de prevención, conservación y recuperación que puedan resultar necesarias en función de los riesgos detectados.

Artículo 30.- *Medidas de carácter específico*

1. En el marco del Plan de Apoyo a la salud de las personas deportistas corresponde al Consejo Superior de Deportes la realización, entre otras que pudieran ser necesarias, de las siguientes actuaciones:

a) Proponer criterios y reglas técnicas para que las competiciones y pruebas de modalidades y especialidades deportivas se configuren de modo que no afecten ni a la salud ni a la integridad de deportistas y público asistente.

b) Realizar propuestas sobre la asistencia sanitaria a dispensar a las personas deportistas y, de acuerdo con las federaciones deportivas, establecer un Protocolo de actuación sobre los dispositivos mínimos de asistencia sanitaria que deben existir en las competiciones deportivas a dispensar a aquellas, así como en las instalaciones deportivas.

c) Fijar sistemas de cobertura de los riesgos para la salud en la actividad deportiva.

2. Cuando la competencia para la realización de las medidas anteriores corresponda a las Comunidades Autónomas, el Consejo Superior de Deportes actuará, junto con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, coordinadamente con estas a través de la Conferencia Sectorial de Deporte.

Artículo 31.- *Reconocimientos médicos*

1. El Consejo Superior de Deportes determinará, progresivamente, la obligación de efectuar reconocimientos médicos con carácter previo a la expedición de la correspondiente licencia federativa o del instrumento que determine la participación en las competiciones y en la actividad deportiva estatal, en aquellos deportes en que se considere necesario para una mejor prevención de los riesgos para la salud de sus practicantes.

2. La obligación prevista en este artículo y las modalidades y alcance de los reconocimientos se determinarán reglamentariamente.

Artículo 32.- *Seguimiento de salud*

1. El Consejo Superior de Deportes podrá establecer programas específicos de seguimiento de la salud de las personas deportistas que se encuentren en el ámbito de aplicación de esta Ley.

2. El Consejo Superior de Deportes establecerá un sistema de seguimiento de la salud de las personas deportistas de alto nivel que contribuya a asegurar convenientemente los riesgos de su práctica deportiva y a prevenir accidentes y enfermedades relacionados con ella.



3. Asimismo, y en la forma que reglamentariamente se determine, los servicios de medicina deportiva de la Administración General del Estado podrán extender su actividad a las personas deportistas de alto rendimiento, en función de los criterios comunes que al efecto se establezcan entre las distintas Administraciones Públicas.

Artículo 33.- Seguimientos y la protección de la salud de las personas deportistas profesionales

1. En el marco de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, las actividades de protección que la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, confiere a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, cuando a dichas entidades pudiera corresponder la cobertura de deportistas profesionales, deberán contemplar el desarrollo de programas específicos orientados a proteger la salud y prevenir los riesgos de accidentes de naturaleza laboral a los que dicho colectivo pueda estar expuesto, así como la realización de actuaciones puntuales dirigidas a la recuperación de aquellas lesiones o patologías que pudieran derivarse de la propia práctica deportiva.

2. A tales efectos, el Consejo Superior de Deportes facilitará a las referidas entidades los criterios, estudios, estadísticas y, en general, cuanta información posea para contribuir, con ello, al logro de una protección más eficaz y más especializada de tales deportistas.

Artículo 34. De la protección de la salud cuando se finaliza la actividad deportiva

1. El Consejo Superior de Deportes, en colaboración con el Sistema Nacional de Salud, establecerá un programa específico para la protección de salud y la recuperación o tratamiento de las personas deportistas que hayan concluido su actividad deportiva y que presenten secuelas como consecuencia de la misma.

2. Los términos de este programa se determinarán reglamentariamente y en su establecimiento se fomentará la participación voluntaria de los centros que componen la red a que se refiere el artículo siguiente de la presente Ley, de las asociaciones de deportistas, de las federaciones deportivas, Mutualidades y demás entidades públicas o privadas que tengan interés en colaborar.

Artículo 35.- Investigación asociada a la práctica deportiva

1. El Consejo Superior de Deportes, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y en el marco de los correspondientes planes estatales, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, promoverá la investigación científica asociada a la práctica deportiva, a la aplicación de la actividad deportiva en el tratamiento y prevención de enfermedades, a la lucha contra el dopaje y a la recuperación de las personas deportistas que hayan finalizado su carrera deportiva, atendiendo a las diferentes necesidades de mujeres y hombres, menores de edad y personas mayores, así como a las necesidades específicas de las personas deportistas con discapacidad.

2. Para la mejor consecución de los fines de investigación, el Consejo Superior de Deportes promoverá la adhesión voluntaria de las sociedades científicas y de los centros y profesionales que se dediquen al estudio, investigación y ejercicio profesional en el contexto de las ciencias del deporte, con el objeto de constituir una red de centros especializados en la materia, mediante la suscripción de los correspondientes convenios de colaboración.



3. La información que aporten cuantos compongan la red se utilizará para la reconfiguración y actualización del Plan de Apoyo a la Salud, con pleno respeto a la normativa de protección de datos de carácter personal.

Artículo 36.- *Currículos formativos*

En los programas formativos de los técnicos deportivos y demás titulaciones relacionadas con la salud en el deporte se incluirán determinaciones específicas para asegurar que las personas docentes tengan los conocimientos necesarios en el plano de la fisiología, la higiene, la biomecánica, la nutrición y demás áreas que tengan relación con la salud, incluida la aplicación de la actividad física en el tratamiento y prevención de enfermedades, con especial referencia a las necesidades específicas de mujeres y hombres, menores de edad, personas mayores y personas con discapacidad.

CAPÍTULO IV

Otros derechos de las personas deportistas

Artículo 37.- *Incorporación a las políticas de empleo*

1. El Consejo Superior de Deportes impulsará la incorporación de las personas deportistas a la Estrategia Española de Activación para el Empleo y a los planes anuales de política de empleo, con el objetivo de que puedan incorporarse a la población activa y al mundo del trabajo observando su aportación a la sociedad.
2. Se establecerá un programa específico para el impulso de la formación entre las personas deportistas en orden a facilitar su inserción laboral en los términos del artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

CAPÍTULO V

De las personas deportistas en la competición o en la práctica deportiva no oficial

Artículo 38.- *Las personas deportistas en la competición o en la práctica deportiva no oficial*

1. El Consejo Superior de Deportes podrá establecer condiciones específicas de protección de la salud en la práctica deportiva no oficial competitiva o no competitiva, adicionales a las que obligatoriamente deban asumir los organizadores de eventos deportivos de naturaleza no oficial.
2. Asimismo, y en función de las características de la misma actividad, estos requisitos podrán ser establecidos como condición de admisión por las respectivas federaciones deportivas españolas o por los organizadores de competiciones o actividades deportivas no oficiales.
3. Las condiciones específicas, su vigencia, alcance y acreditación deberán ser públicas y figurar en las correspondientes páginas web de las entidades que las hubiesen establecido, sin perjuicio de cualquier otro medio que asegure su publicidad.



El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la responsabilidad directa de los organizadores o la exención de responsabilidad de las federaciones deportivas españolas.

CAPÍTULO VI

De los técnicos deportivos

Artículo 39.- Entrenadores o técnicos deportivos

1. Se consideran entrenadores o técnicos deportivos aquellas personas que disponen de la titulación oficial o los certificados de profesionalidad equivalentes de conformidad con la legislación vigente.
2. Corresponde a los entrenadores o técnicos deportivos ejercer, respecto a equipos y deportistas, las funciones necesarias para la preparación y la participación en competiciones de cada modalidad o especialidad, velando por su seguridad y salud en la práctica deportiva.
3. Para la realización de su función deben obtener una licencia deportiva en los términos generales que se establecen en la presente Ley.
4. Las federaciones deportivas españolas deberán prever un programa específico de formación continua de entrenadores y técnicos deportivos que asegure su actualización permanente y su progreso profesional, adoptando, en los casos que sean necesarios, una formación específica para los técnicos que vayan a desarrollar su actividad con deportistas con discapacidad.

Artículo 40.- Entrenadores de alto nivel

Los entrenadores y técnicos deportivos podrán ser declarados de alto nivel cuando, ejerciendo las funciones de dirección técnica sobre deportistas de alto nivel, cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

CAPÍTULO VII

De los árbitros y jueces deportivos

Artículo 41.- Definición

1. Se consideran árbitros o jueces deportivos aquellas personas que llevan a cabo funciones de aplicación de las reglas técnicas en el desarrollo de competiciones deportivas.
2. En las competiciones deportivas oficiales, la condición de árbitros o jueces deportivos se acreditará mediante la correspondiente licencia federativa para cuya obtención las federaciones deportivas deberán asegurar su formación previa y la tenencia de los conocimientos necesarios para el desempeño de su labor. En las competiciones y actividades deportivas no oficiales, las funciones de los árbitros o los jueces deportivos vendrán determinadas en la propia organización de las mismas.
3. Las federaciones deportivas españolas deberán prever un programa específico de formación continua de los árbitros y jueces deportivos que asegure su actualización permanente y su progreso



profesional, para cuya elaboración podrán colaborar las asociaciones que se hayan constituido para la defensa de sus intereses.

4. Cuando los árbitros perciban por su actuación una retribución por su labor y no un simple reintegro de gastos por desplazamiento, estancia u otro concepto, conforme, en este último caso, a la legislación laboral y fiscal, tendrán que formalizar su relación en el marco de las opciones que establece la normativa laboral y ser incorporados al sistema de Seguridad Social.

5. Los árbitros solo podrán ser privados del ejercicio habitual de su actividad en virtud de expediente contradictorio previsto en el ordenamiento jurídico o en la normativa interna de las federaciones deportivas o ligas profesionales.

Artículo 42.- *Árbitros de alto nivel*

Los árbitros y jueces deportivos podrán ser declarados de alto nivel cuando, ejerciendo las funciones en competiciones deportivas internacionales o estatales en las que participen deportistas y técnicos o entrenadores de alto nivel, cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

CAPÍTULO VIII

El voluntariado deportivo

Artículo 43.- *Voluntariado deportivo*

1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por voluntariado deportivo la participación ciudadana organizada en el ejercicio de las acciones de este tipo en el área de actuación del deporte mediante el establecimiento de programas de acción voluntaria en dicha área, de acuerdo a lo establecido en la letra e) del artículo 6.1 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

2. A aquellas personas que desarrollen sus labores de voluntariado en el ámbito descrito en el apartado anterior, les será aplicable el régimen recogido en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

3. El Consejo Superior de Deportes fomentará y promocionará el voluntariado deportivo a través de mecanismos o instrumentos con otras Administraciones Públicas, especialmente con las Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Universidades, entidades deportivas y aquellas otras que colaboren, difundan, participen o desarrollen programas de acción voluntaria en el ámbito de actuación del deporte en el territorio nacional.

4. Las personas voluntarias deberán acreditar el conocimiento y formación suficientes cuando les sean encomendadas tareas de carácter técnico.

TÍTULO III

De las entidades deportivas

CAPÍTULO I



Disposiciones comunes

Artículo 44.- *Registro de Entidades Deportivas*

1. En el Consejo Superior de Deportes existirá un Registro de Entidades Deportivas en el que se inscribirán las federaciones deportivas españolas, las ligas profesionales, sus normas estatutarias y reglamentarias, las personas que ostenten la Presidencia y titulares de los demás órganos directivos, la confederación recogida en la Disposición adicional undécima de esta Ley, sus Estatutos, las entidades que participen en la competición profesional o profesionalizada y aquellas otras entidades que, reglamentariamente, se determinen y que desarrollen una actividad en el ámbito de la actividad deportiva contemplada en esta Ley.

2. La inscripción de la entidad deportiva produce su reconocimiento oficial a efectos de esta Ley y fija la reserva de nombre. Asimismo, establece la protección de sus símbolos y emblemas frente a usos ilegítimos por parte de terceras personas y el reconocimiento de los beneficios que la normativa vigente le otorgue a aquella, sin perjuicio de lo establecido en la legislación sobre marcas.

3. Mediante Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Deporte se podrá establecer un sistema para la comunicación de datos e informaciones en relación con las entidades inscritas en los registros autonómicos en los términos que admita la legislación de protección de datos de carácter personal.

Artículo 45.- *Facultades en materia de control económico*

El Consejo Superior de Deportes ostenta las siguientes facultades en materia de control económico de las entidades deportivas:

a) Recabar información, documentos, soportes, realizar audiencias, pruebas testificales y cuantos otros elementos considere necesarios en este orden de actuaciones para la comprobación de la situación de las federaciones deportivas españolas y de las ligas profesionales.

Dicha información podrá ser recabada bien de la federación deportiva española y de la liga profesional o bien, de forma directa y reservada, de sus órganos de control económico.

b) Establecer la obligación de remisión periódica de los documentos e informaciones necesarios para el cumplimiento de los fines perseguidos en esta Ley.

c) Convocar y solicitar información directamente a los auditores de las federaciones deportivas españolas y de las ligas profesionales.

d) Ordenar la realización de auditorías complementarias.

e) Denunciar al Instituto de Contabilidad y Auditoría y demás órganos de control las eventuales irregularidades en las que puedan haber incurrido los auditores de las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales.

f) Denunciar al Ministerio Fiscal y al Tribunal de Cuentas, en el ámbito de sus respectivas competencias, las irregularidades que puedan haber conocido como consecuencia del ejercicio de sus funciones.



g) Ordenar a los órganos correspondientes de ejecución de las subvenciones el reintegro de las cantidades o la paralización de las disposiciones de fondos cuando se cumplan los supuestos que habilitan tales medidas.

Artículo 46.- *Efectos de la declaración de utilidad pública*

La declaración o reconocimiento de utilidad pública, además de los beneficios que el ordenamiento jurídico general otorga, conlleva:

- a) El uso de la calificación de «utilidad pública» a continuación del nombre de la respectiva entidad.
- b) La prioridad en la obtención de recursos en los planes y programas de promoción deportiva de la Administración General del Estado y de las Entidades Locales, así como de los Entes o Instituciones públicas dependientes de las mismas.
- c) El acceso preferente al crédito oficial del Estado.

CAPÍTULO II

De las federaciones deportivas españolas

SECCIÓN 1ª

Naturaleza, órganos y estructura

Artículo 47.- *Naturaleza de las federaciones deportivas españolas*

1. Las federaciones deportivas españolas son entidades privadas de naturaleza asociativa, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia que tienen como objeto el fomento, la organización, la reglamentación, el desarrollo y la práctica, en el conjunto del territorio del Estado, de las modalidades y especialidades deportivas que figuran en sus Estatutos.
2. Las federaciones deportivas españolas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2 de esta Ley, gozarán de un régimen especial por la actividad que desarrollan y por las funciones públicas que les son encomendadas, respetando su naturaleza en los términos establecidos en el apartado anterior.
3. Las federaciones deportivas españolas deberán reconocer e integrar, necesariamente, en sus actividades y en sus órganos de gobierno y representación, según se establezca reglamentariamente, a deportistas, clubes deportivos, técnicos, jueces y árbitros, federaciones deportivas autonómicas y al resto de colectivos interesados que promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo de las modalidades y especialidades deportivas que figuren en sus Estatutos siempre que unos y otros hayan manifestado su voluntad de integrarse en la federación.
4. En los deportes donde exista una competición profesional de ámbito estatal, la liga profesional correspondiente se integrará necesariamente en la federación en los términos que establecen esta Ley y sus normas de desarrollo.



5. La autorización de una federación deportiva española se perfecciona con su inscripción en el Registro de Entidades Deportivas, momento a partir del cual se entiende legalmente constituida. La resolución que se dicte sobre la autorización o denegación deberá ser suficientemente motivada.

6. La autorización de una federación deportiva se producirá cuando exista, previamente reconocida, una modalidad deportiva no atribuida a otra federación deportiva española y se valore que existe interés para el deporte español en función de la implantación nacional e internacional y de la propia viabilidad del proyecto, todo ello en los términos que reglamentariamente se establezcan.

7. La revocación del reconocimiento de las federaciones deportivas españolas se producirá por la desaparición de los motivos que dieron lugar al mismo y los efectos de dicha revocación lo serán desde que se inscriba en el Registro de Entidades Deportivas la resolución que la acuerde, que deberá ser suficientemente motivada. Dicha revocación impide que la entidad pueda considerarse, desde ese mismo momento, como una federación deportiva española.

8. Las federaciones deportivas españolas y las autonómicas integradas en las mismas tendrán la consideración de entidades de utilidad pública.

Artículo 48.- *Modalidad y especialidad deportivas*

1. El reconocimiento de las modalidades y especialidades deportivas de ámbito estatal se realiza por el Consejo Superior de Deportes en los términos legal y reglamentariamente previstos, a instancia de los interesados que practiquen u organicen las mismas o, en su caso, de las federaciones deportivas españolas cuando se trate de especialidades.

Este acto es previo al reconocimiento de la respectiva federación deportiva española o, en su caso, de la incorporación de la modalidad o especialidad a una federación deportiva española en sus Estatutos y reglamentos.

2. En todo caso, serán criterios de valoración el reconocimiento previo de la modalidad en el ámbito internacional, la existencia de una tradición sobre su forma de realización y de reglas internacionales de práctica y técnicas, la implantación real en nuestro país y el interés que, para el deporte español, aprecie el Consejo Superior de Deportes.

El reconocimiento de especialidades deportivas debe valorar su autonomía funcional dentro de la modalidad respectiva, la existencia de competiciones propias, su reconocimiento en el ámbito deportivo y, en general, el interés que, para el deporte y para su práctica, aprecie el Consejo Superior de Deportes.

3. Una modalidad deportiva de ámbito estatal y, en su caso, las especialidades que se deriven de la misma, solo podrán estar reconocidas a una única federación deportiva española.

4. Asimismo, cada federación deportiva española desarrollará su actividad en una única modalidad deportiva y las especialidades que puedan ser reconocidas.

No obstante lo anterior, una federación deportiva española podrá solicitar del Consejo Superior de Deportes el reconocimiento del desarrollo de más de una modalidad cuando con ello se consiga una solución más eficiente y no sea contrario a la organización internacional del deporte. Si se refiere a



modalidades reconocidas, esta posibilidad deberá ser aprobada por mayoría absoluta de las Asambleas Generales de las federaciones deportivas españolas correspondientes.

Esta integración podrá ser solicitada, igualmente, por acuerdo de dos o más federaciones deportivas españolas, con las mayorías establecidas en el párrafo precedente.

Además de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las federaciones deportivas españolas de deportes para personas con discapacidad podrán desarrollar más de una modalidad deportiva dentro de su ámbito de actuación.

Artículo 49.- *Estructura y funcionamiento de las federaciones deportivas españolas*

1. Las federaciones deportivas españolas regularán su estructura interna y su funcionamiento a través de sus Estatutos, de acuerdo con principios democráticos y representativos.
2. Son órganos de gobierno, representación y control de las federaciones deportivas españolas, con carácter necesario, la Asamblea General, la Presidencia, la Junta Directiva y la Comisión de Control Económico.

Con carácter potestativo, las federaciones deportivas españolas podrán tener una Dirección Ejecutiva.

Además, los Estatutos podrán prever la existencia de una comisión delegada de la Asamblea General.

3. Los Estatutos establecerán la composición, funciones, duración y número de mandatos de los órganos de gobierno y representación, así como la organización complementaria de las federaciones deportivas españolas, debiéndose acomodar a los criterios establecidos en las disposiciones de desarrollo de la presente Ley.
4. Los Estatutos de las federaciones deportivas españolas, así como sus modificaciones, una vez ratificados por el Consejo Superior de Deportes, serán inscritos en el Registro de Entidades Deportivas, entrando en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo, los Estatutos estarán permanentemente accesibles en la Web de la federación, sin perjuicio de cualquier otro medio que asegure su publicidad.
5. Los reglamentos disciplinario, electoral, de competición y de organización interna, en tanto regule este la composición y el funcionamiento de los órganos obligatorios de la federación, así como sus modificaciones, una vez ratificados por el Consejo Superior de Deportes, serán inscritos en el Registro de Entidades Deportivas, entrando en vigor tras su publicación en la Web federativa mediante forma que asegure la fecha de inserción y, en todo caso, en el plazo de un mes desde la citada ratificación, sin perjuicio de cualquier otro medio que asegure su publicidad.

Artículo 50.- *Contenido mínimo de los Estatutos de las federaciones deportivas españolas*

1. Los Estatutos son el instrumento esencial de ordenación y funcionamiento de la federación deportiva española y deben determinar los órganos que componen su estructura, la forma de elección y cese de los mismos, las formas de integración en la federación, los derechos y deberes de sus miembros y el de sus estamentos, así como los demás hechos que se consideren precisos para la ordenación de su vida interna, de acuerdo a lo previsto en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.



En caso de que esté prevista una comisión delegada de la Asamblea General, deberán determinar el régimen de elección, sus competencias y su funcionamiento.

2. De forma específica, los Estatutos deben prever el régimen de la estructura directiva y los posibles conflictos de intereses entre quienes ostenten funciones de dirección, los demás miembros de los órganos de participación y dirección y la provisión de bienes y servicios para la misma, determinando la transparencia de los procesos de reclamación y las consecuencias que se prevean para el incumplimiento del régimen de conflictos de intereses.

3. Los Estatutos deben prever, de manera detallada y diferenciada, el régimen de responsabilidad que asumen la persona que ostente la Presidencia y los demás miembros de los órganos directivos de representación y de gestión de la federación y que dimanen tanto de sus actos en el marco de la estructura asociativa frente a sus miembros como frente a terceras personas de los actos derivados de las obligaciones civiles, mercantiles, administrativo-públicas y cualesquiera otras en las que haya incurrido la federación.

4. Los Estatutos deben prever específicamente el régimen de dedicación y, en su caso, retribución de quien ostente la Presidencia de la federación deportiva española.

El régimen concreto de vinculación contractual o de compensación de gastos debe habilitarse por la Asamblea de la respectiva federación y será público en su página Web.

Los demás directivos, con excepción de la persona que ostente la Dirección Ejecutiva, solo podrán percibir indemnizaciones por gastos en las cuantías normalizadas y generales que para cada federación acuerde la respectiva Asamblea, tomándose como referencia las establecidas para la función pública.

5. Los Estatutos fijarán la existencia de comisiones de género y de deporte inclusivo, que se encargarán, entre otras funciones que puedan ejercer, de gestionar las incidencias producidas en su seno relativas a discriminación por razón de sexo, orientación sexual, expresión de género, identidad sexual o contra las personas con discapacidad, así como de orientar a deportistas y personal de la federación en la prevención y detección de estas situaciones.

Artículo 51.- *Reglas para la elección y designación de órganos*

1. La consideración de electores y elegibles para la Asamblea General se reconoce a:

a) Las personas deportistas, mayores de edad para ser elegibles y no menores de dieciséis años para ser electores, que tengan licencia en vigor en los términos de esta Ley en el momento de las elecciones y la hayan tenido durante el año o la temporada deportiva inmediatamente anterior, siempre que hayan participado en competiciones o actividades deportivas de la respectiva modalidad o especialidad de carácter oficial y ámbito estatal o, en su caso, internacional, salvo por causa de lesión debidamente acreditada, situación de embarazo o período legal de maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, o por no haber existido competición o actividad deportiva de tal condición. En estos casos bastará acreditar la posesión de licencia y la edad mínima exigida.



b) Los técnicos, jueces y árbitros, y otros colectivos interesados, en similares circunstancias a las señaladas en la letra a) de este apartado.

c) Los clubes deportivos inscritos en la respectiva federación, en las circunstancias que les sean aplicables de las previstas en la letra a) de este apartado.

2. La Presidencia de la federación deportiva española es elegida por su Asamblea General entre las personas que tienen reconocida la condición de elector y elegible de acuerdo al apartado anterior o sus representantes en el caso de los clubes deportivos, y las personas que ostenten la presidencia de las federaciones deportivas autonómicas cuando se encuentren integradas en la respectiva federación deportiva española.

3. Los miembros de la Junta Directiva serán designados y cesados por la Presidencia de la federación deportiva española, dando cuenta a la Asamblea General.

La composición de la Junta Directiva se ajustará al criterio de composición equilibrada establecido en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, respetando la representación de las personas deportistas con discapacidad en las federaciones que hayan procedido a la integración prevista en el artículo 5 de la presente Ley.

4. La Comisión de Control Económico, con un máximo de cinco miembros independientes e imparciales, será elegida por la Asamblea General entre personas con acreditada formación de carácter económico, financiero y auditoría.

Los miembros de esta Comisión no pueden serlo también al mismo tiempo de la Asamblea General ni de la Junta Directiva, pero sí podrán ejercer las mismas funciones en más de una federación deportiva española.

La composición de esta Comisión se ajustará al criterio de composición equilibrada establecido en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

5. La persona titular de la Dirección Ejecutiva es designada y cesada por la Presidencia y no puede pertenecer a la Asamblea General ni a la Junta Directiva.

Las funciones encomendadas a la Dirección Ejecutiva serán asumidas por la Presidencia en caso de no creación de este órgano.

SECCIÓN 2ª

Federaciones deportivas autonómicas

Artículo 52.- *Federaciones deportivas autonómicas*

1. Para la participación de sus miembros en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o internacional, las federaciones deportivas de ámbito autonómico se integrarán necesariamente en las respectivas federaciones deportivas españolas.



Cuando se pretenda la integración de las federaciones deportivas afectadas por el supuesto mencionado en el artículo 5.4 de esta Ley será necesario que las federaciones deportivas autonómicas hayan integrado, en las condiciones señaladas en dicho precepto, las correspondientes modalidades o especialidades deportivas practicadas por personas con discapacidad.

2. Los Estatutos de las federaciones deportivas españolas incluirán los sistemas de integración y representatividad de las federaciones deportivas de ámbito autonómico, según lo establecido en las disposiciones de desarrollo de la presente Ley. Además, los Estatutos dispondrán un sistema para la solución de los conflictos de todo orden que puedan plantearse entre una federación deportiva española y las federaciones autonómicas integradas.

No obstante lo anterior, se establecerán, en un convenio único para todas las federaciones autonómicas, las obligaciones de contenido económico y la concreción de los criterios de representatividad en la Asamblea General en todo aquello que no esté regulado en los Estatutos de las federaciones deportivas españolas.

Reglamentariamente se establecerá la distribución de obligaciones mínimas en el caso de que las federaciones no alcancen un acuerdo para la celebración de un convenio de integración.

En todo caso, para que las federaciones de ámbito autonómico puedan integrarse en las federaciones deportivas españolas o, en su caso, mantener esa integración, deberán eliminar cualquier obstáculo o restricción que impida o dificulte la participación de personas extranjeras que se encuentren legalmente en España y de sus familias en las actividades deportivas que organicen.

3. La integración de la federación autonómica en la correspondiente federación española supone la asunción de la representación de esta en su respectivo ámbito territorial. Las federaciones deportivas españolas no podrán establecer delegaciones territoriales o estructuras similares al margen de aquellas.

4. Cuando no exista federación autonómica o la misma no esté integrada, la federación española correspondiente podrá establecer una delegación para desarrollar la actividad puramente estatal o que habilite para la participación en las competiciones estatales, integrada por una persona cuyo nombramiento y cese compete a la Presidencia, en los términos que establezcan los Estatutos de la correspondiente federación.

5. Las federaciones deportivas autonómicas o, en su caso, las delegaciones de las federaciones deportivas españolas, podrán desarrollar en su respectivo territorio las actividades propias que derivan de la promoción, desarrollo y organización de competiciones y eventos deportivos de todas las modalidades y, en su caso, especialidades deportivas que estén reconocidas para la federación deportiva española respectiva.

6. Los Estatutos de la federación deportiva española determinarán las causas, necesariamente graves y persistentes, que permitan la separación de las federaciones deportivas autonómicas, así como un procedimiento de separación y sus efectos.

La decisión final sobre la separación recaerá en la Asamblea General de la federación deportiva española.



7. Los acuerdos de integración y separación celebrados en el contexto de este artículo serán objeto de comunicación al Consejo Superior de Deportes para su adecuación y cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y sus normas de desarrollo.

Artículo 53.- *Licencia deportiva*

1. Para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbitos estatal e internacional será preciso estar en posesión de una licencia expedida por la correspondiente federación deportiva española, que vincula a esta con quien la ostenta en los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente. No obstante lo anterior, las licencias expedidas por las federaciones de ámbito autonómico habilitarán para dicha participación siempre y cuando estas se hallen integradas en las federaciones deportivas españolas, se expidan dentro de las condiciones mínimas de carácter económico que fijen estas y comuniquen su expedición a las mismas.

2. Las Comunidades Autónomas podrán establecer convenios de reconocimiento recíproco de las licencias expedidas por cada una de ellas y del régimen de sanciones que deriven del mismo.

3. En todo caso, se asegurará un régimen estadístico, documental y registral que permita diferenciar los efectos de la licencia en los respectivos ámbitos territoriales en orden a la determinación respectiva de la condición de electores y elegibles; la participación o la distribución económica de los derechos devengados como consecuencia de la expedición; la suscripción de un único seguro deportivo de acuerdo a lo previsto en la letra e) del artículo 22.2 de esta Ley y aquellas otras delimitaciones que permitan sin confusión el ejercicio de las respectivas competencias por ambas federaciones.

4. En la expedición de licencias se garantizará la no discriminación por razón de orientación sexual, expresión de género o identidad sexual.

5. En ningún caso se podrán imponer restricciones a la expedición de licencias a personas extranjeras que se encuentren legalmente en España amparándose en la aplicación de la normativa federativa nacional o internacional.

6. En ningún caso las federaciones deportivas podrán negarse a expedir licencias a deportistas menores de edad aun cuando la entidad de origen pretenda hacer valer derechos de retención con base en lo estipulado en la normativa federativa o en los contratos celebrados entre aquellas.

7. El incumplimiento de lo establecido en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo será considerado, a efectos sancionadores, como una injustificada negativa a la expedición de licencias.

8. En ningún caso la obtención de la licencia puede implicar la sumisión automática a cualquier sistema extrajudicial de conflictos.

SECCIÓN 3ª

Funciones de las federaciones deportivas españolas

Artículo 54.- *Funciones a desarrollar bajo la tutela del Consejo Superior de Deportes*



Las federaciones deportivas españolas ejercen, bajo la tutela del Consejo Superior de Deportes, las siguientes funciones:

a) Ejecutar lo establecido en los Programas de Desarrollo Deportivo que suscriban el Consejo Superior de Deportes y las federaciones deportivas en relación con la actividad deportiva susceptible de subvención.

b) Calificar las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal que no sean profesionales ni profesionalizadas.

c) Expedir licencias en los términos previstos en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.

A estos efectos, únicamente tendrá carácter de función pública de carácter administrativo el acto o resolución por el que se concede o se deniega la expedición de la licencia.

d) Ejercer el control de las subvenciones que asignen a las asociaciones y entidades deportivas en la forma que reglamentariamente se determine.

e) Organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter internacional que se celebren en el territorio del Estado.

f) Ejercer la potestad sancionadora y disciplinaria en los términos establecidos en la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo.

Artículo 55.- *Funciones propias de las federaciones deportivas españolas*

Son funciones propias de las federaciones deportivas españolas:

a) Organizar las actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal.

Ello les atribuye la titularidad, a todos los efectos, de los derechos sobre dichas competiciones y su explotación comercial, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra e) del artículo 100 de la presente Ley en relación con las competiciones profesionales y los derechos e intereses legítimos de las entidades deportivas y de las personas deportistas que participan.

b) Organizar o encomendar la gestión de las competiciones profesionalizadas en los términos previstos en esta Ley.

c) Reconocer y, en su caso, organizar actividades y competiciones no oficiales que puedan desarrollarse en su ámbito, con participación de equipos y deportistas de más de una Comunidad Autónoma, y fijar los requisitos y condiciones de la celebración de dichas actividades.

Estas competiciones pueden provenir de la propia federación o de instituciones públicas o privadas que soliciten reconocimiento federativo.

d) Establecer, en las competiciones en las que existen relaciones laborales y económicas, sistemas de prevención de la insolvencia y de abono de salarios de las personas deportistas y de las deudas en



términos similares a los que establecen las ligas profesionales respecto de la actividad deportiva que administran.

Con el fin de garantizar su idoneidad, compatibilidad con el resto de la actividad deportiva, legalidad y oportunidad, los criterios y requisitos de participación que se establezcan deberán ser aprobados por el Consejo Superior de Deportes.

e) Elaborar y aprobar la normativa estatutaria y reglamentaria para su ratificación posterior por el Consejo Superior de Deportes de acuerdo a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 49 de esta Ley.

f) Promover el desarrollo de la actividad deportiva que se corresponda con su modalidad o especialidades en todo el ámbito del Estado.

g) Diseñar, elaborar y ejecutar, en colaboración, en su caso, con las federaciones de ámbito autonómico, los planes de preparación de las personas deportistas de alto nivel y de alto rendimiento en su respectiva modalidad o especialidades deportivas.

h) Colaborar con la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en la formación de técnicos deportivos en el marco de la regulación de las enseñanzas deportivas de régimen especial, así como en los programas de formación continua.

i) Contribuir con la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en la prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte.

j) Elegir las personas deportistas que han de integrar las selecciones nacionales.

k) Ejercer la potestad disciplinaria, en aquellas cuestiones que no estén integradas en el artículo anterior, dentro de las competencias que le son propias.

l) Desarrollar los programas de tecnificación deportiva.

m) Todas aquellas que puedan redundar en beneficio de las actividades que le son propias y sirvan al desarrollo de la modalidad deportiva que administran.

o) Todas aquellas previstas en esta Ley o en otras normas del ordenamiento jurídico.

SECCIÓN 4ª

Patrimonio y gestión económica de las federaciones deportivas españolas

Artículo 56.- Patrimonio de las federaciones deportivas españolas

1. Constituye el patrimonio de las federaciones deportivas españolas el conjunto de bienes y derechos cuya titularidad le correspondan.

2. Son recursos de las federaciones:



- a) Los rendimientos de las actividades que desarrollan.
 - b) Los frutos y rentas de su patrimonio.
 - c) Los derivados de las operaciones de crédito que puedan realizar.
 - d) Las donaciones, herencias, legados y premios.
 - e) Cualesquiera otros que puedan serle atribuidos por disposición legal, convenio, contrato u otro negocio jurídico.
3. En caso de disolución de una federación deportiva española, su patrimonio neto, si lo hubiera, se aplicará por el Consejo Superior de Deportes a la realización de funciones y actividades de carácter análogo.

Artículo 57.- *Presupuesto y gestión económica*

1. Las federaciones deportivas españolas aprobarán para cada ejercicio económico un presupuesto que refleje el conjunto de ingresos y gastos previstos.

La liquidación del presupuesto anual se remitirá a los miembros de la Asamblea de forma individual y se hará pública en la Web de la federación al menos un mes antes del sometimiento a la aprobación por la Asamblea correspondiente.

La aprobación de presupuestos cuando se encuentre vigente un Plan de Viabilidad precisará de informe preceptivo y vinculante del Consejo Superior de Deportes.

2. Las federaciones deportivas españolas tienen su propio régimen de administración y gestión de presupuesto y patrimonio, siéndoles de aplicación, en todo caso, las siguientes reglas:

a) Pueden promover y organizar actividades y competiciones deportivas dirigidas al público, debiendo aplicar los beneficios económicos, si los hubiere, al desarrollo de su objeto social.

b) Pueden gravar y enajenar sus bienes inmuebles, tomar dinero a préstamo y emitir títulos representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial, siempre que dichos negocios jurídicos no comprometan de modo irreversible el patrimonio de la federación o su objeto social.

Cuando se trate de bienes inmuebles que hayan sido financiados, en todo o en parte, con fondos públicos de la Administración General del Estado, será preceptiva la autorización del Consejo Superior de Deportes para su gravamen o enajenación.

c) Pueden ejercer, complementariamente, actividades de carácter económico, comercial, profesional o de servicios y destinar sus bienes y recursos a los mismos objetivos deportivos, pero en ningún caso podrán repartir beneficios entre sus miembros. Estas actividades deben guardar conexión con su objeto social.

Artículo 58.- *Programas de Desarrollo Deportivo*



1. La actividad de las federaciones deportivas españolas que tenga interés deportivo en los términos que delimite el Consejo Superior de Deportes será subvencionada en el marco de los Programas de Desarrollo Deportivo.

2. Los Programas de Desarrollo Deportivo son el instrumento por el que las federaciones deportivas españolas y el Consejo Superior de Deportes acuerdan los objetivos, programas deportivos, forma de financiación y estructuras de realización del deporte correspondiente, debiendo prestar atención a las modalidades practicadas por personas con discapacidad en los supuestos de integración previstos en el artículo 5 de la presente Ley.

3. Los Programas de Desarrollo Deportivo tendrán un carácter plurianual e irán fijando anualmente las aportaciones de toda índole en función del cumplimiento de los resultados y la disponibilidad presupuestaria.

4. Para el acceso a este instrumento será imprescindible que la federación deportiva española presente un Plan Estratégico de su actividad durante, al menos, el periodo de vigencia del Programa de Desarrollo Deportivo correspondiente.

5. La financiación pública y las subvenciones del Consejo Superior de Deportes se centrarán, esencialmente, en el cumplimiento de los objetivos establecidos de acuerdo al segundo apartado de este artículo, así como en otros programas que aquel organismo autónomo considere de interés.

SECCIÓN 5ª

De los problemas de insolvencia e iliquidez de las federaciones deportivas españolas

Artículo 59.- Dificultades para el cumplimiento de las obligaciones corrientes de carácter transitorio

1. Cuando el Consejo Superior de Deportes detecte una situación que impida a las federaciones deportivas españolas el cumplimiento de sus obligaciones convencionales y legales emitirá un informe detallado con las causas y aprobará un Plan de Viabilidad, que podrá ser propuesto por la propia entidad afectada.

2. El Plan de Viabilidad vinculará a la federación deportiva española a su íntegro cumplimiento.

3. Fuera de estos supuestos se aplicará la legislación concursal. En este caso, el Consejo Superior de Deportes tendrá la facultad de atribuir a otra estructura deportiva la gestión de la respectiva modalidad.

Artículo 60.- Incumplimiento del Plan de Viabilidad

1. El incumplimiento del Plan de Viabilidad habilita al Consejo Superior de Deportes para:

a) Relevar a los órganos de gobierno de la correspondiente federación.

b) Designar transitoriamente una administración diferente.



- c) Asumir los pagos y obligaciones que se refieran a los programas fijados por la federación para asegurar la continuidad de la actividad deportiva.
 - d) Adoptar las medidas de gestión que sean precisas para el cumplimiento del Plan de Viabilidad.
 - e) Modificar el Plan de Viabilidad cuando se considere la imposibilidad de su cumplimiento.
2. Cuando no fuese posible el cumplimiento del Plan de Viabilidad, resultando inviable la federación, el Consejo Superior de Deportes acordará su liquidación.

CAPÍTULO III

De las ligas profesionales

Artículo 61.- Constitución y estructura

1. En las federaciones deportivas españolas donde exista competición oficial de carácter profesional y ámbito estatal se constituirán ligas, integradas exclusiva y obligatoriamente por todas las entidades deportivas o deportistas que participen en dicha competición, según la modalidad o especialidad deportiva de la que se trate, de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 87 de esta Ley.
2. Las ligas profesionales tendrán personalidad jurídica, naturaleza asociativa y gozarán de autonomía para su organización interna y funcionamiento respecto de la federación deportiva española correspondiente de la que formen parte.
3. Los Estatutos y los reglamentos disciplinario; de control económico a las entidades participantes; electoral; de competición en el caso de que lo hubiera; de organización interna; en tanto regule este la composición y el funcionamiento de sus órganos obligatorios; así como sus modificaciones, de las ligas profesionales serán ratificados por el Consejo Superior de Deportes, previo informe preceptivo y no vinculante de la federación deportiva española correspondiente, debiendo incluir los requisitos generales señalados reglamentariamente.

La normativa interna mencionada en el párrafo anterior será inscrita en el Registro de Entidades Deportivas, entrando en vigor tras su publicación en la Web de la liga profesional mediante forma que asegure la fecha de inserción y, en todo caso, en el plazo de un mes desde la citada ratificación, sin perjuicio de cualquier otro medio que asegure su publicidad.

El reconocimiento de una liga profesional se perfecciona con su inscripción en el Registro de Entidades Deportivas, momento a partir del cual se entiende legalmente constituida. La resolución que se dicte sobre la autorización o denegación de su inscripción deberá ser suficientemente motivada.

4. Si por causas económicas o de otra índole la liga profesional no pudiera desarrollar su función, la misma se asumirá por la federación respectiva mediante acuerdo del Consejo Superior de Deportes que determine las condiciones de dicho ejercicio, el plazo y las condiciones de realización.



5. Las ligas profesionales ostentarán las competencias que les delegue la federación española correspondiente y las que se recogen en el artículo 100 de la presente Ley en calidad de organizadores de las competiciones profesionales.

Artículo 62.- *Contenido mínimo de los Estatutos de las ligas profesionales*

1. Los Estatutos son el instrumento esencial de ordenación y funcionamiento de la liga profesional y deben determinar los órganos que componen su estructura, entre los que deberá existir una Comisión de Control Económico cuya composición y obligaciones se asemejarán a las que se establecen en las federaciones deportivas para este órgano; la forma de elección y cese de los mismos; las formas de integración en la liga; los derechos y deberes de sus miembros y los demás elementos que se consideren precisos para la ordenación de su vida interna.

2. De forma específica, los Estatutos deben prever el régimen de su estructura directiva y los posibles conflictos de intereses entre quienes ostenten funciones de dirección, los demás miembros de los órganos de participación y dirección y la provisión de bienes y servicios para la misma, determinando la transparencia de los procesos de reclamación y las consecuencias que se prevean para el incumplimiento del régimen de conflictos de intereses.

Los Estatutos deben prever de manera detallada y diferenciada el régimen de responsabilidad que asumen la Presidencia y los demás miembros de los órganos directivos, de representación y de gestión de la liga profesional y que dimanen tanto de sus actos en el marco de la estructura asociativa frente a sus miembros, como frente a terceras personas de los derivados de las obligaciones civiles, mercantiles, administrativo-públicas y cualquier otra en las que haya incurrido la liga.

3. El régimen concreto de vinculación contractual o de compensación de gastos de la persona que ostente la Presidencia debe habilitarse por la Asamblea de la respectiva liga y será público en su página Web.

CAPÍTULO IV

Disposiciones comunes a federaciones deportivas españolas y ligas profesionales

SECCIÓN 1ª

Control económico

Artículo 63.- *Control económico*

1. Las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales establecerán su propio sistema de control económico a propuesta de su Comisión de Control Económico.

El sistema de control puede consistir en sistemas de intervención previa de la propia Comisión o control financiero posterior por núcleos de actividad.

2. En todo caso, las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales se someterán a una auditoría anual. En el caso de las primeras, el Consejo Superior de Deportes podrá realizar o encargar



su realización cuando así se lo solicite la respectiva federación, respetando los plazos máximos y mínimos de contratación establecidos en la legislación vigente sobre auditorías.

En la realización de estas auditorías y, en relación con el deber de colaboración en las mismas, quedan sometidas la propia federación y cualquier persona jurídica vinculada, participada o dependiente de la misma o sobre la que ejerza la federación o la liga una influencia decisiva y que contribuya a la realización de sus actividades.

El informe de las auditorías que se realicen de acuerdo a lo dispuesto en este apartado deberá ser remitido al Consejo Superior de Deportes cuando este no las haya realizado o encargado.

3. La Comisión de Control Económico respectiva o cualquiera de sus miembros de forma individual pondrá en conocimiento del Consejo Superior de Deportes la existencia de irregularidades de carácter económico, falta de atención a los requerimientos, insuficiencia de información y cualquier otra que considere que pone en situación de dificultad la buena gestión económica de la federación correspondiente.

El Consejo Superior de Deportes garantizará el carácter confidencial de las denuncias y comunicaciones que reciba sobre las cuestiones señaladas en el párrafo anterior.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión de Control Económico deberá remitir al Consejo Superior de Deportes un informe anual, durante el primer trimestre del año posterior, sobre la gestión económica de la federación o la liga correspondiente.

5. El Consejo Superior de Deportes deberá realizar, durante el año posterior al ejercicio natural sobre el que se refieran los datos, un informe sobre la situación económico-financiera de las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales, que será publicado en la página Web del organismo.

SECCIÓN 2ª

De la gobernanza de las federaciones deportivas y las ligas profesionales

Artículo 64.- Normas de gobernanza

1. Son deberes de los miembros de la Junta Directiva y, en su caso, de la comisión delegada u órganos de gestión y dirección en el caso de las ligas profesionales, los siguientes:

- a) Oponerse a los acuerdos contrarios al ordenamiento jurídico, a los Estatutos o al interés de la entidad.
- b) Mantener en secreto cuantos datos o informaciones conozcan en el desempeño de sus cargos, no pudiendo utilizarlos en beneficio propio o de tercero.
- c) Abstenerse de intervenir en deliberaciones y votaciones de cualquier cuestión en la que pudieran tener interés particular.
- d) No hacer uso indebido del patrimonio de la federación deportiva o de la liga ni valerse de su posición para obtener ventajas patrimoniales.



e) No obtener ventaja respecto de las oportunidades de negocio que conozcan en su condición de miembros de la Junta Directiva o de la comisión delegada.

2. La persona que ostente la Secretaría de la Junta Directiva deberá atender a la legalidad formal y material de las actuaciones de la Junta y comprobar la regularidad estatutaria y el cumplimiento de las disposiciones emanadas de los órganos reguladores, así como velar por la observancia de los principios o criterios de buen gobierno.

3. En la memoria económica que han de presentar las federaciones deportivas como entidades de utilidad pública y las ligas profesionales, se dará información de todas las sumas dinerarias o aportaciones en especie satisfechas a los miembros de la Junta Directiva.

4. Los directivos y altos cargos de federaciones y ligas deberán suministrar información relativa a la existencia de relaciones de índole contractual, comercial o familiar con proveedores o entidades que tengan vínculos comerciales o profesionales con la federación o la liga de la que forman parte.

Se requerirá información periódica sobre el volumen de transacciones económicas que la federación o la liga mantengan con sus miembros o terceras personas vinculados a ellos. Asimismo, se requerirá información periódica sobre los cargos directivos que las personas responsables de federaciones y ligas desempeñan, en su actividad privada, en otras sociedades o empresas.

Artículo 65.- *Código de Buen Gobierno*

1. Las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales adoptarán un Código de Buen Gobierno con el objeto de mejorar las actuaciones y criterios en materia de composición y funcionamiento de sus órganos de gestión, prever los conflictos de intereses, prevenir los ilícitos de cualquier orden y establecer una estructura transparente y organizada en el desarrollo de su actividad.

2. A estos efectos, estas entidades, después de cada elección de Presidencia, realizarán un plan de riesgo relativo al gobierno corporativo, adoptándose las medidas adecuadas.

3. Entre las previsiones del Código se incluirá el establecimiento de un sistema de autorización de operaciones donde se determinará quién o quiénes deben aprobar, con su firma, en función de su cuantía, cada una de las operaciones que realice la federación o la liga, regulando un sistema de segregación de funciones en el que ninguna persona pueda intervenir en todas las fases de una transacción.

4. El seguimiento del Código de Buen Gobierno se atribuirá a terceros independientes o a un órgano interno formado por personas sin vinculación alguna de carácter económico o profesional con la entidad deportiva. Los informes o documentos que resulten de dicho seguimiento se harán públicos en la Web.

5. Las federaciones y las ligas deberán elaborar, con carácter anual, un Informe de Buen Gobierno, que someterán a aprobación de la Asamblea General. En dicho informe se concretará el grado de cumplimiento de las recomendaciones asumidas o, en caso contrario, se determinarán las razones por las que no se han cumplido.



El informe, una vez aprobado por la Asamblea General, será remitido al Consejo Superior de Deportes.

Artículo 66.- *Transparencia de la información*

1. Sin perjuicio de las obligaciones que sean procedentes en aplicación del artículo 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales harán público en sus páginas Web:

- a) Los Estatutos, reglamentos y normas internas de aplicación general.
 - b) La estructura organizativa, con identificación de las personas que integran los órganos de gobierno y determinación de los responsables del ejercicio de las funciones directivas.
 - c) Sede física, horario de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico.
 - d) El presupuesto aprobado por la Asamblea.
 - e) La liquidación del presupuesto del año anterior.
 - f) El informe de auditoría de las cuentas y los informes de la Comisión de Control Económico.
 - g) Las subvenciones y ayudas públicas y privadas recibidas, con indicación de importe, finalidad y beneficiarios.
 - h) Las actas de la Asamblea General y, en su caso, de la Junta Directiva u órganos equivalentes.
 - i) Información suficiente sobre los proveedores de la federación y de la liga y régimen de contratación con los mismos.
 - j) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de las actividades que sean de su competencia.
 - k) Los informes sobre el grado de cumplimiento de los códigos de buen gobierno que se realicen.
 - l) Las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte o de otros órganos disciplinarios que afecten a la respectiva federación o liga. Dicha publicación se realizará en los términos que establece la legislación vigente en materia de protección de datos personales.
2. Además, las federaciones deportivas españolas deberán publicar, en las mismas condiciones:
- a) Los Programas de Desarrollo Deportivo suscritos con el Consejo Superior de Deportes.
 - b) Retribuciones percibidas por la estructura directiva profesional de la federación.
 - c) El Programa deportivo plurianual.



d) Indicación de los convenios y contratos suscritos públicos y privados, con mención del objeto, duración, obligaciones de las partes, importe, modificaciones y, en su caso, procedimiento de adjudicación.

e) Los calendarios deportivos.

3. La publicación de lo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo debe realizarse de una manera segura y comprensible, en condiciones que permitan la localización y la búsqueda con facilidad y en todo caso, en compartimentos temáticos suficientemente claros y precisos.

4. La responsabilidad de la publicación y la actualización recae directamente sobre la persona que ostente la Dirección Ejecutiva de la federación o la persona que ejerza funciones análogas en la liga profesional. El incumplimiento de esta obligación supondrá la comisión de una infracción laboral de carácter grave por la persona responsable.

SECCIÓN 3ª

Medidas adicionales de control

Artículo 67.- Facultades de actuación del Consejo Superior de Deportes

1. Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones encomendadas a las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales y la regularidad de su funcionamiento, el Consejo Superior de Deportes podrá llevar a cabo las siguientes actuaciones, que, en ningún caso, tendrán carácter de sanción.

a) Inspeccionar los libros y documentos oficiales y reglamentarios de la entidad deportiva y de cualquier estructura asociativa, societaria, fundacional o de otro tipo en la que las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales tengan una participación relevante o significativa en términos de capital, en los órganos de dirección o en la adopción de acuerdos.

b) Ordenar una auditoria complementaria o un informe de control específico en relación con materias o partidas concretas del gasto que comprometan la realización de sus fines o la gestión presupuestaria en condiciones de normalidad.

2. Además, el Consejo Superior de Deportes podrá adoptar las siguientes medidas frente a las federaciones deportivas españolas:

a) Convocar los órganos colegiados de gobierno y control para el debate y resolución, si procede, de asuntos o cuestiones determinadas, cuando aquellos no hayan sido convocados, en el tiempo reglamentario, por quien tiene la obligación estatutaria o legal de hacerlo.

b) Controlar e intervenir los pagos que se refieran directamente o puedan afectar a la ejecución de los Programas de Desarrollo Deportivo o a las subvenciones públicas.

c) Suspender motivadamente, de forma cautelar, a la Presidencia o a los demás miembros de los órganos directivos, cuando se incoe contra estas personas expediente sancionador como consecuencia de presuntas infracciones calificadas como muy graves.



CAPÍTULO V

De las entidades que participan en competiciones deportivas oficiales

SECCIÓN 1ª

De los clubes y demás entidades asociativas en competiciones no profesionales

Artículo 68.- *Reconocimiento de la condición de club o entidad deportiva asociativa*

1. La constitución de clubes deportivos o demás entidades deportivas asociativas se determinará por la legislación de las Comunidades Autónomas.
2. El reconocimiento de los clubes o demás entidades deportivas asociativas por las federaciones deportivas autonómicas o por las Comunidades Autónomas vincula a las federaciones deportivas españolas, las cuales no podrán establecer requisitos o elementos adicionales al reconocimiento realizado en sede autonómica cuando la respectiva federación autonómica esté integrada en la correspondiente federación deportiva española.
3. No obstante lo anterior, y con efectos meramente informativos, las federaciones deportivas españolas podrán establecer mecanismos de registro y publicidad de los clubes y entidades que operan en su ámbito respectivo.
4. El reconocimiento recíproco de los clubes y entidades deportivas asociativas entre Comunidades Autónomas estará condicionado al cumplimiento de los requisitos comunes que determine la Conferencia Sectorial de Deporte.

SECCIÓN 2ª

Entidades que pueden participar en competiciones profesionales y profesionalizadas

SUBSECCIÓN 1ª

Cuestiones comunes

Artículo 69.- *Obligaciones*

1. Ninguna entidad deportiva que participe en una competición profesional o profesionalizada podrá mantener más de un equipo en la misma categoría de una competición deportiva.
2. Las entidades deportivas que cuenten con varias secciones deportivas llevarán una contabilidad que permita diferenciar las operaciones referidas a cada una de ellas con independencia de su integración en las cuentas anuales de la entidad.

En la memoria deberá especificarse, en su caso, la distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondientes a las actividades propias de cada sección deportiva de la entidad.



Reglamentariamente se determinarán las normas específicas y los modelos a los que deberán ajustarse las cuentas de las entidades deportivas incluidas en esta Sección, así como la frecuencia y el alcance de la información periódica que deban remitir al Consejo Superior de Deportes.

3. Las entidades deportivas deberán remitir al Consejo Superior de Deportes y al organizador de la competición correspondiente el informe de auditoría de las cuentas anuales y el informe de gestión antes del depósito de dichas cuentas y el resto de información contable y patrimonial que determinen aquellas.

4. Además de lo dispuesto en el párrafo anterior y en la legislación aplicable, el Consejo Superior de Deportes, de oficio o a petición del organizador correspondiente, podrá exigir el sometimiento de cualquier entidad deportiva que participe en una competición profesional o profesionalizada a una auditoría complementaria, con el alcance y el contenido que se determine en el correspondiente acuerdo. La designación de auditores corresponderá al propio Consejo Superior de Deportes.

Artículo 70.- Especialidades en materia de inscripción

1. Las entidades deportivas que participen en una competición profesional o profesionalizada deberán inscribirse en el Registro de Entidades Deportivas y afiliarse a la federación deportiva española respectiva.

2.- La solicitud de inscripción de estas entidades deportivas en el Registro de Entidades Deportivas deberá ir acompañada de la certificación acreditativa de su inscripción en el registro específico correspondiente, cuando su forma jurídica le obligue a ello.

Artículo 71.- Cesión de los jugadores a las selecciones españolas

Las entidades deportivas deberán poner a disposición de la federación deportiva española que corresponda los miembros de su plantilla para la formación de las selecciones nacionales en los términos que reglamentariamente se determinen.

Artículo 72.- Participaciones significativas

1. Toda persona física o jurídica que adquiera, transmita o enajene una participación significativa en una entidad deportiva que participe en competiciones profesionales y profesionalizadas deberá comunicar, en los términos que se establezcan reglamentariamente, al Consejo Superior de Deportes el alcance, plazo y condiciones de la adquisición, transmisión o enajenación.

Cuando la información suministrada no permita determinar las participaciones poseídas o adquiridas indirectamente por una misma persona física o jurídica, el Consejo Superior de Deportes podrá recabar del adquirente cualquier información o documentación complementaria sobre la composición de los miembros de la entidad e identificación de los administradores en empresas del mismo grupo y sociedades dominantes, así como sobre los negocios realizados a través de persona interpuesta.

Se entenderá por participación significativa en estas entidades deportivas aquella que comprenda derechos de voto en los órganos de representación, acciones, participaciones u otros valores convertibles en ellos o que puedan dar derecho directa o indirectamente a su adquisición o



suscripción de manera que el adquirente pase o deje de tener, junto con los que ya posea, una participación en la entidad igual o superior al cinco por ciento.

2. Toda persona física o jurídica que pretenda adquirir en estas entidades deportivas derechos de voto en los órganos de representación, acciones, participaciones o valores que puedan dar derecho directa o indirectamente a su suscripción o adquisición de manera que, unidos a los que posea, pase a detentar una participación en el total de los derechos de voto de la entidad igual o superior al veinticinco por ciento, deberá obtener autorización previa del Consejo Superior de Deportes.

El Consejo Superior de Deportes solo podrá denegar la autorización en los casos señalados en el artículo siguiente. Si no recayere resolución expresa en el plazo de tres meses desde la recepción de la solicitud se entenderá concedida la autorización.

3. A los efectos previstos en este artículo, se considerarán poseídas o adquiridas por una misma persona física o jurídica:

a) Los derechos de voto en los órganos de representación, acciones, participaciones u otros valores poseídos o adquiridos por las entidades pertenecientes a su mismo grupo tal y como este se define en el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

b) Los derechos de voto en los órganos de representación, acciones, participaciones u otros valores poseídos o adquiridos por las demás personas que actúen en nombre propio pero por cuenta de aquella, de forma concertada o formando con ella una unidad de decisión a través de cualquier tipo de vinculación jurídica, comercial, de prestación de servicios de asesoría o de tipo familiar.

Se entenderá, salvo prueba en contrario, que actúan por cuenta de una persona jurídica o de forma concertada con ella los miembros de su órgano de administración.

En todo caso se tendrá en cuenta tanto la titularidad dominical de las acciones o participaciones y demás valores como los derechos de voto que se disfruten en virtud de cualquier título.

Artículo 73.- Posesión de títulos representativos en más de una entidad deportiva

1. Las entidades deportivas que participen en competiciones profesionales o profesionalizadas no podrán participar, directa o indirectamente, ni en el capital de otra sociedad ni ser socio o miembro de cualesquiera otras entidades deportivas que tomen parte en la misma competición o, siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad o especialidad deportiva.

2. Ninguna persona física o jurídica que, directa o indirectamente, ostente una participación en los derechos de voto en una entidad deportiva que participe en competiciones profesionales o profesionalizadas igual o superior al cinco por ciento, podrá detentar directa o indirectamente una participación en los órganos de gobierno o control igual o superior a dicho cinco por ciento en otra entidad deportiva que participe en la misma competición o, siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad o especialidad deportiva.

3. Tampoco podrán adquirirse derechos de voto en los órganos de representación, acciones, participaciones u otros valores que directa o indirectamente puedan dar derecho a su suscripción o



adquisición cuando de ello pueda producirse el efecto de adulterar, desvirtuar o alterar el normal desarrollo de la competición en la que la sociedad participe.

4. El Consejo Superior de Deportes podrá acordar motivadamente la suspensión de la designación de administradores, altos directivos o figuras análogas y el ejercicio del derecho de voto o demás derechos políticos en las entidades deportivas que participen en competiciones profesionales y profesionalizadas en los siguientes supuestos:

a) Cuando la obstrucción, resistencia o negativa a facilitar la correspondiente información o documentación impida verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de adquisición de participaciones significativas.

b) Cuando se compruebe la inexactitud o falsedad en las declaraciones que se hubieren realizado o de los documentos que se hubieren aportado.

c) Cuando la designación de los administradores, altos directivos o figuras análogas o la realización de negocios sobre los títulos de participación de las entidades deportivas puedan adulterar, desvirtuar o alterar el normal desarrollo de la competición.

5. Toda adquisición de derechos de voto en los órganos de representación, acciones, participaciones o valores que den derecho a su suscripción o adquisición que se haga incumpliendo lo establecido en los párrafos anteriores será nula de pleno derecho.

6. Las entidades deportivas que participen en competiciones profesionales o profesionalizadas deberán remitir al Consejo Superior de Deportes y a la federación deportiva española o liga profesional correspondiente, según sea la competición profesionalizada o profesional, respectivamente, información relativa a la titularidad de sus participaciones con la periodicidad y extensión que se determine reglamentariamente.

7. Específicamente, las sociedades de capital obligadas a disponer del libro registro de acciones nominativas o de socios deberán permitir su examen al Consejo Superior de Deportes a requerimiento de este y estarán obligadas a actualizarlo inmediatamente después de que tengan conocimiento de la sucesión en la titularidad de sus acciones o participaciones.

8. Reglamentariamente podrán establecerse mecanismos, limitaciones y prohibiciones adicionales para impedir que una entidad deportiva tenga el control efectivo de otras de la misma competición.

SUBSECCIÓN 2ª

Régimen específico de las sociedades de capital deportivas

Artículo 74.- Constitución de las sociedades de capital deportivas

1. Las entidades deportivas que participen en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional o profesionalizado y ámbito estatal podrán adoptar la forma de sociedades de capital a que se refiere la presente Ley, que quedarán sujetas al régimen general de las sociedades de capital, con las particularidades que se contienen en esta Ley y en sus normas de desarrollo.



2. En la denominación social de las sociedades anónimas se incluirá la abreviatura “SAD”, mientras que en las sociedades de responsabilidad limitada se incluirá la abreviatura “SLD” o “SRLD”.

Las sociedades comanditarias por acciones incluirán en su denominación social “Deportiva” o “D” al final de la necesaria indicación que señala el artículo 6.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, según esta sea o no abreviada, respectivamente.

3. Estas sociedades tendrán como objeto social la participación en competiciones deportivas de carácter profesional o profesionalizado y, en su caso, la promoción y el desarrollo de actividades deportivas, así como otras actividades relacionadas o derivadas de dicha práctica.

Artículo 75.- *Capital mínimo*

1. Reglamentariamente se podrán establecer criterios para la fijación de un capital mínimo de las sociedades de capital deportivas, que en ningún caso podrá ser inferior al establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

2. El capital mínimo de estas sociedades habrá de desembolsarse totalmente y mediante aportaciones dinerarias.

3. En el caso de las sociedades anónimas deportivas, el capital estará representado por acciones nominativas.

Artículo 76.- *Órgano de administración*

1. El órgano de administración de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada deportivas será un Consejo de Administración compuesto por el número de miembros que determinen los Estatutos.

2. No podrán formar parte del Consejo de Administración:

a) Las personas señaladas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y demás normas de general aplicación.

b) Quienes, en los últimos cinco años, hayan sido sancionados por una infracción muy grave en materia deportiva.

c) Quienes estén al servicio de cualquier Administración Pública o sociedad en cuyo capital participe alguna Administración Pública siempre que la actividad del órgano o unidad a la que estén adscritos esté relacionada con la de las sociedades de capital deportivas.

d) Quienes tengan o hayan tenido en los dos últimos años la condición de alto cargo de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella, en los términos señalados en el artículo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, siempre que la actividad propia del cargo tenga relación con la de las sociedades de capital deportivas.



3. Los miembros del Consejo de Administración y quienes ostenten cargos directivos en estas sociedades no podrán, ni por sí ni mediante personas vinculadas entendidas tal y como las define el artículo 231 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ejercer cargo alguno en otra entidad deportiva que participe en la misma competición profesional o profesionalizada o, siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad o especialidad deportiva.

4. El régimen de retribución de los consejeros se regirá por lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

5. Se aplicarán las mismas prerrogativas previstas en los apartados 2 y 3 de este artículo a los administradores de la sociedad comanditaria por acciones.

Artículo 77.- Mercados de capitales

Las sociedades de capital que participen en las competiciones profesionales o profesionalizadas podrán participar en los mercados de capitales en la forma que establezca la respectiva normativa del mercado de capitales y, en concreto, en el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y demás disposiciones de general aplicación.

SUBSECCIÓN 3ª

Otras formas jurídicas

Artículo 78.- Otras formas jurídicas

1. Reglamentariamente se indicarán los documentos adicionales que deben aportarse en relación con cada una de las formas jurídicas utilizadas para la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas.

2. La información a la que se refiere el apartado anterior se pondrá a disposición de la federación deportiva correspondiente, la liga profesional o el organizador de la correspondiente competición profesionalizada para el ejercicio de sus respectivas competencias.

3. En todo caso, les será aplicable a los miembros del órgano de administración de la entidad deportiva lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 76 de esta Ley.

TÍTULO IV

De los Comités Olímpico y Paralímpico

Artículo 79.- Naturaleza y funciones del Comité Olímpico

1. El Comité Olímpico Español es una asociación sin fines de lucro, dotada de personalidad jurídica, cuyo objeto consiste en el desarrollo del movimiento olímpico y la difusión de sus ideales. En atención a este objeto, el Comité Olímpico Español es declarado de utilidad pública.



2. El Comité Olímpico Español se rige por sus propios Estatutos y reglamentos, en el marco de esta Ley y del ordenamiento jurídico español, y de acuerdo con los principios y normas del Comité Olímpico Internacional.

3. El Comité Olímpico Español organiza la inscripción y participación de las personas deportistas españolas en los Juegos Olímpicos, y en otros Juegos o competiciones deportivas continentales o mundiales en el contexto del Movimiento Olímpico Internacional colabora en su preparación y estimula la práctica de las actividades representadas en dichos Juegos.

4. Las federaciones deportivas españolas de modalidades olímpicas deberán formar parte del Comité Olímpico Español.

5. Para el ejercicio de sus funciones corresponde al Comité Olímpico Español la representación exclusiva del deporte español ante el Comité Olímpico Internacional.

Artículo 80.- Naturaleza y funciones del Comité Paralímpico

1. El Comité Paralímpico Español es una asociación sin fines de lucro, dotada de personalidad jurídica, cuyo objeto consiste en el desarrollo del movimiento paralímpico y la difusión de sus ideales. En atención a este objeto, el Comité Paralímpico Español es declarado de utilidad pública.

2. El Comité Paralímpico Español se rige por sus propios Estatutos y reglamentos, en el marco de esta Ley y del ordenamiento jurídico español, y de acuerdo con los principios y normas del Comité Paralímpico Internacional.

3. El Comité Paralímpico Español organiza la inscripción y participación de las personas deportistas españolas en los Juegos Paralímpicos, y en otros Juegos o competiciones deportivas continentales o mundiales en el contexto del Movimiento Paralímpico Internacional colabora en su preparación y estimula la práctica de las actividades representadas en dichos Juegos.

4. Las federaciones deportivas españolas de modalidades paralímpicas deberán formar parte del Comité Paralímpico Español.

5. Para el ejercicio de sus funciones corresponde al Comité Paralímpico Español la representación exclusiva del deporte español ante el Comité Paralímpico Internacional.

Artículo 81.- Protección de sus elementos representativos

1. La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema de los cinco anillos entrelazados, las denominaciones «Juegos Olímpicos», «Olimpiadas» y «Comité Olímpico», y de cualquier otro signo o identificación que por similitud se preste a confusión con los mismos, queda reservada en exclusiva al Comité Olímpico Español. Ninguna persona jurídica, pública o privada, podrá utilizar dichos emblemas y denominaciones sin autorización expresa del Comité Olímpico Español.

2. La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema o símbolos paralímpicos, las denominaciones "Juegos Paralímpicos", "Paralimpiadas" y "Comité Paralímpico", y de cualquier otro signo de identificación que por similitud se preste a confusión con los mismos, queda reservada en



exclusiva al Comité Paralímpico Español. Ninguna persona jurídica, pública o privada, podrá utilizar dichos emblemas y denominaciones sin autorización expresa del Comité Paralímpico Español.

TÍTULO V

De la actividad deportiva

CAPÍTULO I

De las competiciones

Artículo 82.- *Clasificación de las competiciones*

Las competiciones deportivas, en función de su naturaleza, ámbito territorial o personal se clasifican, a los efectos de lo dispuesto en la presente Ley:

- a) Por su naturaleza: en competiciones oficiales y no oficiales.
- b) Por su ámbito territorial: en competiciones internacionales, de ámbito estatal y supraautonómicas.
- c) Por la naturaleza de sus participantes: en profesionales, profesionalizadas o aficionadas.

Artículo 83.- *Competiciones oficiales*

1. Son competiciones oficiales las que se califiquen como tales por las federaciones deportivas dentro de sus competencias o por el Consejo Superior de Deportes cuando se trate de competiciones profesionales o profesionalizadas, así como las establecidas en los apartados 3 y 4 del artículo 93 y los apartados 2 y 3 del artículo 94 de esta Ley.

2. El carácter oficial se produce, en el caso de las federaciones deportivas españolas, por su incorporación a los calendarios oficiales que deben aprobar los órganos competentes de las federaciones. En todo caso, deberá ser considerada como competición oficial cuando haya sido autorizada o reconocida como tal por el órgano competente de la federación, la inscripción o participación sea federada y el resultado de la misma tenga relevancia en el marco clasificatorio o competitivo establecido por la federación en su reglamentación deportiva.

3. El acto de calificación de estas competiciones implicará su reserva de nombre, que no podrá ser utilizado para la celebración de cualesquiera otras actividades salvo autorización expresa de la entidad a la que le corresponda la organización de aquellas.

Artículo 84.- *Competiciones no oficiales*

1. Son competiciones no oficiales las realizadas por una federación deportiva española que no están incluidas en su calendario de competiciones oficiales y no producen efectos clasificatorios ni de incorporación al sistema común de organización competitiva oficial del deporte.

2. Las competiciones no oficiales implican la organización de un evento o un conjunto de eventos deportivos puntuales o esporádicos del que responde un organizador en las condiciones establecidas



en el artículo 92 de esta Ley. Estas competiciones pueden ser organizadas por la propia federación o por un tercero designado por aquella.

Artículo 85.- *Competiciones internacionales*

1. Son competiciones internacionales las que se celebran en España, organizadas por una federación deportiva española o por un tercero y en las que se desarrollan pruebas de carácter oficial o no oficial en las que está abierta la participación a equipos, selecciones o deportistas procedentes de otras federaciones nacionales.

2. La realización de dichas actividades precisa de autorización del Consejo Superior de Deportes, que apreciará la compatibilidad con la política exterior española y con los compromisos internacionales que el Estado pueda haber asumido.

Artículo 86.- *Competiciones de ámbito estatal y supraautonómicas*

1. Son competiciones de ámbito estatal las que se realizan por una federación deportiva española y que sirven para la atribución de la condición de campeones de España de la correspondiente modalidad o especialidad deportivas o permiten de forma simultánea o sucesiva la participación de deportistas de todo el territorio nacional.

La eventual participación de equipos, selecciones o deportistas procedentes de otros Estados en las competiciones que atribuyan la condición de campeones de España no modificará el carácter de las anteriores competiciones.

2. Son competiciones supraautonómicas las que permiten de forma simultánea o sucesiva la participación de deportistas de diversas Comunidades Autónomas sin cumplir con los requisitos establecidos en el apartado anterior.

Si la propuesta de celebración de estas competiciones proviene de las federaciones autonómicas, deberán ponerlo en conocimiento de la federación deportiva española correspondiente.

3. Estas competiciones pueden ser, a su vez, oficiales o no oficiales en función de los criterios previstos en los artículos anteriores.

Artículo 87.- *Competiciones profesionales*

1. Son aquellas consideradas como tales en función de los requisitos que se determinen reglamentariamente y entre los que se tendrá en cuenta para su reconocimiento el volumen y la importancia económica de la competición, la capacidad de explotación comercial de la misma, la existencia de vínculos laborales generalizados, la celebración de convenios colectivos y la tradición e implantación de la correspondiente competición.

2. Específicamente, las personas deportistas que participen de forma regular en estas competiciones deberán ser profesionales de acuerdo a lo establecido en esta Ley, salvo que carezcan de la edad mínima exigida para establecer relaciones laborales.



3. Las competiciones profesionales son organizadas, en todo caso, por una liga profesional constituida al efecto.

Las ligas profesionales únicamente podrán ser organizadoras de una competición profesional.

4. Únicamente podrá existir, por cada sexo, una competición profesional por modalidad o especialidad deportiva.

Artículo 88.- *Competiciones profesionalizadas*

1. Son aquellas que, sin reunir los requisitos establecidos en el artículo anterior, tienen una organización sólida, vínculos laborales de sus deportistas y/o entrenadores y son susceptibles de una explotación económica razonable que permita diferenciarlas, en su gestión, del resto de competiciones organizadas por una federación deportiva española.

2. Específicamente, las personas deportistas que participen de forma regular en estas competiciones deberán ser profesionales de acuerdo a lo establecido en esta Ley salvo que carezcan de la edad mínima exigida para establecer relaciones laborales.

3. Estas competiciones podrán ser organizadas, mediante estructuras específicas, por las respectivas federaciones deportivas españolas o mediante un organizador al que se encomiende la misma en los términos previstos, en ambos casos, en el Título VI de la presente Ley.

4. Únicamente podrá existir, por cada sexo, una competición profesionalizada por modalidad o especialidad deportiva para la que no exista competición profesional.

Artículo 89.- *Competiciones aficionadas*

1. Son aquellas que realizan las entidades deportivas que puedan organizarlas conforme a esta Ley y que se caracterizan por estar incluidas en el calendario de la respectiva federación deportiva española y forman parte de su actividad convencional.

2. Quienes participen en estas competiciones serán deportistas no profesionales. No obstante, la participación eventual de deportistas profesionales en estas competiciones no transforma la naturaleza jurídica de las mismas.

Artículo 90.- *Derechos de explotación y comercialización*

1. Únicamente los titulares de las competiciones o los organizadores de las mismas, en los términos previstos en los artículos anteriores, podrán explotar y comercializar sus derechos económicos en todos sus extremos, correspondiendo su propiedad a los clubes y entidades deportivas.

Cuando las competiciones sean clasificadas como profesionales o profesionalizadas su gestión y explotación se hará de conformidad con lo dispuesto en el Título VI de esta Ley.

2. En ningún caso las ligas profesionales podrán adquirir, explotar o comercializar, por sí o por cualquier persona o entidad participada o dependiente de las mismas o sobre la que ejerzan una



influencia decisiva y que contribuya a la realización de sus actividades, los derechos económicos de cualquier competición de la que no tengan la condición de organizador.

CAPÍTULO II

Responsabilidad de los organizadores de competiciones oficiales y no oficiales

Artículo 91.- Responsabilidad de los organizadores de las competiciones oficiales

Será responsabilidad de los organizadores de competiciones oficiales asegurar:

- a) El control de la participación en las mismas con título habilitante conforme a lo dispuesto en esta Ley.
- b) El control y la asistencia sanitaria en los términos que se establecen en el Capítulo II del Título II de esta Ley.
- c) La existencia de medios e instrumentos suficientes para el desarrollo de la política de control de dopaje en los términos de la legislación específica de dicha materia.
- d) La utilización de instalaciones deportivas que cuenten con las preceptivas licencias de apertura y funcionamiento que habiliten la práctica deportiva.
- e) La prevención de cualquier clase de discriminación, de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia, así como la discriminación por razón de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual en los términos que establece su normativa específica.
- f) El desarrollo de la competición en las condiciones de seguridad y salud suficientes para que no constituya un peligro para las personas participantes y para el público asistente.
- g) La prevención de los riesgos que se deriven de la competición tanto a personas deportistas como espectadoras y terceras personas mediante la suscripción de los correspondientes seguros de accidentes, asistencia sanitaria y responsabilidad civil.
- h) Los medios necesarios para la recuperación de los premios y redistribución entre las demás personas participantes en supuestos de infracción de la normativa de lucha contra el dopaje.

Artículo 92.- Responsabilidad de los organizadores en las competiciones no oficiales

1. La realización de competiciones no oficiales en el marco de las entidades deportivas previstas en esta Ley exige a su organizador la adopción, con carácter previo, de las medidas necesarias para asegurar la comprobación de la participación y el control, así como la asistencia sanitaria durante la misma y la cobertura de los riesgos previstos en el artículo anterior.

Específicamente, el organizador velará por el cumplimiento de las reglas esenciales de la organización de la competición en cuestión y de lo dispuesto en las letras d), e), f), g) y h) del artículo anterior.



2. Las entidades organizadoras podrán establecer títulos habilitantes de carácter temporal o puntual o formas adicionales de participación diferentes a la licencia deportiva.

CAPÍTULO III

Del deporte universitario

Artículo 93.- Delimitación

1. Corresponde a las Universidades el desarrollo de una política de fomento y participación de las personas estudiantes universitarias en la actividad deportiva propia de cada centro.

2. Corresponde a las Comunidades Autónomas la fijación del marco de dicha actividad y su conexión, coordinación y compatibilidad con el régimen de enseñanzas que las Universidades imparten dentro de su ámbito.

3. Corresponde a la Administración General del Estado la organización de la fase final de las competiciones que puedan desarrollar las Universidades cuando su ámbito trascienda del de una Comunidad Autónoma y tenga relevancia para la participación de los equipos deportivos en representación del deporte español en competiciones internacionales de esta condición.

4. Esta fase final podrá ser realizada de forma directa por el Consejo Superior de Deportes, por las federaciones deportivas, por las propias Universidades o por cualquier entidad deportiva reconocida en esta Ley. El organizador asumirá las competiciones de ámbito estatal y, por acuerdo con las respectivas Universidades, las competiciones que tengan un ámbito inferior y precisen de una organización coordinada o puedan ser proyectadas y comercializadas mejor en una organización conjunta.

5. Queda prohibida la participación de personas deportistas sancionadas en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, que estén inhabilitadas para la participación en competiciones deportivas.

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior tendrá la consideración de quebrantamiento de sanciones o medidas cautelares de acuerdo a lo dispuesto en la citada Ley.

CAPÍTULO IV

Del deporte en edad escolar

Artículo 94.- Delimitación

1. Corresponde a las Comunidades Autónomas el desarrollo de una política de fomento y participación de las personas estudiantes en edad escolar en la actividad deportiva, así como la fijación del marco de dicha actividad y su conexión, coordinación y compatibilidad con el régimen de enseñanzas que los Centros Educativos imparten.



2. Corresponde a la Administración General del Estado organizar la fase final de las competiciones que puedan desarrollar las Comunidades Autónomas cuando su ámbito trascienda del de una Comunidad Autónoma y tenga relevancia para la participación de los equipos deportivos en representación del deporte español en competiciones internacionales de esta condición.

3. Esta fase final podrá ser realizada de forma directa por el Consejo Superior de Deportes, por las federaciones deportivas o por cualquier entidad deportiva reconocida en esta Ley. El organizador asumirá las competiciones de ámbito estatal y, por acuerdo con las respectivas Comunidades Autónomas, las competiciones que tengan un ámbito inferior y precisen de una organización coordinada o puedan ser proyectadas y comercializadas mejor en una organización conjunta.

CAPÍTULO V

De la actividad deportiva no oficial

Artículo 95.- Competencia de las federaciones deportivas españolas en la actividad deportiva no oficial

1. Las federaciones deportivas españolas podrán reconocer actividades, eventos, pruebas y demás acontecimientos deportivos en los que la participación esté abierta a deportistas o clubes de varias Comunidades Autónomas y, en todo caso, cuando se trate de participantes internacionales.

2. En este reconocimiento se valorará, igualmente, la repercusión social, mediática y de asistentes a la competición como elemento de dinamización de la economía asociada al deporte y de prevención y seguridad de la actividad deportiva a desarrollar.

Artículo 96.- Actividad deportiva no oficial de relevancia estatal

1. Es actividad deportiva no oficial de relevancia estatal aquella que realiza una Administración Pública o un tercero de acuerdo a los requisitos establecidos reglamentariamente, entre los que se tendrá en cuenta la afluencia y procedencia de participantes y público asistente y la capacidad económica de la actividad.

2. Los organizadores de estas competiciones deberán asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 92 de esta Ley.

3. Queda prohibida la participación de personas deportistas sancionadas en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, que estén inhabilitadas para la participación en competiciones deportivas.

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior tendrá la consideración de quebrantamiento de sanciones o medidas cautelares de acuerdo a lo dispuesto en la citada Ley.

CAPÍTULO VI

Deporte militar

Artículo 97.- Organización y competencias del deporte militar



1. Corresponde al Consejo Superior del Deporte Militar, órgano colegiado interministerial de la Administración General del Estado instaurado por Real Decreto 61/2018, de 9 de febrero, por el que se crea y regula el Consejo Superior del Deporte Militar, el ejercicio de las funciones y competencias previstas en dicha norma dentro de su ámbito de actuación.

2. Específicamente, el Consejo Superior del Deporte Militar deberá aprobar el programa anual de competiciones deportivas militares de carácter nacional, internacional o interejércitos, así como autorizar la celebración en territorio español de competiciones deportivas militares de carácter internacional y la participación de equipos nacionales deportivos militares en competiciones internacionales.

3. Los organismos públicos competentes de la Administración General del Estado y el Consejo Superior del Deporte Militar podrán establecer acuerdos de colaboración en materia de lucha contra el dopaje, formación de técnicos y entrenadores, utilización de instalaciones deportivas y, en general, de fomento de desarrollo del deporte, todo ello en el ámbito de actuación del deporte militar.

4. Como apoyo al deporte de alto nivel, en el seno del Ministerio de Defensa se procurará el acceso a los beneficios contemplados en el artículo 24.2 de esta Ley respecto al personal militar en el que concurra méritos deportivos suficientes.

CAPÍTULO VII

De la realización de actividad deportiva vinculada a otras habilitaciones públicas

Artículo 98.- *Actividad concertada entre las federaciones deportivas y las Comunidades Autónomas*

1. Cuando en la realización de una competición deportiva sean precisas habilitaciones, permisos o autorizaciones adicionales en materia de medio ambiente, dominio público u otros similares, la Conferencia Sectorial de Deporte podrá establecer un sistema previo de participación en la elaboración de los calendarios deportivos en los que se incluyan dichas pruebas.

2. Dicho sistema de participación implicará la autorización de la competición y la delegación, en las condiciones que se determinen, de la responsabilidad y la habilitación de las personas deportistas que participen en las mismas sin que sea precisa una autorización individual.

3. La federación deportiva española será responsable de asegurar la participación en las condiciones que haya determinado la Comunidad Autónoma y, en su caso, de la reposición a su estado primitivo de los elementos, bienes o espacios que, con ocasión de las competiciones, hayan podido alterarse.

TÍTULO VI

De la organización de las competiciones profesionales y profesionalizadas

CAPÍTULO I

Delimitación de la forma jurídica para la participación en la competición deportiva profesional o profesionalizada



Artículo 99.- *Delimitación de la forma jurídica para la participación en la competición deportiva profesional o profesionalizada*

La participación en competiciones profesionales o profesionalizadas podrá realizarse a través de las sociedades de capital previstas en el artículo 1.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio; asociaciones constituidas conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación; o clubes deportivos de acuerdo a lo previsto en el artículo 68 de la presente Ley, siempre que estén regularmente constituidos e inscritos en el registro deportivo correspondiente.

CAPÍTULO II

De la organización de las competiciones profesionales

Artículo 100.- *Competencias*

Son competencias de las ligas profesionales, relativas a la organización de las competiciones, las siguientes:

- a) Organizar las competiciones que se incluyan en el Acuerdo del Consejo Superior de Deportes de declaración de competiciones profesionales.
- b) Fijar las condiciones económicas y, en su caso, societarias o asociativas para la participación y el mantenimiento en la respectiva competición profesional en función de las necesidades de la propia organización y de las garantías de solvencia de la competición frente a terceras personas que puedan asumir obligaciones. Estas condiciones deberán respetar los criterios que sobre la materia determine la normativa de defensa de la competencia.

Específicamente, las ligas profesionales aprobarán un plan de control económico, en los términos y criterios que determine el Consejo Superior de Deportes, que prevenga la insolvencia de las entidades deportivas que participan en la competición.

Entre estos requisitos debe incluirse, necesariamente, no tener deudas pendientes y exigibles con la Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, deportistas y entrenadores. Se arbitrará un sistema en el seno de la federación deportiva española para la declaración o carencia de deudas por este concepto.

El incumplimiento de tales exigencias determinará la exclusión de la competición de la entidad infractora.

- c) Desempeñar, respecto de sus integrantes, las funciones de tutela, control y supervisión establecidas en la presente Ley y las que puedan establecer en sus normas estatutarias y de desarrollo.
- d) Ejercer la potestad sancionadora en los términos previstos en la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo.



e) Explotar, individual o colectivamente, los derechos económicos de la competición que organiza, en función de los acuerdos que se alcancen con los propietarios de los derechos, salvo que la legislación vigente disponga otra cosa.

f) Asegurar el cumplimiento de las condiciones de celebración de competiciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la presente Ley.

g) Establecer, en su caso, normas de transparencia y buen gobierno aplicables a las entidades participantes en la competición.

Artículo 101.- *Convenios entre federación deportiva y liga profesional*

1. Para la organización de competiciones profesionales, la federación deportiva y la liga profesional suscribirán un convenio que, como mínimo, contendrá los siguientes acuerdos:

a) El sistema de ascensos y descensos de categoría.

b) La distribución de los ingresos generados por la competición con destino al fomento de la modalidad o especialidad deportiva en categorías no profesionales.

c) La elaboración del calendario deportivo.

d) El régimen del arbitraje deportivo.

e) El sistema de aplicación de la disciplina deportiva y el sistema de recursos frente a las sanciones impuestas en primera instancia.

f) Un sistema de solución de conflictos que pudieran darse tanto en la interpretación como en la ejecución del convenio.

g) Duración y condiciones de prórroga del convenio.

2. Reglamentariamente se establecerá un régimen subsidiario de coordinación entre las federaciones deportivas y las ligas profesionales, con el contenido fijado en este precepto, con la exclusiva finalidad de garantizar el normal desarrollo de la competición en los casos en que no se logre la celebración de un convenio inicial de coordinación.

3. En el supuesto de que no se celebre un nuevo convenio a la fecha de expiración del vigente, se prorrogará transitoriamente de manera automática con un plazo máximo de duración de un año. Si, transcurrido el plazo máximo, no se ha celebrado un nuevo convenio, se arbitrará un sistema en el seno del Consejo Superior de Deportes para la atribución de las competencias señaladas en este artículo, de acuerdo a lo que se establezca reglamentariamente.

CAPÍTULO III

De la organización de las competiciones profesionalizadas

Artículo 102.- *Gestión de una competición profesionalizada por la propia federación deportiva española*



Cuando una competición profesionalizada sea gestionada por la federación deportiva correspondiente se atribuirán a esta las funciones que se señalan en los artículos 100 y 101 de esta Ley.

Artículo 103.- *Competencias de otros organizadores en caso de atribución de la gestión*

1. Las federaciones deportivas españolas podrán establecer fórmulas para atribuir la gestión de las competiciones a las que se refiere este Capítulo.

Dicha fórmula consistirá, esencialmente, en la gestión por parte de una asociación de clubes que desarrollará sus funciones de acuerdo a la atribución realizada por la federación española correspondiente.

2. Si esta recae en una entidad no asociativa y con ánimo de lucro, la adjudicación se hará por contrato posterior a una oferta pública y en régimen de libre competencia y, en el mismo, deberán establecerse, además de las obligaciones de las partes, las garantías del cumplimiento del contrato y su afección a la continuidad de la competición.

3. En todo caso, cuando la condición de organizador recaiga sobre una entidad diferente a la propia federación deportiva española, el documento de atribución de la gestión determinará su duración mínima, régimen de explotación económica y demás elementos que aseguren su normal desarrollo.

4. El organizador previsto en este artículo únicamente podrá asumir la competencia establecida en la letra e) del artículo 100 de la presente Ley, desarrollando la explotación individual o colectiva en función de los acuerdos del propio organizador con los propietarios de los derechos.

TÍTULO VII

Del régimen sancionador

CAPÍTULO I

Ámbito de aplicación

Artículo 104.- *Delimitación del ámbito sustantivo de aplicación*

1. Se entiende por régimen sancionador en materia de deporte aquel que se ejerce por la Administración General del Estado sobre las personas físicas o jurídicas incluidas dentro del ámbito de aplicación de esta Ley por las infracciones previstas en los artículos siguientes.

2. Se entiende por régimen disciplinario el establecido, en su caso, por las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales en sus propios Estatutos y reglamentos y referida a la infracción de las reglas de juego, su aplicación y la organización de las competiciones.

Son infracciones de las reglas del juego o competición, a los efectos de esta Ley y para la delimitación del régimen disciplinario, las acciones u omisiones que, durante el curso del juego o competición, vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo.



A estas reglas les serán de aplicación los principios de tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, posibilidad de reclamación interna, audiencia y demás elementos que conforman los principios generales del Derecho sancionador.

Las actas reglamentarias firmadas por jueces o árbitros son un medio de prueba necesario de las infracciones a las reglas deportivas y gozan de presunción de veracidad, con excepción de aquellos deportes que específicamente no las requieran, y sin perjuicio de los demás medios de prueba que puedan aportar las personas interesadas.

Las federaciones deportivas y las ligas profesionales deberán aprobar un reglamento disciplinario que contenga el conjunto de infracciones, clasificadas por su gravedad y sus consecuencias jurídicas en el ámbito deportivo y el sistema de reclamación o de recurso contra las mismas.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, las infracciones de las reglas del juego o competición cuya sanción suponga la privación, revocación o suspensión definitiva de todos los derechos inherentes a la licencia tendrán la naturaleza de actos de carácter administrativo.

Únicamente podrán dar lugar a las sanciones previstas en el párrafo anterior las infracciones referentes a las reglas del juego o la competición que tengan el carácter de muy graves en función de las normas estatutarias y reglamentarias de carácter federativo.

4. La potestad disciplinaria deportiva no se extiende a las sanciones impuestas por los clubes deportivos, las ligas profesionales, federaciones deportivas o demás entidades deportivas a sus socios, miembros o afiliados por incumplimiento de sus normas sociales o de régimen interior.

5. En lo no previsto en este Título resultarán de aplicación las determinaciones contenidas en el Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, en el ámbito procedimental, las previstas en la Ley 39/2015, 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 105.- *Titulares de la potestad sancionadora*

La potestad sancionadora se ejerce, según los respectivos supuestos que se contemplan en los artículos siguientes, por los órganos competentes de las federaciones deportivas españolas, las ligas profesionales y, en vía de recurso por el Tribunal Administrativo del Deporte, o por este directamente en los casos en que esté así previsto.

CAPÍTULO II

Régimen de responsabilidad

Artículo 106.- *Responsables*

1. La responsabilidad de las personas físicas o jurídicas por la comisión de las infracciones previstas en esta Ley podrá establecerse por dolo o culpa.



2. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles con la exigencia a la persona o entidad infractora de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 107.- *Indicios de delito*

1. Cuando, durante la tramitación del procedimiento sancionador, los órganos competentes tengan conocimiento de conductas que puedan ser constitutivas de ilícito penal, pasarán inmediatamente el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrán de seguir dicho procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento, o mientras el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o perseguir actuaciones, interrumpiéndose por este hecho el plazo de caducidad del procedimiento administrativo. De igual manera, se abstendrán cuando tuvieren conocimiento de que se está siguiendo un procedimiento penal con idéntico hecho, sujeto y fundamento.

2. De no haberse estimado la existencia de delito, o en el supuesto de haberse dictado resolución de otro tipo que ponga fin al procedimiento penal, los órganos administrativos correspondientes continuarán el expediente sancionador con base en los hechos que los tribunales hayan considerado probados.

3. La pena establecida por la autoridad judicial excluye la imposición de la sanción administrativa, siempre que exista identidad en el hecho, sujeto y fundamento.

CAPÍTULO III

Del procedimiento sancionador

Artículo 108.- *Marco general*

1. El ejercicio de la potestad sancionadora deportiva requerirá la previa tramitación de un procedimiento administrativo ajustado a los principios generales establecidos en la legislación de procedimiento administrativo común. Dicho procedimiento se desarrollará reglamentariamente debiendo diferenciarse, en todo caso, la fase instructora de la sancionadora, que se encomendarán a órganos diferentes.

2. El procedimiento deberá resolverse y la resolución notificarse en el plazo máximo de tres meses desde que se hubiese iniciado en los términos, igualmente, de la normativa de procedimiento administrativo común.

3. No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión la persona o entidad infractora persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora y que la misma sea ejecutiva conforme a las reglas generales.



Artículo 109.- *Iniciación del procedimiento sancionador*

1. El procedimiento administrativo sancionador se iniciará, en todo caso, de oficio por acuerdo del órgano competente.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se puede producir bien por propia iniciativa, como consecuencia de comunicación del Consejo Superior de Deportes, a petición razonada de otros órganos administrativos o por denuncia.

2. Se entiende por propia iniciativa la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.

3. La comunicación del Consejo Superior de Deportes deberá ser formulada por la persona que ostente su Presidencia cuando tenga conocimiento de hechos que, conforme a esta Ley, puedan ser constitutivos de infracción.

4. Se entiende por petición razonada la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación.

5. Se entiende por denuncia el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.

Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de las presuntas personas o entidades responsables.

Las Comisiones de Control Económico de las federaciones deportivas españolas podrán tramitar por esta vía las denuncias que reciban si, como consecuencia de su investigación, consideran que existen indicios de infracciones administrativas.

Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a las personas o entidades denunciadas la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.

La presentación de una denuncia no confiere a la persona o entidad denunciante, por sí sola, la condición de interesada en el procedimiento.

Artículo 110.- *Medidas cautelares*

En cualquier momento del procedimiento, el órgano competente para iniciarlo podrá adoptar, mediante acto motivado y notificado a las personas o entidades interesadas, las medidas cautelares que aseguren la eficacia de la resolución final que pueda recaer en dicho procedimiento.



Las medidas a las que hace referencia el párrafo anterior, que no tienen naturaleza de sanción, podrán consistir, entre otras, en:

- a) Prestación de fianza o garantía.
- b) Suspensión temporal de servicios, actividades o autorizaciones.
- c) Cierre temporal de instalaciones deportivas.
- d) Suspensión temporal para ocupar cargos en entidades deportivas

Artículo 111.- *Ejecutividad*

La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas cautelares que en su caso se hubieran adoptado.

Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si la persona o entidad interesada manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando:

- a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que la persona o entidad interesada haya interpuesto recurso contencioso administrativo.
- b) Habiendo la persona o entidad interesada interpuesto recurso contencioso-administrativo:
 - 1. No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada.
 - 2. El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella.

CAPÍTULO IV

De las infracciones y sanciones

SECCIÓN 1ª

De las infracciones

Artículo 112.- *Infracciones muy graves*

1. Se consideran infracciones comunes de carácter muy grave que pueden ser cometidas por cuantas personas o entidades están en el ámbito de aplicación de esta Ley:

- a) Los quebrantamientos de sanciones impuestas por infracciones muy graves o graves.



b) Las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples acuerdos, el resultado de una prueba o competición, afecte o no al resultado, y, en general, las actuaciones que supongan un intento de alterar el normal desarrollo de una prueba o competición.

c) La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales.

d) La manipulación o alteración del material de equipamiento deportivo, en contra de las reglas técnicas, cuando puedan afectar al resultado de las pruebas o pongan en peligro la integridad de las personas.

e) La realización de apuestas o la participación en juegos a quienes, en el ámbito deportivo, tienen prohibida esta posibilidad, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incurrir las personas o entidades infractoras en materia de ordenación del juego.

f) La tercera infracción grave cometida en un período de dos años, siempre que las dos anteriores sean firmes.

2. Asimismo, se consideran específicamente infracciones muy graves de las personas que ostenten la Presidencia y demás miembros directivos o de control de los órganos de las federaciones deportivas españolas y ligas profesionales, las siguientes:

a) El incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General y de las normas estatutarias o reglamentarias.

b) La no convocatoria, en los plazos o condiciones legales, de manera continuada, de los órganos colegiados de forma que se impida el normal funcionamiento de los mismos.

c) La extralimitación en el ejercicio de las potestades y competencias que las normas atribuyen a los órganos de dirección y representación de las federaciones deportivas españolas y de las ligas profesionales.

d) La inejecución de las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte.

e) La incorrecta utilización de las subvenciones, créditos, avales, y demás ayudas de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos o de otro modo concedidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

f) La organización de actividades o competiciones deportivas oficiales de carácter internacional sin la correspondiente autorización.

g) La no suscripción de los seguros obligatorios previstos en esta Ley.

h) La obstrucción o resistencia reiterada a la función de supervisión que corresponde al Consejo Superior de Deportes.

i) La no expedición injustificada de licencias federativas, así como su expedición fraudulenta.



j) El desarrollo de actividades privadas, mercantiles, comerciales o de cualquier otra índole contraviniendo el régimen previsto para cada órgano en los Estatutos de la respectiva federación deportiva española o liga profesional o sus códigos de buen gobierno.

k) El nombramiento de personas para los distintos órganos de la entidad sin respetar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los términos establecidos en esta Ley.

l) La no puesta en conocimiento del Consejo Superior de Deportes por las personas que tienen el deber de hacerlo de las cuestiones referidas en el artículo 63.3 de esta Ley.

m) La adquisición, explotación o comercialización, por parte de las ligas profesionales, de los derechos económicos de competiciones sobre las que no tenga la condición de organizador.

En el supuesto previsto en la letra m), la responsabilidad se extenderá a las personas que ostenten la Presidencia y demás miembros directivos tanto de las ligas profesionales como de las federaciones deportivas titulares u organizadoras de las respectivas competiciones, siempre que hayan participado en la comisión de la infracción.

3. Además de las enunciadas en los apartados anteriores y de las que se establezcan por las respectivas federaciones deportivas o ligas profesionales, son infracciones específicas muy graves de las entidades deportivas participantes en competiciones profesionales o profesionalizadas y, en su caso, de las personas que ostenten funciones de administración o dirección en las mismas:

a) El incumplimiento de los acuerdos de tipo económico de la competición correspondiente.

b) El incumplimiento de los deberes o compromisos adquiridos con el Estado o con las personas deportistas.

c) El incumplimiento de los regímenes de responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva.

d) La obstrucción o resistencia continuada a la función de supervisión.

e) La no puesta a disposición de las selecciones nacionales de las personas deportistas que hayan sido designadas para formar parte de las mismas.

f) La adquisición de cuotas de participación de una entidad deportiva de manera que se pase a tener más del veinticinco por ciento de los derechos de voto de la misma sin obtener la autorización expresa o presunta del Consejo Superior de Deportes o la adquisición de las mismas en contra de la prohibición establecida en esta Ley.

g) El incumplimiento del deber de presentar el informe de auditoría de las cuentas anuales, o el informe de gestión, en los plazos y en los términos establecidos en esta Ley, o el resto de información que precise el Consejo Superior de Deportes y el organizador de la competición para el ejercicio de su función.

h) La negativa, obstrucción o resistencia al examen por parte del Consejo Superior de Deportes del libro registro de acciones nominativas.



i) La negativa, obstrucción o resistencia al sometimiento a las auditorías que fueran acordadas por el Consejo Superior de Deportes.

La responsabilidad por las infracciones a las que se refiere la letra f) de este apartado recaerá sobre quienes adquieran dichas cuotas y quienes actúen concertadamente con ellos; en las infracciones señaladas en las letras g), h) e i) de este apartado la responsabilidad recaerá en la entidad deportiva y en los miembros del órgano de administración a quienes se imputa el incumplimiento, la negativa, obstrucción o resistencia.

Artículo 113.- *Infracciones graves*

1. Serán infracciones graves de carácter común:

a) El incumplimiento reiterado de órdenes e instrucciones emanadas de los órganos deportivos competentes.

b) El uso indebido de la imagen corporativa del Consejo Superior de Deportes o los símbolos del Estado en materia de deporte.

c) El uso sin autorización de los emblemas y símbolos a los que se refieren los artículos 44.2 y 81 de esta Ley.

d) El uso sin autorización del nombre de las competiciones calificadas como oficiales de acuerdo a lo establecido en el artículo 83.3 de la presente Ley.

e) La no celebración de actividades deportivas autorizadas por el órgano competente o sujetas a subvenciones.

f) El quebrantamiento de las sanciones impuestas por infracciones leves.

g) La tercera infracción leve cometida en un período de dos años, siempre que las dos anteriores sean firmes.

h) La participación sin la previa inscripción de la entidad en el Registro de Entidades Deportivas en aquellas competiciones en las que sea preciso este requisito.

i) La organización de competiciones oficiales y no oficiales así como de actividad deportiva no oficial incumpliendo gravemente las obligaciones establecidas en los artículos 91 y 92 de esta Ley.

j) No comunicar a las autoridades competentes hechos que se refieran a la alteración del normal desarrollo de las competiciones cuando se haya tenido conocimiento de aquellos y no estén dentro de los supuestos previstos en las letras b) y d) del apartado 1 del artículo anterior.

k) Cualquier menoscabo en el ejercicio de los derechos de las personas deportistas reconocidos en esta Ley siempre que no tengan una tipificación más grave.

2. Se consideran infracciones graves de las entidades deportivas que participan en la competición profesional o profesionalizada:



a) El incumplimiento del deber de comunicación de la adquisición y enajenación de participaciones significativas.

b) El retraso injustificado en el cumplimiento del deber de actualizar el libro registro de acciones nominativas en los términos señalados.

La responsabilidad por las infracciones a las que se refiere la letra a) de este apartado recaerá sobre la persona o personas obligadas a comunicar la adquisición o enajenación; en las infracciones señaladas en la letra b) de este apartado, sobre la entidad deportiva y los miembros del órgano de administración a quienes se impute el retraso.

Artículo 114.- *Infracciones leves*

Son infracciones leves:

a) El incumplimiento de órdenes e instrucciones emanadas de los órganos deportivos competentes.

b) La organización de competiciones oficiales y no oficiales así como de actividad deportiva no oficial desatendiendo las obligaciones establecidas en los artículos 91 y 92 de esta Ley cuando los incumplimientos no revistan especial gravedad.

c) El incumplimiento de cualquier otra obligación establecida en esta Ley y su normativa de desarrollo si la infracción no está calificada como muy grave o grave.

SECCIÓN 2ª

De las sanciones

Artículo 115.- *Elementos comunes*

1. Solo cabrá imponer sanciones de carácter económico en los casos en que las personas deportistas, técnicos, jueces o árbitros perciban retribución por su labor. Esta disposición también será de aplicación para aquellas que se fijen en los Estatutos y reglamentos de las entidades deportivas respecto a las infracciones disciplinarias.

2. Cuando unos mismos hechos impliquen una infracción tipificada en esta Ley y en el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, se aplicará esta última tanto en la configuración, calificación y graduación de la infracción como en la cuantía de la sanción y la competencia para imponerla.

Artículo 116.- *Sanciones por la comisión de infracciones de carácter muy grave*

1. A la comisión de las infracciones comunes de carácter muy grave tipificadas en el artículo 112.1 de la presente Ley, corresponderán las siguientes sanciones:

a) Multa, no inferior a 3.000,01 euros ni superior a 30.000 euros.



- b) Pérdida de puntos o puestos en la clasificación.
- c) Pérdida o descenso de categoría o división.
- d) Celebración de la prueba o competición deportiva a puerta cerrada.
- e) Prohibición de acceso a los estadios o lugares de desarrollo de las pruebas o competiciones, por tiempo no superior a cinco años.
- f) Pérdida definitiva de los derechos que como miembro de la respectiva asociación deportiva le correspondan.
- g) Clausura del recinto deportivo por un período que abarque de cuatro partidos o encuentros a una temporada.
- h) Inhabilitación para ocupar cargos en la entidad deportiva, o suspensión o privación de licencia federativa o habilitación equivalente de carácter temporal por un plazo de dos a quince años, en adecuada proporción a la infracción cometida.

2. A la comisión de las infracciones muy graves tipificadas en el artículo 112.2 de la presente Ley corresponderán las siguientes sanciones:

- a) Amonestación pública.
- b) Inhabilitación temporal de dos meses a un año.
- c) Destitución del cargo.
- d) Multa, no inferior a 3.000,01 euros ni superior a 30.000 euros.

3. A la comisión de las infracciones específicas muy graves previstas en el artículo 112.3 de la presente Ley, corresponderán además de las sanciones previstas en el apartado anterior, las siguientes:

- a) Apercibimiento.
- b) Sanción de carácter económico, que no podrá ser inferior a 3.000,01 euros ni superior a 450.000 euros.
- c) Descenso de categoría.
- d) Expulsión, temporal o definitiva, de la competición profesional o profesionalizada.
- e) Pérdida de puntos o puestos en la clasificación.

Artículo 117.- *Sanciones por la comisión de infracciones de carácter grave*



Por la comisión de las infracciones graves tipificadas en el artículo 113 de la presente Ley, podrán imponerse las siguientes sanciones:

- a) Amonestación pública.
- b) Multa, no inferior a 600,01 ni superior a 3.000 euros.
- c) Pérdida de puntos o puestos en la clasificación.
- d) Clausura del recinto deportivo de hasta tres partidos o encuentros, o dos meses.
- e) Privación de los derechos de miembro de la entidad deportiva, de un mes a dos años.
- f) Inhabilitación para ocupar cargos, suspensión o privación de licencia federativa, de un mes a dos años o de cuatro o más encuentros en una misma temporada.

Artículo 118.- *Sanciones por la comisión de infracciones de carácter leve*

Por la comisión de las infracciones leves a que se refiere el artículo 114 de la presente Ley se impondrán las siguientes sanciones:

- a) Apercibimiento.
- b) Multa, de hasta 600 euros.
- c) Inhabilitación para ocupar cargos o suspensión de hasta un mes, o de uno a tres encuentros o pruebas.

SECCIÓN 3ª

Extinción de la responsabilidad

Artículo 119.- *Causas de extinción de la responsabilidad*

La responsabilidad se extingue por:

- a) Muerte de la persona infractora.
- b) Extinción de la entidad deportiva sancionada.
- c) Cumplimiento de la sanción.
- d) Prescripción de la infracción.
- e) Prescripción de la sanción.



En el supuesto previsto en la letra b) del presente artículo la responsabilidad se trasladará a los miembros de los órganos de gobierno de la entidad deportiva que ostentaban dichos cargos en el momento de comisión de la infracción.

Artículo 120.- *Prescripción de infracciones y sanciones*

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona o entidad interesada, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona o entidad presuntamente responsable.

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona o entidad interesada, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona o entidad infractora.

SECCIÓN 4ª

Criterios para la determinación de la responsabilidad

Artículo 121.- *Determinación de la responsabilidad*

1. En la determinación de la responsabilidad y en su cuantificación se tendrá en cuenta la idoneidad de la sanción a imponer y su proporcionalidad a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios:

a) El grado de culpabilidad o la existencia de dolo.

b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.

c) La naturaleza de los perjuicios causados.

d) La reiteración, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.

2. Cuando haya existido una denuncia que dé origen a la iniciación del procedimiento y la persona o entidad denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza, existiendo



otras personas o entidades infractoras, el órgano competente para resolver el procedimiento eximirá a la persona o entidad denunciante, total o parcialmente, del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea quien comience a aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.

Asimismo, el órgano competente para resolver podrá, atendiendo a las circunstancias, reducir el importe del pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario, cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, la persona o entidad denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga.

SECCIÓN 5ª

De los órganos competentes

Artículo 122.- *Órganos competentes*

1. Las infracciones previstas en los apartados 1 y 3 del artículo 112, el artículo 113, el artículo 114, todos de esta Ley, así como las infracciones muy graves en materia disciplinaria que supongan privación, revocación o suspensión definitiva de los derechos inherentes a la licencia de la presente Ley se investigarán y, en su caso, sancionarán, en primera instancia, por los órganos disciplinarios que estén previstos en los Estatutos y reglamentos de las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales con la condición de actos dictados en el ejercicio delegado de la potestad pública sancionadora.

Los órganos disciplinarios que actúen en primera instancia podrán ser unipersonales o colegiados. Potestativamente, los Estatutos y reglamentos de las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales podrán establecer un Comité de Apelación con competencias para la revisión de las sanciones impuestas por los órganos disciplinarios que actúen en primera instancia. Los Comités de Apelación serán órganos colegiados.

El nombramiento de los miembros de los órganos disciplinarios se ajustará al criterio de composición equilibrada establecido en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

2. Las infracciones previstas en el artículo 112.2 de la presente Ley se investigarán y, en su caso sancionarán, directamente por el Tribunal Administrativo del Deporte, cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa.

3. Las resoluciones dictadas por los órganos disciplinarios federativos o de las ligas profesionales en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo serán susceptibles de recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte en los plazos que se determinen reglamentariamente.

Artículo 123.- *Requisitos para formar parte de los comités disciplinarios de las federaciones españolas deportivas y las ligas profesionales*



1. Cuantas personas integren los órganos disciplinarios de las federaciones deportivas españolas y ligas profesionales serán designadas, junto con sus suplentes, por acuerdo de la Asamblea General de la correspondiente federación deportiva española o liga profesional, por un período de cuatro años que podrá renovarse por períodos sucesivos.

2. Cuando este órgano sea unipersonal, la persona designada deberá estar en posesión de la licenciatura, grado o título equivalente en Derecho. Cuando este órgano esté formado por más de un miembro, al menos uno de ellos deberá cumplir dicho requisito académico.

3. En todo caso, el nombramiento de miembros se ajustará al criterio de composición equilibrada establecido en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

TÍTULO VIII

De la solución de conflictos en el deporte

CAPÍTULO I

De la naturaleza de los actos

Artículo 124.- *Actos de carácter administrativo*

1. Tienen naturaleza administrativa aquellas actuaciones en las que intervenga el Consejo Superior de Deportes y cualquiera de sus órganos administrativos en el ejercicio de potestades o competencias públicas en los términos previstos en la presente Ley.

Asimismo, tienen esta condición las resoluciones que adopte el Tribunal Administrativo del Deporte en el ejercicio de las competencias que le reconoce el Título VII de esta Ley, con las excepciones previstas en este Título.

2. Específicamente, tienen la consideración de actos administrativos:

a) La función arbitral que le atribuye al Consejo Superior de Deportes el artículo 9 del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.

b) Los que se refieran al régimen de ayudas y subvenciones públicas.

c) Los convenios entre Administraciones Públicas que puedan suscribirse para la realización de actividades deportivas incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley.

d) El reconocimiento y la extinción de la condición de deportista, entrenador o árbitro de alto nivel.

e) El establecimiento de las condiciones mínimas para la celebración de competiciones profesionales, de acuerdo a lo establecido reglamentariamente, cuando no se encuentre vigente un convenio entre federación deportiva española y liga profesional.



f) El control del contenido mínimo y del ajuste al ordenamiento jurídico de las cláusulas de los acuerdos de integración y separación de las federaciones deportivas autonómicas en las federaciones deportivas españolas.

g) El ejercicio de la potestad sancionadora por parte del Tribunal Administrativo del Deporte.

h) El ejercicio de la función prevista en el artículo 101.3 de esta Ley.

3. Son actos dictados por entidades privadas susceptibles de recurso en los términos previstos en el Capítulo II del Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a) La expedición o denegación de expedición de licencias deportivas.

b) La calificación de competiciones oficiales de ámbito estatal.

c) El ejercicio de la potestad sancionadora en los términos previstos en el Título VII de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior.

Artículo 125.- *Actuaciones de carácter privado*

Tendrán naturaleza privada:

a) Los acuerdos y medidas que pueda adoptar la Asamblea General en relación con la organización de la federación y de las competiciones que le correspondan a la misma.

b) Las cuestiones de interpretación que puedan suscitarse en relación con los convenios de integración y separación de las federaciones autonómicas en las federaciones deportivas españolas.

c) Las cuestiones que puedan suscitarse en relación a la interpretación de los convenios de coordinación vigentes entre las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales correspondientes, siempre que no se trate de las materias previstas en la letra h) del apartado 2 del artículo anterior.

d) Las cuestiones que se planteen en la interpretación de los convenios y acuerdos entre las federaciones y los organizadores por encomienda de gestión de las competiciones profesionalizadas.

e) Todas las cuestiones relativas a licencias deportivas distintas a la establecida en el artículo anterior.

f) Las cuestiones relativas a la organización de la competición, inscripciones, descensos, ascensos y demás vicisitudes derivadas de las mismas, incluidos todos los elementos disciplinarios ligados a la práctica, organización y desarrollo de la competición y las responsabilidades derivadas de las mismas.

g) La aplicación de los sistemas de prevención de la insolvencia a la que se refiere la letra b) del artículo 100 de esta Ley.



h) Los conflictos que puedan surgir en relación con la elección, cese, moción de censura de los órganos federativos y con el funcionamiento de la federación o liga cuando no afecte a funciones públicas.

i) Los conflictos que puedan surgir en relación con la explotación económica de las competiciones deportivas de toda índole.

j) Los convenios y contratos que realicen agentes privados en relación con la ejecución de competiciones en edad escolar o de carácter universitario.

k) Los contratos y convenios que realicen las federaciones deportivas en relación con la actividad deportiva no oficial.

l) Los que puedan surgir en el seno de las entidades deportivas y mercantiles de toda índole que participen en la actividad deportiva regulada en esta Ley y con exclusión de aquellas que expresamente se atribuyen al control económico del Consejo Superior de Deportes.

CAPÍTULO II

De las formas de resolución de conflictos

Artículo 126.- *Conflictos de carácter administrativo*

1. Los conflictos a los que se refiere el artículo 124 de la presente Ley se resolverán mediante los sistemas de recursos administrativos y jurisdiccionales previstos, respectivamente, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

2. La impugnación de las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte se regirá por lo establecido en el artículo 128 de esta Ley.

Artículo 127.- *Conflictos de naturaleza privada*

1. Los conflictos referidos a la organización y funcionamiento de las federaciones deportivas españolas, sin perjuicio de las facultades de control a que se refiere el artículo 45 de esta Ley para el Consejo Superior de Deportes, tendrán naturaleza privada.

2. Las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales podrán establecer en sus Estatutos, reglamentos o mediante acuerdos de la Asamblea General la aplicación de un sistema común de carácter extrajudicial de solución de conflictos con los requisitos que se determinen reglamentariamente, entre los que figurará un sistema de publicidad de su contenido y el derecho de los agentes a manifestar su aceptación al sistema de forma libre, voluntaria y expresa, excluyéndose la imposición del mismo. Si fuera un sistema de carácter internacional se establecerá, expresamente, una forma para la ejecución de los laudos o acuerdos que puedan adoptarse.

En caso de conflictos suscitados en el ámbito electoral de las federaciones deportivas, las partes podrán hacer uso del sistema previsto en el párrafo anterior. No obstante, será imprescindible acudir



al Tribunal Administrativo del Deporte con carácter previo a la interposición de una demanda de arbitraje.

3. Los laudos o acuerdos que puedan adoptarse en el marco del sistema extrajudicial de solución de conflictos a que se refiere el apartado anterior podrán ser objeto de anulación ante la jurisdicción civil en los términos previstos en el Título VII de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y en el artículo 23.4 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, respectivamente.

4. Los tribunales del orden civil serán competentes para conocer de los siguientes asuntos:

a) Conflictos privados derivados de actos de las federaciones deportivas españolas, dictados en el marco del presente artículo.

b) Acciones civiles interpuestas en defensa de la legalidad del ordenamiento deportivo o constitucional; en defensa de la regularidad esencial del procedimiento electoral para el nombramiento de la Asamblea General y de la Presidencia de una federación deportiva española; o en defensa de los derechos fundamentales de los agentes deportivos que hayan sido lesionados por decisiones o actos de las federaciones españolas.

No obstante lo anterior, aquellos conflictos que afecten al procedimiento electoral deberán ser dirimidos por el Tribunal Administrativo del Deporte con carácter previo a la interposición de las acciones a las que se refiere este apartado.

5.- El Consejo Superior de Deportes estará legitimado para la interposición de cualesquiera acciones de las indicadas en la letra b) del apartado anterior, sin perjuicio de la legitimación propia que pudiera corresponder a la persona o entidad perjudicada por la actuación o decisión de la federación española que haya provocado el conflicto.

CAPÍTULO III

Tribunal Administrativo del Deporte

Artículo 128.- Tribunal Administrativo del Deporte

1. El Tribunal Administrativo del Deporte es un órgano de ámbito estatal que actúa con independencia funcional de la Administración General del Estado, y que asume las siguientes funciones:

a) Decidir en vía administrativa y en última instancia, las cuestiones disciplinarias deportivas de su competencia, incluidas las señaladas en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.

b) Tramitar y resolver expedientes sancionadores a instancia del Consejo Superior de Deportes, en los supuestos específicos a que se refiere el artículo 112.2 de la presente Ley.

c) Cualesquiera otras que se le atribuyan en esta Ley o en su normativa reguladora.



2. Su composición, organización y funciones se desarrollarán reglamentariamente. En todo caso, su composición se ajustará al criterio de composición equilibrada establecido en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La designación de los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte se hará siguiendo criterios de objetividad y con arreglo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Será aplicable a los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. La persona que ostente la Presidencia del Consejo Superior de Deportes deberá acordar el cese, mediante expediente contradictorio, de los miembros que intervengan en los asuntos mencionados en este párrafo, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales en las que hayan podido incurrir.

3. El procedimiento de tramitación y resolución de los expedientes que conozca el Tribunal Administrativo del Deporte se ajustará, con carácter supletorio, a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. Las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte agotan la vía administrativa cuando no resuelvan conflictos de naturaleza electoral y se ejecutarán a través de la correspondiente federación deportiva española o liga profesional, que será responsable de su estricto y efectivo cumplimiento.

Frente a las resoluciones que agoten la vía administrativa se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de acuerdo a lo que establece la letra f) del artículo 9.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

TÍTULO IX

De la planificación de las instalaciones deportivas al servicio del deporte

Artículo 129.- *Medios para el fomento de la construcción de instalaciones deportivas de interés estatal*

1. El desarrollo de competiciones de carácter estatal y la participación del deporte español en la actividad internacional se consideran un elemento estratégico de la política deportiva del Estado.

Como consecuencia de lo anterior, la Administración General del Estado establecerá mecanismos de fomento en materia de instalaciones deportivas, tanto para el desarrollo de competiciones de carácter estatal, como para la celebración en España de actividades y acontecimientos internacionales estableciendo, en la medida de lo posible, las formas de colaboración en las mismas del resto de agentes públicos y privados.

2. Específicamente, la Administración General del Estado fomentará el desarrollo de políticas públicas orientadas a la construcción, conservación y reparación de las instalaciones asociadas tanto a competiciones de carácter estatal como a grandes acontecimientos en los que se celebren competiciones de carácter internacional y de notable relevancia deportiva e interés estatal.

Artículo 130.- *Red de Centros de Alto Rendimiento y de Tecnificación Deportiva*



1. La Red de Centros de Alto Rendimiento y de Tecnificación Deportiva es el conjunto de Centros reconocidos por el Consejo Superior de Deportes que garantizan, a través de sus Programas Deportivos, la preparación técnico-deportiva de las personas deportistas tanto en el ámbito de la alta competición como en el proceso de tecnificación.

2. El Consejo Superior de Deportes coordinará, junto a las Comunidades Autónomas y a las federaciones deportivas españolas, la Red de Centros de Alto Rendimiento y de Tecnificación Deportiva.

3. Cada centro dispondrá de una denominación de acuerdo con unos criterios de clasificación que se establecerán en función del interés, estatal o autonómico, los objetivos deportivos, la calidad de las instalaciones y servicios, los medios disponibles, los programas deportivos y los departamentos o unidades específicas para los que han sido creados.

Artículo 131.- *Centros de alto rendimiento y centros de tecnificación*

1. Se consideran centros de alto rendimiento aquellas instalaciones de carácter polideportivo en las que la Administración General del Estado, de forma aislada o en coordinación con otras Administraciones Territoriales, desarrolla la preparación deportiva del más alto nivel de las personas deportistas.

2. Se consideran centros de tecnificación deportiva aquellas instalaciones de carácter polideportivo en las que una Administración Pública, aislada o en coordinación con otras, atiende el perfeccionamiento de las personas deportistas y cuya actividad se desarrolla fundamentalmente en el ámbito autonómico.

3. Como complemento a los centros descritos en los apartados anteriores se reconocen los centros especializados de alto rendimiento y los centros especializados de tecnificación deportiva como instalaciones cuyo titular es una Administración Territorial, una federación deportiva o varias de ellas conjuntamente, con el objetivo de desarrollar la preparación de modalidades o especialidades deportivas que, por su particularidad, medio en el que se realizan o por circunstancias diversas, no pueden ser atendidos en los centros descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo.

4. Corresponde al Consejo Superior de Deportes el reconocimiento de estas categorías a los efectos de su incorporación al sistema deportivo y, especialmente, de percepción de ayudas por la actividad que realizan.

5. El Consejo Superior de Deportes establecerá un conjunto de reglas para homogeneizar la labor y la función de las instalaciones indicadas y para su incorporación al sistema de ayudas públicas estatales.

Artículo 132.- *Instalaciones deportivas*

1. En consonancia con lo dispuesto en la letra g) del artículo 18 de esta Ley, desde la Conferencia Sectorial de Deporte se arbitrarán los instrumentos para:

a) Realizar los estudios necesarios para una planificación ordenada y utilización eficiente de las instalaciones deportivas-



b) Establecer un marco de utilización y de puesta a disposición común del conjunto de las instalaciones deportivas, incluyendo las de carácter escolar y universitario, que propicie una mayor disponibilidad de las mismas al conjunto de las personas que realizan una actividad deportiva.

c) Desarrollar políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad, la accesibilidad, la sostenibilidad, la mejora de la gestión, así como las condiciones reglamentarias y de diseño de las instalaciones deportivas, especialmente en aquellas en las que se celebren competiciones de carácter oficial de las federaciones deportivas, o que reciban ayudas públicas para su construcción o mantenimiento.

2. El Consejo Superior de Deportes gestionará un censo de instalaciones deportivas a nivel estatal y, en coordinación con las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Entidades Locales, establecerá un sistema de incorporación de los datos de estas, que pondrá a disposición del conjunto de Administraciones Territoriales para la adecuada planificación de sus respectivas políticas y la utilización eficiente de las instalaciones.

Disposición adicional primera.- Especificaciones o graduaciones en infracciones o sanciones

Las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la presente Ley podrán introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones establecidas en esta Ley que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que en ella se contemplan, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes.

En el caso de personas menores de edad y atendiendo a la finalidad educativa de la sanción, se podrán establecer medidas sustitutivas de las sanciones, atendiendo a su edad y a sus circunstancias personales.

Disposición adicional segunda.- Seguros deportivos

Reglamentariamente se fijarán las prestaciones que deben cubrir los seguros que suscriban los obligados por esta Ley a ello, que garantizarán suficientemente los riesgos derivados de la práctica deportiva tanto durante la competición como durante los entrenamientos preparatorios, así como la libertad para decidir, dentro de los límites del seguro obligatorio, los demás aspectos de las coberturas a contratar y la aseguradora con la que se contrate.

Los límites cuantitativos que se establezcan en la norma reglamentaria deberán ser revisados periódicamente mediante Orden del Ministerio con competencia en materia deportiva, previo informe de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Disposición adicional tercera.- Legitimación para negociar convenios colectivos

En los convenios colectivos dirigidos a las personas deportistas profesionales, estarán legitimadas para negociar las organizaciones sindicales constituidas en cada modalidad o especialidad deportiva que hayan sido designadas mayoritariamente por sus personas representadas a través de votación personal, libre, directa y secreta.



Por su parte, cuando se trate de convenios colectivos de ámbito superior al de empresa, estarán legitimadas las ligas profesionales existentes, en su caso, en cada modalidad o especialidad deportiva, y en defecto de estas las asociaciones empresariales que cuenten con la suficiente representatividad en el ámbito de aplicación del convenio.

Disposición adicional cuarta.- Legitimación de las asociaciones y sindicatos de deportistas en situaciones concursales

Las asociaciones y sindicatos de deportistas con legitimación en virtud de lo dispuesto en la Disposición adicional tercera de esta Ley tendrán capacidad para representar a las personas deportistas en los procedimientos contemplados en los artículos 64 y 66 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, cuando el concurso afecte a una entidad que tenga contratadas personas deportistas profesionales.

Disposición adicional quinta.- Infracciones y sanciones en materia de dopaje y de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia

El régimen de infracciones y sanciones que pueden imponerse en materia de dopaje en la actividad deportiva y de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia será el que establecen la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva y la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, respectivamente.

Asimismo el sistema de recursos será el establecido en dichas leyes.

Disposición adicional sexta.- Regulación de las profesiones del deporte

El Estado aprobará una Ley que regule el ejercicio de las profesiones del deporte, dentro de sus competencias, estableciendo los derechos y obligaciones de los profesionales y los requisitos para el desarrollo de aquellas.

En todo caso, se reconoce como personas educadoras de modalidades y, en su caso, especialidades deportivas, a aquellas personas que disponen de una titulación oficial o certificado de profesionalidad equivalente que les habilite para ello.

Disposición adicional séptima.- Incentivos al patrocinio y mecenazgo deportivos

El Estado aprobará una Ley que establezca un sistema de incentivos al patrocinio y mecenazgo deportivos con el objetivo de fomentar la participación privada en la financiación y desarrollo del deporte.

Disposición adicional octava.- Actualización de importes

La cuantía de las sanciones establecidas en la presente Ley podrá ser actualizada periódicamente a través de Real Decreto de acuerdo con la variación anual del índice de precios al consumo.

Disposición adicional novena.- Adaptación normativa



Todas aquellas cuestiones que el ordenamiento jurídico establece para clubes y sociedades anónimas deportivas por el hecho de ser participantes en competiciones profesionales y que no guarden relación con la regulación de su estatus jurídico se entenderá que incluyen a todas las entidades deportivas participantes en dichas competiciones, con independencia de su forma jurídica.

Disposición adicional décima.- *Aplicación del régimen sancionador de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte*

En los artículos del Título III de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que hacen referencia a competiciones profesionales, se entenderán incluidas las profesionalizadas que así sean calificadas por el Consejo Superior de Deportes de acuerdo a lo previsto en esta Ley.

Disposición adicional undécima.- *Reconocimiento de la confederación*

Las federaciones deportivas españolas podrán constituir, previo acuerdo de sus respectivas Asambleas Generales, una confederación como órgano de representación y defensa de sus intereses comunes.

A tal efecto, será necesario que esté formada por más de la mitad de las federaciones deportivas españolas inscritas en el Registro de Entidades Deportivas que representen a más de la cuarta parte de las personas con licencia deportiva, estatal o autonómica, en todo el territorio nacional.

La constitución de la confederación requerirá su inscripción en el Registro de Entidades Deportivas, previo procedimiento que se determinará reglamentariamente.

Esta entidad podrá ser declarada de utilidad pública.

Disposición adicional duodécima.- *Alcance de las obligaciones de localización de las personas deportistas*

Las obligaciones de localización, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 11.2 de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, y con el artículo 5.7 del Código Mundial Antidopaje, alcanzarán a las personas deportistas que, integradas en el grupo de seguimiento en el momento de su retirada, comuniquen con posterioridad su voluntad de volver a la competición.

Esta incorporación al grupo de seguimiento y la consiguiente obligación de proporcionar los datos de localización se producirán desde la notificación a la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte del propósito de volver a competir hasta la participación en ella, y en todo caso, durante los seis meses anteriores a la participación en una competición nacional o internacional. Esta previsión se entiende sin perjuicio de la permanencia de la persona deportista en el grupo de seguimiento después de la participación en la competición nacional o internacional si así se acordase por la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte. A tal efecto, la persona deportista deberá comunicar su voluntad de regresar a la competición al menos seis meses antes de que esta se produzca. La Agencia Mundial Antidopaje, previa consulta con la correspondiente federación internacional y la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte, podrá



conceder una exención a la obligación de comunicar por escrito con una antelación de seis meses la vuelta a la competición si la estricta aplicación de la misma es manifiestamente injusta para la persona deportista. Esta decisión podrá ser recurrida según lo dispuesto en el Código Mundial Antidopaje.

Dicha cantidad podrá ser modificada por el Gobierno reglamentariamente.

Disposición derogatoria única.- Normas objeto de derogación

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley y, en particular:

- La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

- El Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, a excepción de lo dispuesto en su Sección 3ª.

- La disposición adicional segunda bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Disposición transitoria primera.- Entes de promoción deportiva

Los Entes de Promoción Deportiva que existan al momento de aprobación de la presente Ley mantendrán su actividad y su funcionamiento hasta su extinción en la forma que prescribía la normativa conforme a la que fueron reconocidos.

Disposición transitoria segunda.- Adaptación de la normativa interna de las entidades deportivas

Las entidades deportivas contempladas en el Título III de esta Ley deberán adaptar su normativa interna dentro del plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley.

Disposición transitoria tercera.- Clubes deportivos estatales

Los clubes deportivos elementales o básicos constituidos de acuerdo a la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, deberán adaptarse a lo dispuesto en el artículo 68, en el lugar donde radique su sede, dentro del plazo de un año desde a la entrada en vigor de esta Ley.

Disposición transitoria cuarta.- Secciones del Registro de Entidades Deportivas

En tanto siga vigente la distribución por secciones prevista en el Capítulo XI del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas, se creará una sección específica para la inscripción de la confederación prevista en esta Ley.

Disposición final primera.- Títulos competenciales

1. Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.1º de la Constitución, en el ámbito de competencias de la Administración General del Estado en los términos del artículo 1.1 de esta Ley, a excepción de lo dispuesto en los apartados siguientes.

2. El Título I y los artículos 124.2, 126 y 128 solo serán de aplicación a la Administración General del



Estado.

3. Los artículos 8, 52.2 y 53.5 se dictan al amparo del artículo 149.1.2º de la Constitución.

4. Los artículos 11 y 85 se dictan al amparo del artículo 149.1.3º de la Constitución.

5. La Subsección 2ª de la Sección 2ª del Capítulo V del Título III, el artículo 99 y las disposiciones adicional segunda, cuarta y séptima se dictan al amparo del artículo 149.1.6º de la Constitución.

6. El artículo 37 y las disposiciones adicionales tercera, cuarta y sexta se dictan al amparo del artículo 149.1.7º de la Constitución. En el caso del artículo 37 también se dicta al amparo del artículo 149.1.13º de la Constitución.

7. La disposición adicional segunda y la disposición final segunda se dictan al amparo del artículo 149.1.14º de la Constitución.

8. Los artículos 13 v) y 39.1, así como el segundo párrafo de la disposición adicional sexta se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30º de la Constitución.

Disposición final segunda.- Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio

Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:

Uno. Se modifica la letra m) del artículo 7, que queda redactada de la siguiente forma:

«m) Las ayudas de contenido económico a los deportistas de alto nivel ajustadas a los programas de preparación establecidos por el Consejo Superior de Deportes con las federaciones deportivas españolas o con el Comité Olímpico Español, con el límite de 75.000 euros anuales, en las condiciones que se determinen reglamentariamente».

Dos. Se modifica la letra a) del apartado 5 del artículo 101, que queda redactada de la siguiente forma:

«a) El 15 por ciento, en el caso de los rendimientos de actividades profesionales establecidos en vía reglamentaria.

No obstante, se aplicará el porcentaje del 7 por ciento sobre los rendimientos de actividades profesionales que se establezcan reglamentariamente, entre los que se encontrarán los premios obtenidos por deportistas en competiciones deportivas.

Estos porcentajes se reducirán en un 60 por ciento cuando los rendimientos tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.»

Tres. Se modifica el apartado 1 del número Uno de la disposición adicional undécima, que queda



redactada de la siguiente forma:

«1. Ámbito subjetivo. Se considerarán deportistas profesionales y de alto nivel las personas así definidas por la Ley XX/XX del Deporte.

La condición de mutualista y asegurado recaerá, en todo caso, en el deportista profesional o de alto nivel»”.

Disposición final tercera.- *Modificación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte*

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte:

Uno. Se modifica el párrafo 1 del Preámbulo, que queda redactado de la siguiente forma:

“Existe una radical incompatibilidad entre deporte y violencia, cualquier forma de violencia, incluida la verbal o aquella otra más sutil, fundamentada en la trampa, el engaño y el desprecio del juego limpio. Desde hace décadas esta idea central orienta el trabajo que, de forma concertada, vienen desarrollando la Unión Europea y sus instituciones, los poderes públicos competentes en materia de deporte de cada uno de sus países miembros, así como el Comité Olímpico Internacional y las distintas organizaciones que conforman el sistema deportivo internacional. El objetivo central que cohesiona la acción diversificada de tan amplio espectro de actores públicos y privados es erradicar la violencia del deporte, además de prevenir, controlar y sancionar con rigor cualquier manifestación violenta en el ámbito de la actividad deportiva, muy especialmente cuando adquiere connotaciones de signo racista, sexista, xenófobo o intolerante”.

Dos. Se modifica el artículo 2.2, que queda redactado de la siguiente forma:

“2. Actos racistas, sexistas, xenófobos o intolerantes en el deporte:

a) La realización de actos en que, públicamente o con intención de amplia difusión, y con ocasión del desarrollo de una prueba, competición o espectáculo deportivo, o próxima su celebración, una persona física o jurídica emita declaraciones o transmita informaciones en cuya virtud una persona o grupo de ellas sea amenazada, insultada o vejada por razón del origen racial, étnico, geográfico o social, así como por la religión, las convicciones, la discapacidad, la edad, el sexo o la orientación sexual.

b) Las actuaciones que, con ocasión del desarrollo de una prueba, competición o espectáculo deportivo o próxima su celebración, o en los recintos deportivos, en sus alrededores, o en los medios de transporte públicos en los que se pueda desplazar a los recintos deportivos, supongan acoso, entendiéndose por tal toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, geográfico o social, así como la religión o convicciones, discapacidad, edad, sexo u orientación sexual de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo.



c) Las declaraciones, gestos o insultos proferidos en los recintos deportivos con motivo de la celebración de actos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte públicos en los que se puedan desplazar a los mismos, que supongan un trato manifiestamente vejatorio para cualquier persona por razón de su origen racial, étnico, geográfico o social, así como por la religión, las convicciones, la discapacidad, edad, sexo u orientación sexual así como los que inciten al odio entre personas y grupos o que atenten gravemente contra los derechos, libertades y valores proclamados en la Constitución.

d) La entonación, en los recintos deportivos con motivo de la celebración de actos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte públicos en los que se puedan desplazar a los mismos, de cánticos, sonidos o consignas así como la exhibición de pancartas, banderas, símbolos u otras señales, que contengan mensajes vejatorios o intimidatorios, para cualquier persona por razón del origen racial, étnico, geográfico o social, por la religión, las convicciones, su discapacidad, edad, sexo u orientación sexual, así como los que inciten al odio entre personas y grupos o que atenten gravemente contra los derechos, libertades y valores proclamados en la Constitución.

e) La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales, informáticos o tecnológicos que den soporte, inciten o ayuden a personas o grupos de personas a realizar en los recintos deportivos con motivo de la celebración de actos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte públicos en los que se puedan desplazar a los mismos, los actos enunciados en los apartados anteriores.

f) La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales, informáticos o tecnológicos a las personas y grupos que promuevan los comportamientos racistas, sexistas, xenófobos e intolerantes en el deporte, así como la creación y utilización de soportes digitales con la misma finalidad”.

Disposición final cuarta.- *Desarrollo normativo*

Se habilita al Gobierno para el desarrollo reglamentario de esta Ley.

Disposición final quinta.- *Entrada en vigor*

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

ELÉVESE AL CONSEJO DE MINISTROS

Madrid, a 30 de enero de 2019

El Ministro de Cultura y Deporte

José Guirao Cabrera